

DISPUTAS EN TORNO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Valores, proyectos e imágenes en tensión



SERGIO CAGGIANO
ELIZABETH JELIN
(DIRECTORES)

t
teseo

DISPUTAS EN TORNO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

DISPUTAS EN TORNO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Valores, proyectos e imágenes
en tensión

Sergio Caggiano
Elizabeth Jelin
(directores)

teseo 

Disputas en torno a la tierra y el territorio: valores, proyectos e imágenes en tensión / Sergio Caggiano... [et al.]; dirigido por Sergio Caggiano; Elizabeth Jelin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, 2022. 214 p.; 20 x 13 cm.

ISBN 978-987-723-338-4

1. Ecología. 2. Migración. 3. Desarrollo Industrial. I. Caggiano, Sergio, dir. II. Jelin, Elizabeth, dir.

CDD 323.01

© Editorial Teseo, 2022

Buenos Aires, Argentina

Editorial Teseo

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escribanos a: **info@editorialteseo.com**

www.editorialteseo.com

ISBN: 9789877233384

Imagen de tapa: “Bolivia, Salar de Uyuni, 20°32’54.95”S 67°22’36.33”O, 30 Abr 2019. 2021” (2022) de la serie “Land [2] Lito”, de Marcela Magno.

Las opiniones y los contenidos incluidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva del/los autor/es.

TeseoPress Design (www.teseopress.com)

ExLibrisTeseoPress 130307. Sólo para uso personal

teseo.com

Índice

Introducción	9
<i>Sergio Caggiano y Elizabeth Jelin</i>	
1. El puesto y la cigüeña. Proyectos de territorio en fricción al norte de la provincia de Río Negro.....	29
<i>Ana Catania Maldonado, Laura Mombello y Ana Spivak L'Hoste</i>	
2. Llamas, brasas y cenizas (y la tierra aún caliente). Montajes y figuraciones posibles entre imágenes, tiempo y territorio	67
<i>Agustina Triquell</i>	
3. La coproducción transnacional de la Pachamama. Cambio climático y saberes indígenas en los discursos de Evo Morales en Naciones Unidas (2006-2010).....	95
<i>Federico Rodrigo</i>	
4. Puna N1 ≠ Puna N2. Minería litífera y campos de interlocución en la puna jujeña	121
<i>Gonzalo Federico Zubia</i>	
5. Preparados, ferias y bolsones: agroecología, un horizonte de innovación en el sector hortícola del Gran La Plata	159
<i>Candela Victoria Díaz y Darío Martínez</i>	
6. Hortalizas, cuerpos y trabajo. La agroecología como discusión de las relaciones sociales de producción	183
<i>Sergio Caggiano</i>	

Introducción

SERGIO CAGGIANO Y ELIZABETH JELIN

Los proyectos iniciales

¿Qué tiene que ver la fotografía de un incendio en la sierra cordobesa con la producción agroecológica en el cinturón de La Plata?, ¿un puesto de estepa patagónica yerma con un discurso de Evo Morales?, ¿la introducción de la extracción de litio en una salina de Jujuy con las imágenes en una página web de una empresa productora de verduras orgánicas en el área de La Plata? Son situaciones, experiencias, historias, imágenes y objetos muy diversos. Se habla de tierra, de prácticas productivas, de proyectos inmobiliarios y productivos, de disputas, de materialidades, de historia, de imágenes, de localidades situadas en el tiempo y en el espacio. Todas las situaciones que se presentan tienen espacio, y todas tienen tiempo. Largo y corto. Grande y pequeño, con vínculos entre lo microsociedad y las grandes cuestiones que afectan al mundo entero.

Este libro nace de los hallazgos de dos proyectos de investigación vinculados, *Luchas sociales por la apropiación y uso de espacios y recursos y Tierra, trabajo y relaciones sociales*¹. En ellos nos preguntamos cómo distintos actores, ubicados en espacios y conflictos diversos, se posicionan en ciertos escenarios espacio-temporales, cuáles son las estrategias de

¹ Se trató, respectivamente, de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) seleccionado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) para recibir apoyo a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), y de un Proyecto de Investigación Orientado (PIO), seleccionado y aprobado para recibir financiamiento por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

legitimación de sus demandas y qué uso hacen de las imágenes visuales, junto con los discursos verbales. El tema sustantivo se refiere a las prácticas y las confrontaciones alrededor de los usos y las apropiaciones de espacios, conflictos que tienen como objeto la propiedad de la tierra, así como el usufructo de materias y propiedades que algunos actores consideran “recursos” –tierra, agua, energía, aire–. Aborda también conflictos que no se desarrollan necesariamente a partir de un lenguaje común, por ejemplo el jurídico, para establecer derechos de propiedad o usufructo, sino que precisamente ponen en discusión los lenguajes y las categorías a partir de los cuales definir el vínculo con la tierra y el territorio, su uso, ocupación o recorrido. En estas disputas se enfrentan diferentes maneras de proponer el bienestar económico o el buen vivir, de proyectar la protección y el cuidado de la tierra o de la Tierra, la reproducción de la vida, etc.

En términos conceptuales, enfocamos la dimensión espacial (y su entrelazamiento con la temporalidad) en tales procesos de confrontación y lucha. Las espacialidades no únicamente como marco donde ocurren los fenómenos sociales, sino en cuanto construcciones sociales que inciden en los procesos, como elementos constitutivos de las luchas. Metodológicamente, nos preguntamos por el papel de las imágenes en estos procesos. Intentamos comprender la manera en que distintos agentes recurren a ellas, al lado de los discursos verbales y otros soportes materiales (objetos, edificios, marcaciones espaciales, etc.), en la conformación de sus posiciones para reclamar por derechos y recursos.

De los proyectos al libro

Siempre hay cambios y ajustes a lo largo del desarrollo de proyectos de investigación. La realidad se mueve. Pandemia, incendios, dificultades para el trabajo de campo, nuevas preguntas

urgentes, etc. Todo eso se refleja en estos textos e imágenes y en esta introducción.

Con una excepción (el trabajo de Federico Rodrigo), cada capítulo del libro está centrado en una localidad, en un espacio donde se desenvuelve una dinámica social de confrontación alrededor de la apropiación de bienes y recursos, y refleja la diversidad de concepciones y visiones que tienen lxs participantes de dichas confrontaciones. El trabajo de Rodrigo, por su parte, sigue las intervenciones del gobierno de un Estado periférico (Bolivia) y su diálogo con organizaciones de base que, como las de los escenarios anteriores, tematizan el cuidado de la Tierra y de los saberes tradicionales como valores cruciales en juego en esas disputas.

El capítulo 1, “El puesto y la cigüeña...”, de Maldonado, Spivak L’Hoste y Mombello, indaga materialidades y temporalidades en fricción entre diferentes proyectos de territorio. A partir del análisis del conflicto, que se dirime en la arena jurídica, por los derechos sobre la tierra entre la comunidad mapuche Newen Kurruf y particulares que detentan el carácter de propietarios del mismo predio, se desagregan las especificidades de cada proyecto de territorio y sus interacciones en la zona de Catriel, provincia de Río Negro. Estos proyectos se expresan en el puesto (referencia territorial de la comunidad) y la cigüeña (unidad de bombeo de pozos de petróleo, instalación típica de la industria hidrocarburífera). A lo largo de las décadas, estos proyectos con temporalidades y ritmos diversos, pero siempre solapándose en roce o fricción, fueron modelando los espacios y dando forma, paralelamente, a los procesos, las vidas y los sentidos que se produjeron –y que se siguen produciendo– en torno a ellos. Derivados de esta experiencia empírica particular, los proyectos resultan especialmente relevantes. Tanto aquel que hace a las lógicas de uso y significación del espacio de la comunidad que ocupa de manera tradicional el puesto, como el proyecto de territorio que imagina y produce la infraestructura de la industria hidrocarburífera en la región. El enfrentamiento judicial entre la

comunidad y los particulares exacerba las asimetrías de las agencias involucradas en esos proyectos territoriales.

El texto de Agustina Triquell, “Llamas, brasas y cenizas (y la tierra aún caliente)...”, se propone mirar cómo diferentes actores configuran imaginarios de futuro a través del uso de imágenes cartográficas, fotográficas y digitales, y cómo elaboran consignas para aparecer en el espacio público. También propone analizar qué prioridades, especulaciones, saberes y valoraciones se disputan en las imágenes que se producen, circulan y consumen en relación con dos acontecimientos –una catástrofe natural provocada intencionalmente (los incendios de agosto y septiembre de 2020) y el proyecto de realización de una autovía (variante ruta 5) aprobado recientemente por el gobierno provincial en el Valle de Paravachasca (Córdoba)– y los modos en que las organizaciones socioambientales gestionan una relación entre ambos a través de ellas. El objetivo es construir figuraciones –la imagen-llama, la imagen-brasa, la imagen-ceniza– que permitan ubicar las relaciones existentes entre imágenes de diferentes registros, procedencias y temporalidades a través del modo en que distintos actores las significan y entran narrativamente en sus apariciones públicas. Figuraciones posibles del tiempo y de las disputas en torno a los acontecimientos que afectan al territorio. Sus usos y sentidos proponen diferentes modos de hacer: arden con lo real, como registro indicial del acontecimiento, arden en movimiento, puestas en circulación, convirtiéndose en llamamiento, pero también como proyección hacia un afuera, como un resplandor que se proyecta en múltiples relatos de la experiencia vivida hacia fuera del territorio.

El capítulo de Federico Rodrigo, “La coproducción transnacional de la Pachamama...”, trae al proyecto una mirada en otra escala, que intersecta lo local con lo global. El trabajo analiza la articulación discursiva entre “vivencias” originarias y problemáticas ligadas a la agenda ambiental global que realizó Evo Morales en sus participaciones en foros y cumbres de Naciones Unidas y “de los

pueblos” entre 2006 y 2010. A partir del análisis de sus presentaciones, reconoce la emergencia de figuras como la Pachamama y la distinción entre modos indígenas y occidentales en la relación humano-naturaleza, en el marco de diversos conflictos vinculados al posicionamiento de Bolivia en las relaciones internacionales. En esos ámbitos, las alusiones a prácticas originarias forman parte de la impugnación de una lógica que combina y relaciona un modo de explotación capitalista, imperialista y colonial. En este sentido, definiciones como la de “vivir bien” y la metafórica materna del planeta son planteadas como una reestructuración civilizatoria que se reactualiza en clave global y nacional, además de comunitaria.

En el capítulo 4, “Puna N1 ≠ Puna N2...”, Gonzalo Zubía centra la atención en la puna jujeña y el litio. La explotación de litio iniciada allí en 2014 generó un conjunto de acciones colectivas por parte de las comunidades indígenas alrededor de las Salinas Grandes, que denunciaron tareas de prospección minera en sus territorios comunitarios y la falta de consulta previa e informada. El repertorio de acciones colectivas dio visibilidad a los cambios que la exploración y explotación de litio estaba generando en la zona. En este contexto, las investigaciones que se ocuparon de estudiar este caso parten de la hipótesis del *aterrizaje* de la minería en la zona, es decir, del impacto del emplazamiento de complejos fabriles sobre lo que asumen como unidad y homogeneidad territorial de la puna. A fin de ampliar este campo de indagación, el trabajo problematiza la hipótesis del aterrizaje minero y propone, en cambio, considerar microprocesos que los emprendimientos mineros están generando en la zona y su correlación con otros procesos como la migración. El trabajo ofrece, además, un análisis situado de las subregiones de la puna, distinguiendo la complejidad de cada una. Más que considerar dos proyectos territoriales en disputa –el minero y el local–, el trabajo propone observar las zonas de contactos y los campos de interlocución y, entre ellos, las evidencias situadas acerca de cómo transiciona el paisaje puneño.

Hay dos capítulos, por último, anclados en una misma espacialidad y en la incorporación de nuevas formas de producción, la agroecología en el cinturón hortícola del Gran La Plata. En esa zona, la agroecología se presenta como un conjunto de prácticas que tensionan, antagonizan y se mezclan con otras provenientes de la agricultura convencional y de la orgánica. El texto “Preparados, ferias y bolsones...”, de Candela Díaz y Darío Martínez, se interroga sobre los procesos de innovación en la producción agrícola. Partiendo de un análisis que pone en relación los movimientos de sustracción y añadidura de diferentes elementos y actorxs, se atiende a las valoraciones que lxs productorex ponen en juego, junto a técnicxs y profesionales, para así dar cuenta de la configuración de una modalidad alternativa de producción y comercialización. El texto muestra que el pasaje a esta forma de producción es el resultado de múltiples factores que interactúan en el escenario, desde condiciones climáticas adversas y precios dolarizados de insumos hasta la intervención de técnicxs e instituciones promotoras de estas formas productivas que introducen otras valoraciones como la salud y el cuidado de la tierra.

El capítulo “Hortalizas, cuerpos y trabajo...”, de Sergio Caggiano, estudia los lenguajes de valoración que motoriza la agroecología e intenta comprender los retos sociales y productivos que plantea. En algunos contextos la defensa de la agroecología toma la forma del discurso sanitario y de cuidado de la salud y el ambiente. En otros sobresale la reivindicación de saberes ancestrales y del respeto por la Madre Tierra o la Pachamama. Estos valores conviven con cálculos de costos y estimaciones del tiempo de trabajo necesario para la producción, así como con consideraciones sobre el tipo de relaciones laborales y sociales en general. El capítulo concentra la atención en lxs productorex hortícolas migrantes, las organizaciones sociales que lxs nuclean y algunxs profesionales del Estado que promueven y llevan adelante la agroecología, así como en sus diálogos con aliadxs y contrincantes, analizando prácticas, discursos

verbales e imágenes visuales con distinto grado de exposición pública. En términos metodológicos, el análisis recursivo entre texto e imagen permite explorar las múltiples capas de sentido que conviven en el impulso a la agroecología. No se trata de la simple coexistencia de lenguajes de valoración alternativos, sino de articulaciones específicas que los jerarquizan en una intervención sociopolítica que problematiza, en última instancia, el sistema de producción y comercialización de alimentos en su conjunto.

Cruces y convergencias

Más allá de sus respectivas particularidades, el tratamiento de los casos en los diferentes capítulos se estructura a partir de preguntas formuladas dentro de dos horizontes problemáticos.

Espacios y movilidades

Partimos del espacio como una producción social, lo que quiere decir que es resultado de procesos materiales y de prácticas que producen y reproducen la vida social (Harvey, 1998), lo cual implica, a su vez, que la configuración del espacio involucra conflictos sociales de distinta naturaleza (Lefebvre, 2013). El espacio es relacional, construido y múltiple (Massey, 2005), lo cual abre preguntas acerca de cómo las pujas en torno a la tierra producen espacios. En cuanto que interacción, todo proceso conflictivo se da sobre un espacio definido previamente al cual, a su vez, afecta. Las disputas circunscriben espacios, producen demarcaciones o cuestionan demarcaciones anteriores, definen formas de apropiación y de propiedad del espacio. También las interrelaciones sociales determinan usos legítimos o ilegítimos de ciertos predios. El descubrimiento de un “recurso natural” (que supone la instalación de todo un aparato conceptual), por ejemplo, puede ocasionar que un polígono

sea destinado a su explotación. También las interrelaciones sociales y políticas definirán los límites del uso de la tierra para producir, para residir, para recreo, para preservación de la naturaleza, etc. Por otra parte, al tiempo que el espacio es socialmente producido, es “parte integral de la producción de la sociedad” (Massey, 2005: 123). Es decir, como parte de los mencionados procesos de apropiación material y simbólica, es un componente de los procesos identitarios y de las diferenciaciones sociales.

Una primera característica del espacio, considerado producto de la dinámica relacional, es estar constituido por múltiples capas. Este rasgo, presente en todos los capítulos del libro, motoriza las preguntas en algunos de ellos. Maldonado, Mombello y Spivak L’Hoste, por ejemplo, muestran cómo, en la disputa por tierras de la que participan familias, dependencias estatales y empresas petroleras en el norte de Río Negro, las memorias y prácticas de ocupación originaria conviven con los permisos de ocupación y escrituras de propiedad. Por otro lado, a los recortes que en el territorio dibujara la trashumancia ganadera, se superimprimieron los cercos de alambrado, primero como parte de la modernización de esa actividad y luego como organización del espacio para la explotación hidrocarburífera. Zubía, a su vez, en su trabajo sobre la explotación del litio en Jujuy, aborda directamente el anudamiento de dos operaciones de organización oficial del espacio, la que asigna derechos por capas sobre un corte topográfico vertical y la que delimita polígonos en la superficie (lotes privados o públicos, territorios comunitarios indígenas, jurisdicciones municipales, provinciales, nacionales, etc.). Sobre el eje vertical, las capas de polígonos superpuestas pueden coincidir, pero pueden también discrepar. En los textos de Caggiano y de Díaz y Martínez, se entrevé, sobre el espacio en permanente cambio del cordón verde hortícola de La Plata, la dinámica de espacios transnacionales que lxs migrantes sostienen con la circulación de personas, mercancías, afectos, conocimiento e información. Estos espacios se producen y reproducen

informalmente más allá y más acá de las fronteras interprovinciales e internacionales y se articulan con ellas.

Para cualquiera de los casos, sigue siendo válida la advertencia de Lefebvre (2013) acerca de la imposibilidad de contar con todos los mapas que pudieran dar cuenta de los múltiples sentidos de estos espacios sociales, de las diversas capas intercaladas y combinadas que los conforman. Resulta válida también la sugerencia de Brenner de recorrer estas capas procurando identificar procesos de escalamiento y reescalamiento que no agotan los lugares, los territorios y las redes (Brenner, 2017). ¿Cómo pensar en esta clave las intervenciones de un líder político indígena como Evo Morales –y del Estado boliviano bajo su conducción–, su defensa de la Madre Tierra y la naturaleza y su reivindicación de prácticas presentadas como parte de saberes tradicionales indígenas? El estudio de Rodrigo de estas intervenciones ante organismos internacionales y otros Estados invita a indagar también su eventual impacto en movimientos de base de su país, de bolivianxs en el extranjero, como puede rastrearse en los casos de Díaz y Martínez y Caggiano y, acaso, en reclamos y reivindicaciones de clase media con trazos “pachamamistas”. Los procesos de escalamiento y reescalamiento involucran a los actores protagónicos de cada capítulo y a diversos actores secundarios, desde las grandes empresas transnacionales mineras o hidrocarburíferas hasta las comunidades originarias y migrantes, pasando por dependencias estatales de distinto nivel, desde emprendimientos inmobiliarios y comercializadoras de productos alimenticios orgánicos hasta clases medias preocupadas por la salud y el buen vivir, unos y otras poniendo a circular de manera específica discursos globales sobre el cuidado del ambiente en sus lugares, territorios y redes.

Nuestro interés por los procesos de espacialización incluyó desde un inicio preguntas por las movilidades. Los desplazamientos de distinto tipo influyen en la configuración dinámica del espacio. La movilidad se da entre

estructuras construidas a las que afecta y transforma. Más aún, como señala Ingold, la existencia humana “se despliega no en lugares sino a lo largo de caminos”. Cuando las sendas o los caminos que las trayectorias extienden se entrelazan, forman nudos; los lugares son estos nudos. “Los lugares, entonces, son delineados por el movimiento, no por los límites externos al movimiento” (Ingold, 2011: 148-149).

Esta primera distinción entre movilidad o desplazamientos y lugares o espacios recortados (predios, polígonos, lotes) permite enfocar aspectos cruciales de algunos de nuestros casos. El alambrado, protagonista de la historia argentina (Richard y Hernández, 2018), permite una ganadería e inhabilita otra, basada en la trashumancia, e inaugura una serie de intervenciones productivas sobre el espacio que llegan hasta las explotaciones petroleras, como muestran Maldonado, Mombello y Spivak L’Hoste. El cercamiento está en el centro de las disputas. Las tranqueras y los candados, con sus carteles o sus banderas, indican su relevancia. La constatación o el reclamo de propiedad privada, propiedad comunitaria o jurisdicción estatal parecen apelar a este mecanismo común. Las diferencias y desigualdades aparecen respecto de los valores en juego y de los logros que cada actor puede alcanzar.

Respecto de la movilidad y los desplazamientos, es posible identificar modalidades particulares que tienen en sí mismas implicaciones sociales y políticas. En el puesto estudiado por Maldonado, Mombello y Spivak L’Hoste, por ejemplo, “las permanencias se narran como circuitos [...] porque recorrer es el modo local de estar” (p. 36 de este volumen). Este no es, entonces, cualquier desplazamiento. Los recorridos y circuitos actualizan la historia de la trashumancia. Al darse en el ambiente y con el ambiente, exploran tentativamente el espacio, tienden sendas cuyos entrelazamientos configuran lugares. Al lado de estos caminos en permanente construcción, las rutas que conectan lugares y los caños que transportan hidrocarburos siguen otra lógica de movimiento, la que busca unir dos puntos. Son parte

de la “infraestructura de superficies duras e impenetrables” que tienden a “suprimir los vagabundeos” (Ingold, 2012: 29). También en el capítulo de Triquell despuntan dos modalidades de movilidad emparentadas con estas. En la figuración imagen-ceniza, la autora reúne rastreos en los que pobladorxs relevan restos que han quedado tras los incendios del monte. Como contracara, también sobre las ruinas que dejó el fuego, emprendedorxs inmobiliarixs y gobierno provincial planifican una autovía para unir rápidamente la capital y los paisajes del lugar.

El movimiento del tipo transporte que une dos puntos conlleva, además, costos que siguen las líneas de la desigualdad social. Si Richard Sennett (1997) comprendió que la planificación moderna de avenidas, autopistas y medios de transporte favoreció la indiferencia del viajex hacia el entorno que atraviesa, Segura mostró que lo opuesto “ocurre con los residentes de la periferia, para quienes desplazarse y cubrir grandes distancias supone múltiples esfuerzos”, e implica aprender y sentir en el cuerpo la distancia física y social con aquellos lugares hasta los cuales se ha vuelto necesario movilizarse (Segura, 2015: 133). Ante la necesidad de comercializar los productos de una quinta en el cordón verde periurbano, como las estudiadas por Díaz y Martínez y por Caggiano, el acceso a las rutas pavimentadas o la mediación de quienes cuentan con una movilidad adecuada se vuelven cruciales. En el caso estudiado por Zubía en la puna jujeña, convergen varios aspectos de esta problemática: ¿cuál es la relación entre la trashumancia tradicional en las comunidades originarias de la zona y el movimiento para acceder a un centro de salud o una escuela, lo cual se ha convertido en necesidad?, ¿cómo se construye la expansión de este segundo tipo de movimiento?, ¿qué actores están en condiciones de facilitar su realización?

Involucrando movilidades tanto como recortes y circunscripciones en múltiples capas, los distintos casos permiten ver proyectos territoriales en tensión. Estos suponen concepciones económicas, políticas, sociales y ambienta-

les. A veces se trata de proyectos que entran en enfrentamiento directo, como el del puesto y el de la cigüeña del capítulo 1, el de la Asamblea Paravachasca y el del gobierno provincial del capítulo 2 o los de un sector de una comunidad andina y las empresas extractivas de litio del capítulo 4. Al mismo tiempo, como este último capítulo permite ver, en cada caso hay porciones de las comunidades o familias locales que elaboran otros proyectos en diálogo desigual con las empresas y dependencias estatales.

La capacidad de proyectar y la voluntad misma de hacerlo están desigualmente distribuidas. Ante los megaproyectos estatales o empresariales, muchas veces las comunidades, asambleas y organizaciones de base elaboran sus proyectos en clave defensiva. Apelando a las palabras de De Certeau (2000), con sus proyectos territoriales algunos actorxs despliegan estrategias en las que definen en buena medida las reglas del juego, y otrxs actorxs desarrollan tácticas para moverse en un tablero sobre el que tienen menos control.

En todos los casos, la idea misma de proyecto, que se abre al futuro, subraya el hecho de que la configuración espacial es también temporal. En los fenómenos sociales, espacio y tiempo operan siempre como una diáda compleja. Los entrelazamientos entre distintas escalas de la acción, entre lo personal y familiar, lo local y comunitario, lo provincial y nacional, y lo transnacional o global, toman forma en múltiples temporalidades: largas, cortas y coyunturales; biográficas, familiares y sociales; de procesos y acontecimientos.

Procesos y lenguajes de valoración

El segundo horizonte problemático es el de los valores en juego y su jerarquización en las pujas en torno a la tierra y el territorio. Los procesos de apropiación de valor –cercamientos de nichos productivos, extracción de plusvalía o apropiación de la renta, entre otros– suponen claramente

disputas. Sin desatender estos fenómenos, nuestro punto de partida es que la lucha sociocultural, política y económica comienza antes, en el proceso de atribución de valor, es decir, en la definición de los valores en juego. Como señala Graeber siguiendo a Turner, lo que finalmente está en juego “no es incluso la lucha por apropiarse del valor, es la lucha por establecer qué es el valor” (Graeber, 2001: 88).

Es en este sentido que prestamos particular atención a los lenguajes de valoración desplegados por lxs actorxs en los distintos casos estudiados. Los lenguajes de valoración diferentes suponen objetos y sujetos de valor distintos y criterios variados para su definición. Si, como ha escrito Wittgenstein, “los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo” (Wittgenstein, 1994: 143), no hay dudas de que nuestros valores tienen los límites de nuestros lenguajes de valoración. La identificación de estos diferentes lenguajes de valoración ha llevado a postular la idea de valores inconmensurables (Martínez-Alier, 2004; Leff, 2006; Gudynas, 2010), o sea que no pueden ser medidos por una vara común: ¿puede tasarse la naturaleza como condición para la reproducción de la vida?, ¿puede ponerse un precio a saberes y prácticas tradicionales? Al mismo tiempo, desde algunas perspectivas, se dedican no pocos esfuerzos a volver conmensurables muchos de estos valores de distinto orden (Kratena, 2002; Sloomweg, Vanclay y Van Schooten, 2001), a veces remitiéndolos al sistema económico, aunque sea como sus “externalidades”, generalmente imaginando compensaciones financieras por su pérdida o daño. Los lenguajes de valoración no solo divergen, sino que pueden entrar en conflicto o tensión. Lograr imponer el lenguaje de valoración que prima en una disputa significa ganar una primera batalla clave.

Los lenguajes de valoración registran y modelan tres capacidades de los objetos y las relaciones que valorar. La primera es la capacidad de ser intercambiados por un equivalente. Incluye desde el intercambio de bienes en un trueque hasta el de fuerza de trabajo por salario en una

relación laboral. ¿Cuál es el valor de los productos del trabajo hortícola en las quintas, por ejemplo, o el de la extracción de sal en un salar? Según la concepción hegemónica, el valor se asocia al precio que es capaz de recibir un bien según su demanda en el mercado (o, mejor, en un mercado). Pero también tiene vigencia la medición del valor según el trabajo o los insumos puestos en su elaboración. El establecimiento de equivalencias no se da, por lo demás, solo sobre productos transables. Ciertas relaciones no monetizadas pueden regirse por esta lógica, como lo recuerda el dicho popular “Favor con favor se paga”.

La segunda es la capacidad de acumular historia. Entran aquí desde elementos patrimoniales de un Estado o reliquias hasta recuerdos familiares. También paisajes naturales consagrados como tales. Estos valores suelen considerarse “impagables”. En estos casos los objetos no están a la venta, aunque pueden venderse o empeñarse en momentos de crisis. En cualquier caso, son protegidos ante la posibilidad de su pérdida o daño. El valor de prácticas y saberes tradicionales o ancestrales se reconoce en esta clave. El cuidado y la protección se extienden así a modos de hacer y a los resultados de esa actividad.

La tercera es la capacidad de subsistencia y reproducción, que refiere a la aptitud o el potencial de garantizar futuro: del planeta, de las generaciones venideras y la vida humana, de la familia (patrimonio, alianza, descendencia), de la comunidad, etc. Se valora la potencialidad con base en lo que se considera evidencia pasada de tal capacidad. Esta atribución de valor se activa cuando dicha capacidad de subsistencia y reproducción se pone en entredicho o está bajo amenaza. El cuidado del ambiente, de la naturaleza y del planeta en su conjunto suele darse en estos términos. También el control de los alimentos y su producción. El valor puede tomar la forma concreta de una compensación o de una limitación de la potencia destructiva o predatoria humana. Se paga por el daño o se impide la acción.

Como apunta Graeber (2001), el proceso de atribución (y el de apropiación) de valor se desarrolla en relación con audiencias colectivas concretas. La pregunta de Pries (1997) acerca de dónde (o en comparación con quiénes) miden sus éxitos lxs migrantes internacionales es ilustrativa. ¿Es en relación con la audiencia del lugar de origen o con la del lugar de destino (o con otras)? ¿Qué es lo que puede adquirir valor en el cálculo de ese éxito? Al no advertir respecto de qué audiencia colectiva lxs migrantes toman sus decisiones laborales, residenciales o educativas, y al evaluar desde la audiencia propia tales decisiones, lxs no migrantes pueden perder de vista los valores en juego y atribuir a lxs migrantes, por ejemplo, cierta tendencia a la “auto-explotación”. Pasando a otro de nuestros casos, ¿cómo es posible que sectores de una comunidad originaria brinden consenso a una empresa nacional o transnacional de explotación de recursos naturales a partir de concesiones de la empresa irrisorias en relación con sus presupuestos de funcionamiento y con el daño ambiental eventual que pueden causar? La existencia de audiencias específicas con respecto a las que los valores se definen puede señalar el camino para una respuesta.

Como en casi cualquier situación concreta, en los distintos casos estudiados coexisten diferentes concepciones de valor sostenidas por distintas audiencias. En ocasiones dichas concepciones simplemente divergen, pero generalmente se superponen, a veces englobándose unas a otras formando jerarquías, a veces articulándose y a veces colisionando. Lxs migrantes, volviendo a Pries, “se posicionan a sí mismos *simultáneamente* en el sistema de desigualdad social de su comunidad de origen y en la estructura social de su comunidad de llegada” (Pries, 1997: 37, énfasis en el original), sus acciones se ordenan de acuerdo con diferentes valores consagrados por al menos estas dos grandes audiencias. En el caso de una comunidad originaria ante un megaprendimiento extractivo, conviven múltiples audiencias locales y globales imbricadas. La comunidad local recrea

valores tradicionales integrando desde hace décadas pautas laborales y de consumo capitalistas, con sus aspiraciones y sus necesidades. Los valores globales y transnacionales, por lo demás, no llegan solo de la mano de las grandes empresas, la incorporación de recursos naturales en el mercado mundial y la apertura de horizontes de “desarrollo”. También llegan a través del activismo ecológico y sus proyectos estéticos y políticos de cuidado de la naturaleza y revitalización de las tradiciones. La forma que tome la coexistencia de valores para una misma audiencia o el diálogo –más o menos conflictivo– entre audiencias con distintos valores no puede predecirse. Lo único seguro es que siempre habrá tensiones y fricciones.

El lugar de las imágenes

Como señalamos antes, las imágenes visuales tuvieron un papel clave en el desarrollo de los proyectos. Interesadxs en continuar exploraciones anteriores de varixs miembros del equipo sobre los usos posibles de las fotografías y las imágenes en la investigación social, proyectamos sobre ellas inquietudes sustantivas y metodológicas.

Utilizamos imágenes procedentes de distintas fuentes y procedimientos específicos:

1. fotografías tomadas por lxs investigadores, por sugerencia o indicación de las personas en el campo, o por oficio, intuición o simple curiosidad,
2. fotografías y otras imágenes compartidas por las personas con las que hicimos los respectivos trabajos de campo, a veces en formato papel y otras puestas a circular virtualmente en dispositivos electrónicos, que formaban parte de los relatos o se convertían en la ocasión para desplegarlos, y

3. fotografías e imágenes utilizadas por lxs actorxs protagónicxs de las disputas en espacios públicos (en sus sitios web o redes sociales, en manifestaciones públicas, piezas publicitarias o propagandísticas).

Estas imágenes fueron usadas de diferentes maneras, y también de diferentes maneras son exhibidas a lo largo del libro. Algunas nos orientaron en nuestro trabajo de campo. El tiempo detenido de la fotografía ayudó a mirar y percibir aspectos inadvertidos de los fenómenos en estudio. Se reproducen en el libro apenas como ilustrativas de un escenario, de un entorno o de una actividad, aunque en su momento permitieron reparar en elementos que escapan al flujo de la palabra hablada e incluso a la observación *in situ*. En algunos capítulos las imágenes compartidas o puestas a circular en redes sociales y espacios públicos por lxs actorxs sociales han sido analizadas en relación con estas preguntas clave del proyecto: ¿cuál es el lugar de las imágenes visuales en las disputas por la tierra?, ¿cómo distintos agentes recurren a ellas en la conformación de sus posiciones en dichas disputas?, ¿cuál es el papel de estas imágenes y cuáles sus relaciones con otras materialidades, especialmente los discursos verbales?

A propósito de ello, sin pretender ingenuamente que las imágenes funcionen en soledad o de manera autónoma, partimos sí de que presentan trazos irreductibles al lenguaje verbal. “[L]o esencial consiste en que el signo verbal y la representación visual nunca se dan a la vez” (Foucault, 1999: 48). Por eso mismo, el análisis busca captar la dialéctica entre imagen y texto (Burucúa y Malosetti Costa, 2012). Sus lógicas particulares de producir sentidos sociales se entrelazan. El análisis, entonces, busca que sus especificidades se iluminen recíprocamente. En ocasiones se ponen por escrito hallazgos conceptuales o sustantivos resultantes de la interpretación de elementos visuales (capítulo 6), y en otras se explora la posibilidad de que, al lado de las palabras, la elaboración de figuraciones visuales pueda expresar parte

del argumento al recuperar el funcionamiento contextual y asociativo de las imágenes (capítulo 2).

La pregunta que nos planteamos acerca del lugar de las imágenes visuales en las disputas por la tierra y el territorio asume que estas participan en las dinámicas de la hegemonía. La producción, circulación y consumo de imágenes interviene en la estabilización de un sentido común visual y en sus desafíos (Caggiano, 2012). Visualizaciones y ocultamientos, inclusiones y exclusiones, jerarquías y sesgos participan de la producción y reproducción de relaciones de poder y formas de desigualdad, así como de formas de resistencia. Los aspectos netamente formales también están ideológicamente informados y entrenan en modos de mirar y de mostrar. Más arriba esbozamos una pregunta: ¿hay trazos formales comunes entre las fotos de predios alambrados con carteles que señalan la propiedad privada o el derecho de explotación de una empresa en determinada zona (explotación petrolera, emprendimiento inmobiliario, etc.) y las de tranqueras con carteles de tierras recuperadas por comunidades originarias? Otras imágenes utilizadas por empresas, Estados y organizaciones sociales que comparten claros rasgos formales son las tomas cenitales de una porción de terreno ejecutadas con la ayuda de un dron. Sobre el cuadro de la fotografía, la mirada cartográfica y celestial recorta manzanas con casas de un barrio proyectado, invernaderos y campos de las quintas de producción hortícola, piletones de agua cristalina de una empresa litífera. ¿Qué puede significar este modo compartido de mirar y mostrar? En este caso, como en los demás, las fotografías nos recuerdan una característica desafiante del estudio de la hegemonía: la zona común de los discursos y las imágenes en disputa, el espacio de inteligibilidad que el conflicto mismo precisa para desarrollarse. Con base en esta zona común y sobre ella, los actores procuran extender e imponer sus lenguajes de valoración.

Bibliografía

- Brenner, Neil (2017). *Teoría urbana crítica y políticas de escala*. Barcelona: Icaria.
- Burucúa, José Emilio y Laura Malosetti Costa (2012). “Una palabra equivale a mil imágenes. Polisemia, grandeza y miserias de las representaciones visuales”. *Concreta*, pp. 6-13, Valencia.
- Caggiano, Sergio (2012). *El sentido común visual. Disputas en torno a género, “raza” y clase en imágenes de circulación pública*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- De Certeau, Michel (2000). *La invención de lo cotidiano I*. México: ITESO.
- Foucault, Michel (1999). *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Anagrama.
- Graeber, David (2001). *Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Gudynas, Eduardo (2010). “La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica”. *Tabula Rasa*, n.º 13, julio-diciembre, pp. 45-71.
- Harvey, David (1998). *La condición de la posmodernidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Ingold, Tim (2012). *Ambientes para la vida. Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología*. Montevideo: Trilce-FHyCE y Extensión Univ., Universidad de la República.
- Ingold, Tim (2011). *Being Alive. Essays on movement, knowledge and description*. Abingdon, Estados Unidos: Routledge.
- Kratena, Kurt (2002). “‘Ecological value added’ in an integrated ecosystem-economy model - An indicator for sustainability”. En XIV Conference on Input-Output Techniques, 15-20 de octubre, Montreal.
- Lefebvre, Henri (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing.

- Leff, Enrique (2006). "La ecología política en América Latina. Un campo en construcción". En Alimonda, Héctor (comp.). *Los tormentos de la materia: aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
- Martínez-Alier, Joan (2004). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria.
- Massey, Doreen (2005). "La filosofía y la política de la espacialidad: algunas consideraciones". En Arfuch, Leonor (comp.). *Pensar este tiempo: espacios, afectos, pertenencias*. Buenos Aires: Paidós.
- Pries, Ludger (1997). "Migración laboral internacional y espacios sociales transnacionales: bosquejo teórico-empírico". En Macías Gamboa, Saúl y Fernando Herrera Lima (coord.). *Migración laboral internacional: Transnacionalidad del espacio social*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Richard, Nicolás y Consuelo Hernández (2018). "Las alambradas en la Puna de Atacama: alambre, desierto y capitalismo". *Revista Chilena de Antropología*, n.º 37, pp. 83-107.
- Segura, Ramiro (2015). *Vivir afuera: Antropología de la experiencia urbana*. San Martín: UNSAM Edita.
- Sennet, Richard (1997). *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid: Alianza.
- Slootweg, Roel, Frank Vanclay y Marlies van Schooten (2001). "Function evaluation as a framework for the integration of social and environmental impact assessment". *Impact Assessment and Project Appraisal*, vol. 19, n.º 1, pp. 19-28.
- Wittgenstein, Ludwig (1973). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Barcelona: Altaya.

1

El puesto y la cigüeña

Proyectos de territorio en fricción al norte de la provincia de Río Negro

ANA CATANIA MALDONADO, LAURA MOMBELLO Y ANA SPIVAK L'HOSTE

Materialidades y fricciones

Era el 8 de agosto de 2019. Tomamos la ruta 151 desde el Alto Valle hacia el norte, en dirección a la ciudad de Catriel. Ese era, aquella mañana, nuestro destino final. Pero, antes de alcanzarlo, teníamos coordinada una parada previa para visitar la comunidad mapuche Newen Kurruf, que había recibido, algunos meses antes, orden de desalojo de las tierras que ocupaban tradicionalmente desde hacía varias décadas. Dicha orden tenía como origen una demanda judicial realizada en su contra, en 2017, por parte de dos abogados que detentan el carácter de propietarios del predio que la comunidad ocupa¹.

Para concretar la visita, teníamos como indicación detenernos al encontrar una tranquera con la bandera mapuche. Esta estaría, nos informaron, en un paraje llamado Bajada la Escondida, a unos 45 kilómetros antes de llegar a Catriel. Allí, en la tranquera, nos estarían aguardando para guiarnos al Puesto La Marga, donde nos esperaban algunos miembros de la comunidad. Tranquera, bandera mapuche, *puesto*, paraje, eran

¹ Los abogados Alberto Aparicio y Rafael Humberto Ortiz.

en principio señales poco más que mudas, precarias marcas que, esperábamos, nos ofrecieran alguna orientación para llegar a ellos.

Para anticiparnos al punto de la ruta donde debíamos detenernos, teníamos, como datos a considerar, la subida a un cerro y su posterior descenso. No lo sabíamos previamente, pero no habría carteles indicadores en el camino que señalaran ese u otro cerro o paraje. A ambos lados de la ruta, asfaltada y mayormente recta, cargada de camiones que transportaban insumos o productos de la industria hidrocarburífera, el paisaje parecía repetirse: estepa en desnivel, escasa vegetación (pequeños arbustos fundamentalmente), tranqueras espaciadas por kilómetros unas de otras, algunas majadas de ovejas y chivos, aves dispersas y numerosas unidades de bombeo de pozos de petróleo, más conocidas en la zona como “cigüeñas petroleras”.

Foto 1. Cigüeña petrolera en la zona de Catriel



Fuente: elaboración propia.

Viajamos atentas observando descensos de la ruta y tranqueras embanderadas, únicas indicaciones entonces para dar con nuestro lugar de encuentro. Y conseguimos no pasarnos de largo. En la entrada del Puesto La Marga, nos esperaban dos muchachos que, en una camioneta, nos guiaron durante varios kilómetros tierra adentro por un camino de ripio y curvas, hasta la vivienda, muy precaria, donde nos aguardaban los miembros de la comunidad. Intuimos, tras realizar ese trayecto campo adentro, que, a la anterior descripción del paisaje, habría que sumar la presencia de este tipo de viviendas que se ocultan, por distantes, a quienes atraviesan la ruta sin traspasar ninguna de sus tranqueras.

Foto 2. Acceso al Puesto La Marga desde la ruta nacional 151



Fuente: elaboración propia.

La vivienda consistía en una construcción rectangular de unos 30 metros cuadrados hecha de adobe y techo de zinc, con una puerta frontal, dos ventanas y un alero. Al interior constaba de un ambiente único (aunque la cama

estaba separada por una cortina de tela) y poseía escaso mobiliario (mesa, algunas sillas, mesada con pileta, fogón a leña). Sin acceso a agua, gas o electricidad de red, estaba rodeada por corrales hechos con maderas desiguales traídas del campo, restos de lo que fuera en otros tiempos un gallinero, y, a pocos metros, había un pozo rodeado de chapas que funcionaba aún como letrina. Desde el frente de la vivienda, y en todas direcciones, podían divisarse algunas *cigüeñas*. En un valle que comenzaba a unos 50 metros de ella, se podía ver, además, la marca de un gasoducto que recorre parte del subsuelo del terreno en litigio.

Foto 3. Vista de frente de la vivienda y del gallinero del puesto



Fuente: elaboración propia.

Foto 4. Vista de frente de la vivienda y de los corrales del puesto



Fuente: elaboración propia.

El recorrido por la ruta con referencias inciertas como orientación, el zigzagueante camino desde la tranquera hasta la vivienda donde nos esperaba la comunidad y la caminata con sus miembros por el *puesto* fueron dando pistas para comenzar a armar paulatinamente, en paralelo al devenir de las conversaciones que se sucedieron a lo largo del día, un conjunto significativo de relaciones y dinámicas sociales en lo que, desde la ruta, parecía un páramo deshabitado. En este conjunto, sobre el cual profundizaremos en este trabajo, resulta difícil y –creemos– innecesario escindir objetos de personas. Efectivamente, lejos de postular solo como objetos o externalidades propias del contexto a *cigüeñas* y *puestos*, o a la traza del gasoducto, los corrales, la tranquera, la cámara de vigilancia instalada en la entrada del *puesto* a la que referiremos más adelante, la camioneta tan usada, el alambrado, la bandera, la orden de desalojo o el candado que pusieron en la tranquera al intentar

hacerla efectiva, proponemos abordarlos como constitutivos de esas relaciones y dinámicas, como materialidades que, más que ser, acontecen (Ingold, 2013). Desde esta perspectiva, las materialidades resultan experimentadas (en la práctica). Contar la historia de su acontecer es reponer las experiencias devenidas a medida que ellas “fluyen, se mezclan y mutan” (Ingold, 2013: 36).

La hipótesis que guía este texto es que, recorriendo las materialidades y poniéndolas en diálogo con los relatos que compartieron los miembros de la comunidad en esa jornada, se pueden develar distintos proyectos de territorio que se solapan conflictivamente en un mismo espacio: el del campo que ocupa el *puesto* en litigio entre la comunidad Newen Kurruf y quienes afirman ser propietarios del terreno. Distintos proyectos que, a lo largo de las décadas, con temporalidades y ritmos diversos, pero siempre solapándose en roce o fricción (Tsing, 2004), fueron modelando dicho espacio y dando forma, paralelamente, a los procesos, las vidas y los sentidos que se produjeron –que se siguen produciendo– en torno a él. Derivados de esta experiencia empírica particular, dos de esos proyectos surgen como especialmente relevantes. Por un lado, aquel que hace a las lógicas de uso y significación del espacio de la comunidad que ocupa de manera tradicional el *puesto*. Por otro lado, el proyecto de territorio que imagina y produce, paralelamente, la infraestructura de la industria hidrocarburífera en la región. Proponemos, además, que el enfrentamiento judicial y la orden de desalojo asociada a él exacerban las asimetrías de las agencias involucradas en esos dos proyectos territoriales que serán, en este texto, ejes de la reflexión.

El *puesto* y su proyecto de territorio

Tras las presentaciones y los saludos con los miembros de la comunidad, entramos a la vivienda. Éramos, esa mañana

de invierno, unas 10 personas en el único ambiente. Nos acomodamos en las sillas disponibles, y otros de pie, cerca del fogón que calentaba la sala. Dispusimos grabadores para registrar la charla y cuadernos para tomar notas y abrimos el intercambio preguntando por el litigio que estaban atravesando y en el marco del cual habían recibido, unos meses antes, la orden judicial de desalojar el *puesto*.

Ana: Una buena manera de empezar la charla es que nos cuenten de qué se trata el pedido de desalojo.

Werken²: Bueno, según lo que me decía mi abuela, que yo tanto pasé con ella acá, la familia de nosotros acá es antigua, legendaria, digamos. Ellos vinieron, eh, el abuelo de mi abuela venía del lado de Buenos Aires, él era nacido en General Pringles, Provincia de Buenos Aires. El abuelo de mi abuela, que vendría a ser mi tatarabuelo. Y Pelegrina Montes, que también era de Azul, vino con la tribu de los catrieleros cuando le cedieron el territorio acá (entrevista grupal, 7 de agosto de 2019).

¿Por qué la respuesta a la consulta sobre un litigio que involucra a la comunidad en el año 2019 comenzaba con la descripción de sucesos acontecidos a fines del siglo XIX? ¿Cuáles son y cómo operan las temporalidades y los ritmos que se pusieron en juego en el diálogo con la comunidad aquella mañana desde el *puesto*? Y, en otro orden de cuestionamientos, ¿en qué sentido el *puesto*, esa referencia espacial y al mismo tiempo de encuentro de la comunidad, implica un proyecto de territorio? ¿De qué tipo de proyecto se trata? ¿Sobre qué fricciones se despliega?

Contrariamente a lo que supone el lenguaje común, incluso el nuestro a la hora de volcar estas reflexiones en un texto, en el contexto local el *puesto* no alude estrictamente a la vivienda o *rancho*, tal como también se la suele reconocer. Refiere, en realidad, a una configuración más amplia, de límites poco definidos, que incluye la vivienda,

² Función que designa al vocero de la comunidad.

pero también el predio más o menos extenso en el que se despliega la vida social y económica de sus habitantes. Un campo o terreno se mide y subdivide en hectáreas. El *puesto*, o los *puestos* (porque en un campo puede haber más de uno), por las actividades que se hacen en torno a él. De hecho, las actividades agropecuarias que se desarrollan allí dan identidad a un actor social particular: el *puestero*. Él es quien cuida los animales y el campo, habita el *rancho* y se hace cargo de las tareas cotidianas necesarias para el desarrollo de la actividad.

El *puesto*, como el *rancho*, remite a cierto estado de precariedad y permanencia al mismo tiempo. En ambos casos, la precariedad refiere tanto a la estructura edilicia de las viviendas y demás infraestructuras ligadas a la actividad productiva que en ellos se desarrollan (corrales, aguadas, caminos internos), como al estatuto legal, muchas veces difuso o en discusión, respecto de la tenencia de las tierras en las que estas viviendas e infraestructuras se asientan. Del mismo modo, para el *rancho* y el *puesto*, este estado de cosas puede extenderse largamente en el tiempo, de modo que lo precario adquiere un carácter permanente.

Sin embargo, el *puesto*, a diferencia del *rancho*, supone no solo una configuración más compleja en la que se entran el techo, la tierra, la vida social y las prácticas de subsistencia, sino también pautas de estabilidad y de trashumancia. Efectivamente, para los *puesteros*, el arraigo supone la circulación y el recorrido por *puestos* ubicados en diferentes espacios geográficos, aptos para sostener la actividad ganadera en las distintas épocas del año. Las permanencias se narran como circuitos, los *puestos* son lugares en los que siempre se ha estado, porque recorrer es el modo local de estar. En esta configuración no es la residencia (el *rancho*, la vivienda) la que señala el arraigo (y con él la pertenencia), sino el recorrido y los conocimientos que en estos recorridos compartidos transgeneracionalmente se conservan y producen como acervo colectivo (conocen caminos, aguadas, pasturas, leen los vientos y el andar de

los animales, etc.). En este marco se hace mención de la casa en el contexto urbano (o periurbano) cuando existe, se trata de *la casa del pueblo*, es decir, el lugar de residencia cuando la permanencia, en clave de recorridos y territorialidades ampliadas, abarca también a las ciudades. Así, la estancia en la *casa del pueblo* (y todos los saberes y las tecnologías que el recorrido por la ciudad implica) entra a formar parte de esa configuración que supone el *puesto*.

Esta movilidad característica de la dinámica puestera cuenta con historia y memorias que refieren a patrones tradicionales de ocupación territorial mapuche. En este sentido, Cañuqueo analiza cómo “a principios de 1900 aún había tránsitos que no necesariamente respondían a situaciones de traslados forzados, sino a prácticas sociales relativamente autónomas sobre el espacio” (Cañuqueo, 2016: 21). Estas formas de ocupar el espacio, según la autora, dejaron marcas que configuran al *paraje* como espacio de anclaje de distintas trayectorias sociales (Massey, 2005; Ingold, 2013) que une a los diferentes *lof*³, familias y pobladores en el presente. Los parajes, clave de identidad territorial con singular potencia en la provincia de Río Negro (Cañuqueo *et al.*, 2007), no se definen por sus límites, como determinan las lógicas de las administraciones del Estado y de la propiedad privada (Kropff y Spivak L’Hoste, 2021, mimeo). La referencia al *puesto* y su dinámica dialoga y se recorta sobre esta persistencia reticular de los parajes en el ordenamiento jurisdiccional estatal.

Así, *el puesto*, como proyecto de territorio, emerge sobre la fricción (o las fricciones) entre las lógicas tradicionales de ocupación territorial que suponen tránsitos y desplazamientos como clave estructurante de la vida, por un lado, las sucesivas imposiciones sobre esa movilidad y sobre

³ Esta categoría articula procesos de territorialización y tramas de relación descritas a partir del lenguaje del parentesco. En ella confluyen diversos significados que deben interpretarse en función del contexto en el que se enuncia (Kropff y Spivak L’Hoste, 2021, mimeo).

eventuales asentamientos promovidos por las distintas instancias estatales, por otro, y las temporalidades y exigencias de los emprendimientos económicos a gran escala, como es, en la región, el de la industria hidrocarburífera. Tsing señala: “Como una imagen metafórica, la fricción nos recuerda que los encuentros heterogéneos y desiguales pueden llevar a nuevas configuraciones de la cultura y el poder” (Tsing, 2005: 5). Estos procesos de fricción adquieren, por lo tanto, una dimensión creativa que, no obstante, no obtura ni niega los conflictos, sino que más bien generan espacios y dinámicas que habilitan otros modos de procesar estos encuentros heterogéneos y desiguales. La autora muestra cómo los procesos del capitalismo global y los conflictos derivados de su expansión en contextos locales mediante la explotación intensiva de bienes de la naturaleza ponen en relación sujetos, intereses e interpretaciones particulares que trazan configuraciones socioculturales originales y situadas. Estas configuraciones producto de la fricción habilitan, a la vez que limitan, el horizonte de posibilidad en el que los actores sociales despliegan sus interacciones e interpretaciones.

El litigio que tiene como epicentro al Puesto La Marga permite desagregar estos procesos, recuperar las temporalidades y reponer los actores de esas fricciones, dando cuenta de las agencias desiguales que modelan tanto las relaciones sociales como los espacios en cuestión.

Historia de un litigio

La ocupación del *puesto* por parte de la comunidad y el desarrollo de las actividades pecuarias datan, según testimonios, de 1983. Ahora bien, la presencia de la familia en la zona, como anticipa el fragmento de diálogo citado anteriormente, se retrotrae a principios del siglo XX. Más precisamente, a la llegada de sus antepasados junto

a los restos de la tribu de Catriel⁴, que se desplazaba liderada por Bibiana García. Los primeros datos figuran, al igual que los de Bibiana García, en los registros del Segundo Censo Nacional de 1895.

Foto 5. Página del Segundo Censo Nacional, 1895: Río Negro (territorio).
Libreto n.º 37, Departamento Coronel Pringles

Los bisabuelos de la actual *lonko* (autoridad comunitaria), subrayados en amarillo en la foto anterior, se establecieron primero en la zona de Peñas Blancas (al norte de Catriel) y luego, tras la gran inundación del río Colorado de 1914, en un *puesto* cercano a Sargento Ocón⁵. Los hijos de esa pareja se desplazaron, a lo largo de los años, entre *puestos* y poblaciones cercanos. En los primeros se desempeñaron en tareas rurales a escala familiar, y en las segundas realizaron actividades de

4 Para una referencia sobre la constitución de la colonia Catriel y el proceso de transformación poblacional, espacial y productivo de la zona, se puede ver Manzanal (1983), Iuorno, Miralles y Nasser (2007), Nagy (2014) y Pérez (2014).

5 La inundación del río Colorado de 1914 fue producto de una catástrofe natural que produjo pérdidas de vidas humanas, de animales y sembradíos. Sobre el tema se puede consultar Rögind (1937).

mercachifles o trabajos domésticos a cambio, fundamentalmente, de vivienda y alimento⁶. Hacia los años 40, uno de ellos formó familia con una mujer que conoció en General Roca y tuvo aproximadamente 10 hijos. Entre ellos, Margarita (1947-2007), madre de la *lonko* y primera en instalarse en el puesto que actualmente, en su honor, lleva su nombre.

Margarita se estableció ya casada en el Puesto La Marga en 1983, donde desempeñó tareas vinculadas a la ganadería para subsistencia y venta. Allí crecieron sus hijos. La familia acondicionó la precaria construcción existente en el *puesto* como vivienda y realizó las mejoras asociadas a las actividades que desarrollaban. Llegaron allí guiados por el marido de Margarita. Él lo conocía de sus recorridas previas con ganado debido a su ocupación de tropero. Al situarse en cercanías de la Aguada La Pichana, lo había utilizado en algunas de sus paradas para dar de comer y beber a los animales durante el traslado. El *puesto* había sido habitado, según testimonios, por generaciones previas de la familia y algunos vecinos para pastoreo de animales en invierno⁷ o para realizar actividades recreativas como la *boleada*⁸.

6 Los desplazamientos entre *puestos* complementaban, según los miembros de la comunidad, con el desempeño de otras actividades laborales que respondían a condicionamientos de orden estatal capitalista. Entre estas destacan la ocupación de tropero (comerciante de ganado), mercachifle o vendedor itinerante, así como la de jornaleros de cosecha o de alguna otra tarea temporaria ligada a la producción agrícola-ganadera.

7 Se trata de un uso tradicional vinculado al desplazamiento del ganado por temporada para acceder al alimento y al agua.

8 “Boleada” refiere a la acción de cazar con boleadoras al *choique*, un tipo de avestruz patagónica. Estanislao Zeballos describió, a fines del siglo XIX, la “boleada de avestruz” como una actividad recurrente entre los indígenas de la “tribu de Catriel” radicados en la zona (Lenton, 2005). Aunque actualmente esta práctica se desarrolla como competencia de destreza, antiguamente se realizaba para vender pluma de *choique*.

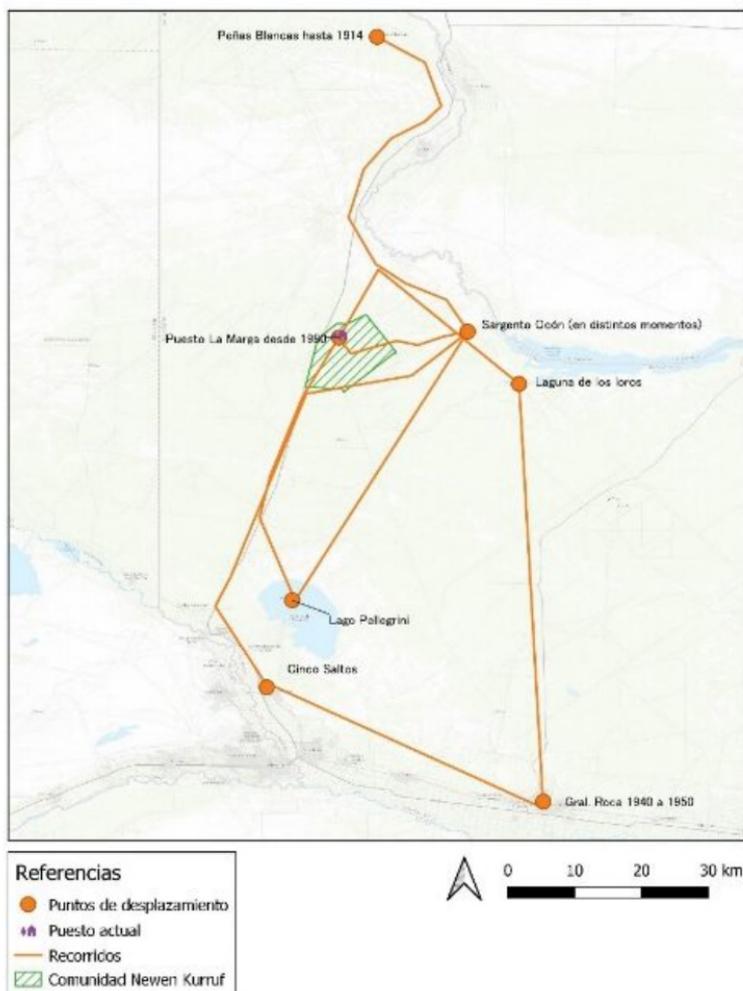
Así, respondiendo a patrones tradicionales de ocupación territorial mapuche, las generaciones previas a Margarita (padres y abuelos) se trasladaron por los *parajes* de la zona, habitando y desarrollando actividades productivas de subsistencia en distintos *puestos* por distintos lapsos de tiempo. La instalación más estable en el Puesto La Marga de Margarita y su familia, y el uso doméstico y productivo del campo que lo rodea, fue parte y producto de esos movimientos previos en fricción, como profundizaremos a continuación, con las limitaciones que el Estado, la propiedad privada y la industria hidrocarburífera le imponían.

Ahora bien, la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro había otorgado, desde 1974, permisos precarios de ocupación del terreno fiscal donde se encontraba el *puesto* y hacia el cual se extendían las actividades productivas de la comunidad⁹. Más precisamente, sobre la parcela de 11.977 hectáreas ubicada en los Lotes 3, 4, 7 y 8 de la Fracción D de la Sección XXV. Dichos permisos de ocupación eran asignados, de manera anual, a Félix Mabellini, un reconocido automovilista de la ciudad de Cipolletti. En 1978 esa misma dirección le adjudicó el terreno en venta a Mabellini, quien escrituró la propiedad a su nombre en 1986¹⁰.

⁹ Expediente de la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro n.º 301.886/1975.

¹⁰ Descripción del dominio con fecha del 9 de junio de 1987. Expediente de la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro n.º 301. 886/1975.

Mapa 1. Ubicación del predio donde se encuentra el Puesto La Marga



Fuente: producción propia.

Mabellini habrá muerto hace cinco años, vivía en Cipolletti y tenía un taller mecánico, un auto de colección. Mi papá

era amigo de él [...]. Por eso, mi papá reclamarle algo a Mabellini no lo iba a hacer y tampoco tenía sentido porque todos los campos eran abiertos. Viste que la gente de antes conversaba algo y era eso. No había papeles. Eran por ahí muy legales en las amistades (lonko, entrevista individual, 8 de febrero del 2020).

Mabellini fue poseedor primero de los permisos de ocupación y luego de la escritura sin haber ocupado ni realizado mejoras o actividad pecuaria alguna en el terreno (requisito, al menos, de lo primero). Mientras, la comunidad habitaba y producía el *puesto* y el terreno. La disposición de *campo abierto* y los acuerdos de palabra sobre cuál era el territorio en que vivía y utilizaba cada uno y cuáles eran los espacios de uso común se correspondían con los valores tradicionales manifestados por la comunidad. El énfasis puesto en la palabra se sustenta en el peso cultural e identitario de la oralidad del pueblo mapuche. La palabra es el hilo con el que se tejen las relaciones constitutivas del territorio como *modo de ser juntos en la tierra*. A la vez, es fundamento de los acuerdos, las negociaciones y los compromisos vinculantes entre las personas, y entre estas y los seres no humanos con los que cohabitan, basados en una relación de mutuos cuidados, escucha atenta y respeto (Ramos y Cañuqueo, 2018).

Ahora bien, un año después de la escrituración del predio a nombre de Mabellini, tras perder un juicio que le había iniciado otro particular, Mario Contreras, se tramitó el remate de este¹¹. Con la comunidad en el *puesto* y las mejoras realizadas por sus miembros en marcha en función de sus prácticas sociales y económicas, se dictó en 1993 un auto del remate que se aprobó el 17 de noviembre de 1994. En esa fecha se ordenó la entrega de la posesión a Mario Contreras, quien cedió los derechos de la propiedad

¹¹ Contreras Mario del Carmen c/Marbellini Félix y otros. Expediente 13.335/1987 del Juzgado Civil n.º 5 con fecha de sentencia del 6 de noviembre de 1989. General Roca, Río Negro.

a Alberto Aparicio y Rafael Ortiz, los abogados del estudio jurídico de Neuquén que lo habían patrocinado en el juicio contra Mabellini.

Durante años la situación se mantuvo en similares condiciones. Margarita y sus hijos habitando y trabajando el *puesto*, las escrituras del campo en manos de dos abogados que no hacían uso doméstico ni productivo del terreno. Como el predio tenía propietarios, la comunidad no podía tramitar permisos precarios de ocupación en la Dirección de Tierras de la provincia. Por el mismo motivo, tampoco la dirección realizó inspecciones de tierras que permitieran fundamentar con documentos oficiales la presencia de los pobladores y las mejoras realizadas. Debido a esa situación, además, la comunidad no pudo recibir pagos a nombre de regalías de la actividad hidrocarburífera que coexiste con su actividad ganadera, ni servidumbres de paso por la presencia de infraestructura fija (pozos, tanques, caños) o móvil (camiones, camionetas, casillas, etc.) de esa industria en el predio. Mientras que los propietarios del predio sí reciben canon por servidumbre de paso, al menos desde el 2001.

En el año 2014, los miembros de la comunidad iniciaron un juicio de usucapión a fin de lograr el reconocimiento legal de la tierra. El juicio se perdió en esa instancia por caducidad¹². Posteriormente, en 2017, fueron Aparicio y Ortiz quienes iniciaron una demanda judicial contra los miembros de la comunidad, que derivó, en 2019, en una orden de desalojo en su contra. La comunidad apeló por vías legales a esa orden denunciando penalmente a los propietarios por estafa y visibilizando su ocupación por casi cuatro décadas del

¹² Parada, Lucía Perla y otro c/Aparicio; Alberto Ricardo y otros/Prescripción Adquisitiva s/Ordinario. Expediente n.º 34.086/2014 del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones n.º 1. Cipolletti, Río Negro.

campo y el *puesto*¹³. Más allá del derrotero de las acciones jurídicas, sus vidas cotidianas, relaciones y actividades económicas han sufrido alteraciones y perjuicios a lo largo del tiempo. Alteraciones que fueron producto, en parte, del litigio en proceso. Entre otras, las derivadas de la instalación de una cámara de seguridad en el acceso al *puesto* que generó no solo malestar para los miembros de la comunidad, sino también conflictos con sus vecinos, o la colocación de un candado en la tranquera en un intento de desalojo que los dejó encerrados dentro del *puesto* y limitados en movimiento. Alteraciones que, por otra parte, anteceden y exceden a dicho litigio y que son efecto de las fricciones que genera otro proyecto territorial que se solapa en su espacio de vida: aquel que acompaña la expansión de la industria hidrocarburífera desde los años 60 en la zona.

La cigüeña y su proyecto de territorio

Las industrias extractivas promovieron sus propios proyectos territoriales en los distintos lugares del país en los que se desarrollaron. En el caso de los hidrocarburos en Patagonia, desde sus inicios a principios del siglo XX,

¹³ En abril de 2019, la comunidad participó, junto con la consejera zonal del Co.De.C.I. y una abogada, en la audiencia convocada en respuesta a la orden de desalojo. Allí negaron el derecho a la posesión de Aparicio y Ortiz fundamentándose en que estos nunca habitaron ni desarrollaron ninguna actividad productiva en el predio. Asimismo, la comunidad presentó una denuncia penal por estafa contra Contreras, Aparicio y Ortiz por irregularidades en el acto de posesión formal del inmueble realizado el 5 de noviembre de 1996. Junto a esa denuncia, los miembros de la comunidad solicitaron, además, una medida cautelar urgente a fin de que no se innovase la situación de hecho existente en el predio. Pese a dicha solicitud, el jueves 19 de septiembre de 2019, se inició un desalojo con la presencia de un oficial judicial, personal policial de la provincia, Alberto Aparicio y personal de seguridad de una empresa privada.

el desarrollo industrial estuvo acompañado por políticas de Estado en las que se articulaban cuestiones estrictamente económicas con cuestiones de carácter político y social (Favaro, 1999; Yeatts, 1996; Solberg, 1986; Kaplan, 1981; Bernal, 2005; Ortiz, 2008). La expansión de la industria hidrocarburífera se desplegó sobre el proyecto político del *desierto* (Navarro Floria, 2002) configurando una nueva territorialidad¹⁴.

Este proyecto territorial implicó importantes modificaciones espaciales y económicas que complejizaron la dinámica demográfica y social (Díaz y Fuentes, 2008). En Río Negro, en la década del 60, YPF encontró petróleo en la región norte y noroeste de la provincia, instalando los primeros campamentos en el pueblo de Catriel. Estos pozos productivos son parte de la cuenca sedimentaria neuquina, que abarca además el sur de La Pampa y Mendoza. Ya en los 70 la zona de explotación se fue extendiendo hacia el Alto Valle¹⁵.

Catriel, que hasta ese momento era una región de crianceros y de agricultura incipiente, redefinió su perfil socioeconómico a partir del establecimiento de YPF.

¹⁴ Navarro Floria muestra cómo para la cultura europeo-occidental la idea de “desierto” no se relacionaba con los espacios despoblados o yermos, sino con “los no apropiados ni trabajados según las pautas capitalistas” (Navarro Floria, 2002: 140). La noción de “desierto” así entendida fue fundamental en el período de la consolidación de la matriz Estado-nación-territorio. En este contexto, la imagen del “desierto” aplicada a la Patagonia se constituyó más como un programa político que como una categoría descriptiva (Navarro Floria, 2002). Sin embargo, la efectividad de tal programa requería en primer término de “un vaciamiento humano, es decir, la creación del desierto postulado inicialmente” (Navarro Floria, 2002); las campañas militares de fines del siglo XIX estuvieron puestas al servicio de este objetivo.

¹⁵ Actualmente, en Río Negro se reconocen cuatro cuencas hidrocarburíferas, compartidas con otras provincias. Además de la neuquina, con epicentro en Catriel, que es la más importante y la más antigua, cuenta con la de Ñirihuau y la de Cañadón Asfalto-Somuncurá (compartidas con Chubut). La cuarta es una cuenca mixta (se extiende sobre el continente y el lecho marino) que también abarca parte de la Provincia de Buenos Aires, conocida como cuenca del Colorado.

La población estable se multiplicó significativamente y comenzó un proceso similar al de otras localidades petroleras, caracterizado por la estructuración y organización de la sociedad en torno a la industria y sus vaivenes¹⁶. Al mismo tiempo, los accesos y usos de la tierra y bienes naturales subsidiarios, como el agua y el mismo petróleo y gas, se vieron implicados en nuevos circuitos de mercantilización. De estos circuitos participan actores no solo locales, sino también nacionales y transnacionales. Asimismo, los usos y procesos de legitimación sobre la ocupación de la tierra impuestos por la industria dan lugar a la aparición de nuevos roles para viejos actores. Así, *puesteros* y propietarios comenzaron a pugnar por devenir *superficiarios*, categoría social y jurídica generada al calor de la proliferación de *cigüeñas* en la zona. Se trata de los sujetos con derecho al cobro de un canon por servidumbre de paso asociado a la instalación de esa infraestructura de extracción y/o al consecuente transporte del hidrocarburo (gas y petróleo) extraído. Para ser reconocido como *superficiario* por parte de las empresas, que son las que abonan esos cánones, es condición contar con permisos de ocupación otorgados por la Dirección de Tierras de la provincia, o poseer el título de propiedad de la tierra. Por eso la comunidad Newen Kurruf, contrariamente a los poseedores del título de propiedad del predio, no podían ni pueden acceder a ellos.

La normativa jurídica que regula el acceso y usufructo de los bienes naturales del subsuelo subordina los usos y las relaciones que se establecen con la superficie de la tierra y con el agua a los requerimientos

¹⁶ Con respecto a las dinámicas socioeconómicas y culturales propias de las localidades petroleras, puede verse, entre otros, los trabajos de Klachko (2005), Cabral Marques y Crespo (2006), Díaz y Fuentes (2008), y Mombello (2018).

de la industria¹⁷. Con eso refuerza la capacidad de esa industria para modelar el territorio con su propio proyecto. Un proyecto distinto que supone una jerarquización de los usos y las apropiaciones del espacio, otra valorización de la naturaleza, así como el despliegue de objetos y materialidades (caminos, gasoductos, pozos, etc.) que habilitan, modifican o clausuran actividades y recorridos.

Entre esos recorridos, se destaca, por ejemplo, el de los hidrocarburos a través de tuberías conexas de poco más de un metro de diámetro y cientos de kilómetros de longitud. Una suerte de mapa subterráneo de tubos que conducen fluidos o gases de punta a punta, como el Oleoducto del Valle S.A. (OLDELVAL) que atraviesa La Marga¹⁸. Este pasa a, aproximadamente, 500 metros de la vivienda y 400 de la zona de corrales y bebederos del *puesto*. Desde arriba de la barda, y equidistante de la barda paralela, puede distinguirse la traza de línea recta que quedó impresa tras su construcción en el año 2005. La impresión de esa línea en el espacio resulta no tanto una huella de la materialidad de la industria, como una manera de objetivar procesos en curso, cuyo fluir y mutación permean las experiencias locales (Ingold, 2013). La construcción alteró, según los miembros de la comunidad, la disponibilidad de agua dulce en el predio debido a que se secaron las aguadas existentes durante el período de obras.

¹⁷ Ver leyes n.º 17.319 y sus modificatorias y n.º 27.007, el Decreto n.º 872 del 1.º de octubre de 2018, las Resoluciones n.º 65 del 4 de noviembre de 2018, n.º 196 del 11 de abril de 2019, n.º 55 del 3 de abril de 2020, n.º 356 del 23 de abril de 2021, y Decreto n.º 900 del 29 de diciembre de 2021.

¹⁸ Oleoductos del Valle S.A. se dedica al transporte de petróleo crudo por oleoductos desde la cuenca Neuquina hacia el Atlántico y hacia destilería Plaza Huincul. Comenzó sus actividades en 1993 y tiene la concesión por 35 años. Atraviesa el *puesto* en el tramo Medanita-Allen. Información disponible en bit.ly/3NsBOIT. Consultado el 23 de septiembre de 2019.

A nosotros nos pasó, cuando hicieron el movimiento de tierras del oleoducto a Puesto Morales, teníamos dos aguadas dulces, una maravilla, ¿viste?, y el movimiento de tierra se ve que se fue, pero pincharon la barda allá arriba y sacaron agua dulce. ¿Qué hacen? Llenan los camiones, pero a nosotros no nos dan, perdimos el agua nuestra (lonko, entrevista grupal, 7 de agosto de 2019).

Foto 6. Oleoducto OLDELVAL S.A. visto desde La Marga (izquierda a derecha)



Fuente: elaboración propia.

Foto 7. Margarita señalando la ubicación de la aguada que se secó



Fuente: archivo de la comunidad.

La actividad hidrocarburífera en el predio que ocupa la comunidad ha ido en aumento desde los años 80 hasta el presente. Cuando Margarita y su marido se asentaron, solo había dos *cigüeñas*. Actualmente, existen entre 50 y 60 explotaciones convencionales de extracción de gas y petróleo, algunas de las cuales son observables desde el *puesto*. Estas infraestructuras de la industria hidrocarburífera forman parte del área de concesión Agua Salada, cuyas operadoras son las empresas argentinas Tecpetrol (un 70 %) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales–Yacimientos del Sur

(YPF-YSUR) (un 30 %) y las áreas denominadas El Santiago y Bajo del Piche, ambas operadas por la empresa Petróleos Sudamericanos (100 %)¹⁹, con contratos vigentes hasta el año 2027. Además de estas operadoras, circulan y desarrollan actividades dentro del predio otras empresas de servicios a la industria hidrocarburífera que se desempeñan como contratistas.

Así, a los tránsitos tradicionales de ganado y gente, por caminos de ripio zigzagueantes dibujados a fuerza de repetir recorridos, se sumaron, intersectaron o superpusieron otras rutas de vehículos, personal de empresas, insumos y productos de la industria. Tal como sugiere Tsing (2004) cuando retoma el ejemplo de la ruta abierta sobre un paisaje que carecía de ella, las obras producen fricciones que dan lugar a nuevos recorridos, al tiempo que coartan las posibilidades de movilidad. Del mismo modo, las características diversas de las huellas en el paisaje de los diferentes proyectos de territorio pueden leerse como escrituras en distintos idiomas, cada una con su lógica, que, sin desconocerse del todo mutuamente, se ven imposibilitadas de dialogar. Los caminos, las cañerías y demás instalaciones requieren abrir senderos o zanjas en líneas rectas que permitan transportar insumos y personal de origen a destino de la forma más directa posible. Estas materialidades de los caminos y las zanjas rectas aparecen como la escritura en el paisaje del proyecto de la *cigüeña*, un proyecto guiado por la racionalidad de alcanzar el mayor rédito con el menor costo en tiempos y recursos. Lo que queda entre el origen y el destino de los flujos a movilizar resulta invisible o simplemente un estorbo que remover para *abrir* la senda del desarrollo industrial. Previos, y atravesados por estas rectas, se encuentran los caminos sinuosos y aparentemente caprichosos hechos por los recorridos de gente y ganado.

¹⁹ Concesiones de explotación de hidrocarburos según resolución n.º 319/1993. Página web del Ministerio de Energía de la Nación. Disponible en bit.ly/3sR0g8S. Consultado el 3 de febrero de 2021.

Caminos que se hicieron acompañando los desniveles del terreno y las formaciones rocosas, buscando incorporar las fuentes de agua en el trayecto, preservando la flora considerada valiosa para alimentar el ganado, o para otros usos de la subsistencia, medicina o rituales. La lógica de esta escritura en el paisaje, más que centrarse en los *recursos* (su extracción, su producción, su traslado, su mercantilización), tal como ocurre con el proyecto de la *cigüeña*, parece otorgar centralidad al paisaje y al devenir de los seres vivos y no vivos con lo que se interactúa, haciéndolos parte de la circulación y el recorrido, dinámica social que otorga sentido al proyecto territorial que expresa el *puesto*.

Para la industria, la comunidad es invisible, y su presencia y actividad socioeconómica resultan tan irrelevantes como los ecosistemas y la biodiversidad sobre los que impacta. Las personas que forman parte de ella, sus animales y las materialidades asociadas a sus vidas domésticas y reproductivas (*puestos*, *aguadas*, *corrales*, etc.) quedan fuera del proyecto de territorio que movilizan. En el marco de ese proyecto, tierra, agua, petróleo, gas y demás minerales son *recursos* disponibles para su explotación y mercantilización. Sus interlocutores principales son, entonces, quienes administran y regulan el acceso y usufructo, en este caso las entidades estatales y subestatales. Los *superficiarios* son actores emergentes creados por las normativas impuestas por el Estado para regular el acceso y uso de la tierra, y para administrar la conflictividad social, en tiempos de auge de la expansión hidrocarburífera.

Así, la *cigüeña*, y la restante infraestructura de la industria hidrocarburífera, en su materialidad, “acumula fuerzas productivas y deseos, tanto como destrucción y deterioro” (Steyerl, 2014: 56). Condensa, asimismo, los sentidos desplegados por el paradigma desarrollista que le dio origen y fundamento a su proyecto de territorio, así como las expectativas actuales de generación de riqueza o mejora del ingreso para distintos actores. Para las empresas el objetivo es optimizar la rentabilidad, mientras que para

las instancias estatales provinciales y locales se trata de garantizar el suministro de combustible necesario para el desarrollo de la vida productiva del país y de aumentar las regalías. Los pobladores locales (indígenas y no indígenas), en franca desventaja al no ser dueños del subsuelo ni poder intervenir en las decisiones que se toman sobre los minerales, intentan mejorar sus ingresos ya sea vía el empleo en la industria o el cobro de servidumbres, teniendo en cuenta que sus actividades agrícola-ganaderas se ven seriamente afectadas y limitadas por el despliegue de la industria hidrocarbúfera.

Así, este proyecto territorial genera un nuevo escenario en el que se rearticulan y emergen nuevos y viejos actores sociales en fricción, como vimos con el devenir de la comunidad Newen Kurruf y el de su litigio, con otros proyectos que, con otras historias y desigual capacidad de agencia, siguen siendo parte del presente en la región.

Paisajes y agencias desiguales

Donde afloran las *cigüeñas*, cambia el paisaje y se expresan nuevos regímenes de uso, autoridad y legitimación que entran en fricción con regímenes anteriores impuestos por el mismo Estado (en sus distintos niveles) y por los usos tradicionales. Podríamos postular, en realidad, a los propios proyectos territoriales como sucesivas fricciones y nuevos escenarios devenidos de ellas. Algunos quedan ocluidos, y otros conviven conflictivamente como *capas superpuestas*. Abordarlos requiere, en todo caso, reponer su historicidad.

Sobre el proyecto territorial previo a la conquista militar, impactó la extensión de la frontera agropecuaria de la llanura pampeana que, en las últimas décadas del siglo XIX, forzó el desplazamiento de pobladores (familias, comunidades enteras) como los bisabuelos de la *lonko* de la comunidad Newen Kurruf hacia el norte de la Patagonia (actuales

provincias de Río Negro, Neuquén y norte de Chubut). En el caso de los antepasados de la comunidad, previamente pobladores de la zona de Azul (Provincia de Buenos Aires), fueron desplazados junto al “resto de la tribu de Catriel” en febrero de 1879, antes de las campañas militares, para conformar la colonia General Conesa en el entonces Territorio Nacional de Río Negro. La creación de la colonia buscaba incorporar tierras al circuito productivo agrícola-ganadero en expansión (Pérez, 2014; Mombello y Spivak L’Hoste, 2019). Sin embargo, ese propósito fracasó debido, fundamentalmente, a que el tamaño de los lotes era inadecuado para la ganadería extensiva y las tierras eran de una productividad insuficiente para la subsistencia. Con los años las precarias condiciones en las que se vivía en la colonia llevaron a algunos pobladores a solicitar al Estado nacional nuevas tierras para habitar (Pérez, 2014)²⁰.

Desde 1900 hasta 1904, ocurrió el desplazamiento de las familias hacia donde se conformaría la colonia agrícola pastoril Catriel. El proyecto original de la colonia se situaba en la zona de Medanito de los Barriales. Estimaba una superficie de 125.000 hectáreas, divididas en 200 lotes de 625 hectáreas cada uno, destinada a las familias indígenas, y reservaba 5.000 hectáreas para futuras colonizaciones agrícolas y la formación de centros urbanos. Según la normativa que regía para la entrega de campos, se debía demostrar cinco años de residencia continua y una serie de mejoras para contar con la propiedad definitiva. Ahora bien, en la práctica las ocupaciones de los lotes nunca se oficializaron. Esto, sumado a que dichos lotes estaban en tierras de regular calidad y con carencia de agua, produjo la dispersión de las familias, como las de la *lonko* de Newen Kurruf,

²⁰ En ese marco Bibiana García comenzó, en 1896, las gestiones para solicitar 10 mil leguas (125.000 hectáreas) de campo fiscal entre los ríos Negro y Colorado a fin de destinarlas a ganadería y agricultura para ella y su tribu, compuesta de 900 personas. Estas tierras le fueron cedidas mediante decreto presidencial en julio de 1899.

sobre la costa del río Colorado, para obtener agua y mejores suelos (Luorno, 2008).

Estos desplazamientos no solo involucraron personas. Junto con ellos, se desplazaron formas de vida y modos de dar sentido a esas vidas, atravesados por negociaciones en condiciones asimétricas de poder, violencias diversas y estrategias de supervivencia y organización. El proyecto territorial basado en los desplazamientos se expresó materialmente con la aparición y extensión del alambrado. Es contra esta materialidad que se construye la memoria del *campo abierto*, que explicita la *lonko* al recordar el acuerdo de palabra respecto del uso del *puesto* y del predio con su primer propietario, Mabellini. Aquel *campo abierto* hace referencia no solo a las posibilidades de circulación y a un proyecto territorial como el del *puesto* que se expresaba en otro paisaje, sino, y fundamentalmente, a otra manera de concebir la organización de lo común.

Según Richard y Hernández, “para estudiar dónde se activan las fuerzas del capital hay que mirar por dónde van sus alambradas” (Richard y Hernández, 2018: 88). Consideran el alambrado como un *indicador sensible* en cuanto su aparición resulta disruptiva, repentina y muy evidente, y trasforma radicalmente el paisaje. La relevancia del alambrado no solo se debe a su impacto inmediato, sino a las reconfiguraciones territoriales que supone y a su perdurabilidad en el tiempo. Hoy, como en el siglo XIX, en Norpatagonia los alambrados continúan organizando el espacio y expresando la sedimentación de disposiciones jerárquicas y desiguales entre grupos y sectores sociales (Grossberg, 1992). Tal como puede observarse en Catriel y, específicamente, en la comunidad Newen Kurruf, el alambrado en esta zona es la expresión de la fricción entre el proyecto territorial mapuche y el de la extensión de la frontera pecuaria y la privatización de la tierra. Fricción que tiene fecha de inicio (principios del siglo XX) y que perdura con singular eficacia hasta el presente. En la historia del litigio, se ha referido a la particular condición del alambrado, y

la tranquera como puerta de entrada al *puesto*, como cli-vaje material, expresión de las tensiones alrededor de la definición del estatuto jurídico de la tierra: fiscal, comunitaria o privada.

Para esta comunidad, como para el resto del pueblo mapuche, el alambrado significó también la limitación de la ganadería por trashumancia. Efectivamente, el alambrado “opone una ganadería móvil [...] que se acopla al animal en largas peregrinaciones por entre aguadas y pastizales distantes [...] a otra ganadería de superficies compartimentadas” (Richard y Hernández, 2018: 86). Ya referimos cómo el *puesto* emerge de esta fricción y genera un nuevo proyecto territorial. El litigio de la comunidad Newen Kurruf y su reclamo de reconocimiento de permanencia en el Puesto La Marga por cuatro décadas con patrones de ocupación tradicional también tienen que ver con este proceso.

Ahora bien, en Catriel (como en otras zonas petroleras de la Patagonia), el alambrado no quedó circunscripto a los procesos de enajenación de la tierra, de modificación de la producción ganadera y de la transformación del paisaje. Por el contrario, se extendió y diversificó su incidencia con la expansión de la industria hidrocarbúrica. Efectivamente, el alambrado acompaña también a la *cigüeña* y consolida su proyecto territorial.

Esta consolidación, en lugar de operar sobre la oclusión del proyecto territorial devenido con la expansión de la frontera agraria, se sobreimprime, formando capas superpuestas. Así, un alambrado no reemplaza al otro, sino que se agrega multiplicando la organización *claustrológica* del espacio, que implica “una nueva forma de organizarse la propiedad, una nueva forma de organizarse la relación animal-vegetal-humano, y una nueva forma de escribirse o simbolizarse los límites” (Richard y Hernández, 2018: 87). En el caso del cerramiento de la infraestructura petrolera, el alambrado se presenta también como elemento de seguridad, para preservar tanto el instrumental como la integridad de los seres vivos que circulan por la zona. Así,

esta *claustrológica*, como señalan los mismos autores, no solo encierra la infraestructura, sino que es una manera de encerrar humanos y animales al revés. Es decir, dejándolos afuera. Aquello que se presenta como medida de seguridad constituye la materialidad que organiza agencias desiguales donde, a quienes quedan encerrados del lado de afuera, se les niega la capacidad para intervenir en las decisiones que se toman sobre el territorio, los sistemas productivos y la renta.

Reflexiones finales: sobre el devenir de las materialidades y las fricciones en el territorio

El litigio, como vimos, condensa procesos sociales, territoriales y económicos de larga data y expone interacciones entre actores sociales y sectores de interés con agencia desigual. Reponer la historicidad y emergencia de algunas materialidades permite, en cierta medida, desagregar la complejidad de estos procesos y dar cuenta no solo de las desigualdades de agencia entre los actores implicados, sino también de sus diferencias constitutivas. Estas diferencias remiten tanto a sentidos, trayectorias y recorridos diversos, como a personas jurídicas claramente diferenciadas. Efectivamente, se trata de un litigio entre la comunidad Newen Kurru y dos particulares definidos como “propietarios”. Cada persona jurídica implicada cuenta con sus propias materialidades respaldatorias, los *documentos*, con su propio peso específico para la causa. Los primeros cuentan con certificaciones de ocupación, registros como comunidad ante instancias nacionales y provinciales y otras documentaciones que acreditan su *status* comunitario, su pertenencia originaria, y su permanencia en el territorio. Los segundos esgrimen títulos de propiedad y órdenes de desalojo. El Estado, en sus distintas instancias y niveles, paradójicamente, reconoce tanto a unos como a otros. Esto es así debido a

que es responsable de los documentos que, a lo largo de los años, han otorgado legalidad a los diversos reclamos. Estos reconocimientos se vuelven paradójicos, en la medida que, lejos de resolver las tensiones, las exacerban, a la vez que omiten la propia responsabilidad estatal en la generación de los conflictos, manteniendo invisible su protagonismo en los procesos históricos y actuales de enajenación de los territorios indígenas.

No obstante, en el territorio se dejan ver las huellas del litigio y de las acciones que se despliegan en función de aquellas legitimidades reconocidas. Volviendo al momento de la llegada a La Marga, recuperamos los primeros signos que advertían las tensiones en el ingreso al territorio: la tranquera, la bandera mapuche, el candado, la cámara de vigilancia. En este punto las posiciones irreconciliables entre *las partes* (en lenguaje jurídico) se ponen en evidencia, y los *propietarios*, los sentidos que sostienen sus lógicas, parecen adquirir particular relevancia. Pasando la tranquera, ellos se desdibujan, y priman las acciones y experiencias de la comunidad abriéndose paso ante otro actor con mucha más relevancia y poder, también con su historia: la industria hidrocarburífera. Por el camino sinuoso, alcanzamos el *puesto*, vemos las instalaciones relativas a la actividad ganadera a pequeña escala y, en los alrededores, se multiplican las cigüeñas y las marcas del desmonte en líneas rectas por donde pasan las tuberías propias de la industria. El devenir de las materialidades de las rectas y sinuosidades yuxtapuestas en el territorio, de las fricciones que implican y de las tensiones que no resuelven va hilvanando las temporalidades no lineales y, sin embargo, convergentes con las que la comunidad expresa, pone en palabras el proyecto del *puesto*. Así, la orden de desalojo vigente en el siglo XXI se contesta y se significa trayendo al presente los acontecimientos de fin del siglo XIX a los que alude la comunidad cuando se le pregunta por el problema actual. No obstante, estas temporalidades convergentes no resultan antojadizas, ni son exclusivas de esta comunidad. Por

el contrario, ponen de manifiesto y actualizan los quiebres sobre los que se desplegaron las sucesivas fricciones. Estas fricciones terminaron constituyendo el horizonte de posibilidad tanto para el proyecto de la *cigüeña*, como para el anterior, relativo a la expansión de la frontera agropecuaria. Ambos modificaron sustantivamente el *campo abierto*, las interrelaciones y dinámicas sociales, el alambrado acompaña y refuerza esos proyectos territoriales.

Por su parte, las temporalidades convergentes en las que se entrama el proyecto del *puesto* desafían la legitimidad del alambrado y su *claustralógica*, signada por el proceso de cercamiento y despeje (esto es, expulsión de los pobladores rurales), momento fundacional de la creación de la propiedad y con él de la mercantilización de la tierra y la transformación drástica del paisaje (Richard y Hernández, 2018)²¹. A la manera de la ruta señalada por Tsing (2004), la fricción que expresa el alambrado en Patagonia, y en particular en el caso recorrido, altera las trayectorias tradicionales, habilita y determina los modos posibles de transitar, produciendo exclusiones y modelando tanto espacios como dinámicas y procesos de producción e interacción social. Así, el acontecer del alambrado (Ingold, 2013) resulta más relevante y determinante que las mismas fronteras jurisdiccionales de las que ambos proyectos, el del *puesto* y el de la *cigüeña*, se conciben desacoplados.

Efectivamente, el proyecto de la *cigüeña* ordena su expansión y desarrollo a partir de la noción de “cuenca”. Las cuencas abarcan regiones amplias, en la zona de Catriel se trabaja sobre la llamada “cuenca Neuquina”,

21 Para ejemplificar estos procesos y sus implicancias, los autores, no por casualidad, toman un caso patagónico: “La industria ovejera en Tierra del Fuego, por ejemplo, es con alambre inglés. Es decir que, en un primer momento, el alambre no redonda ni sobrescribe formas anteriores de cercado, sino que funda propiedad ahí donde no la había y entonces, inversamente, revela o muestra esas nuevas formas de propiedad” (Richard y Hernández, 2018: 85).

que atraviesa parte de las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, así como varios ejidos municipales. La *cigüeña* configura su proyecto territorial sobre la cuenca en su conjunto, tratando al área como una unidad restringida al subsuelo, donde la localización de los yacimientos se determinará teniendo en cuenta las variables intrínsecas de la industria (factibilidad, reserva, calidad del mineral, etc.). El resto de los aspectos, aquellos que se relacionan con la gestión del subsuelo (gobiernos locales) y los usos de la superficie (actores superficiarios, comunidades, propietarios, pobladores con derechos de uso o pastaje, etc.), se consideran subordinados a las variables principales.

Por su parte, el proyecto del *puesto* implica, como se mostró, la articulación de varias locaciones en un recorrido amplio y dinámico modelado por el alambrado. Asociado con la trashumancia de origen, las personas y los animales circulan atravesando jurisdicciones provinciales, municipales y, en ocasiones, nacionales. Estos recorridos pueden adoptar rodeos importantes en el afán de esquivar los alambrados, encontrar agua y acceder a ella. O se realizan utilizando las rutas concebidas para el tráfico automotor, una alternativa eficaz para evitar el alambre y los postes que cercaron el *campo abierto*, como los riesgos implícitos para la integridad de animales y personas al transitar entre las instalaciones hidrocarburíferas diseminadas por el territorio.

Imagen 8. Desplazamiento de ganado por las rutas neuquinas



Fuente: elaboración propia.

A diferencia del poder del proyecto de la *cigüeña* para imponer su propia configuración territorial, el *puesto* se sostiene en las tensiones con los dueños de la superficie y los administradores del subsuelo. Se reinventa, incorpora las ciudades y las rutas en su configuración territorial, esquivando *cigüeñas* y alambres, atravesando jurisdicciones y disputando desde las temporalidades convergentes los sentidos del presente y del futuro de la vida en común, incluyendo la relación con los bienes de la naturaleza.

Así, la extensa meseta, con sus desniveles y homogeneidad de pigmentos, que aquella mañana al llegar al Puesto La Marga aparecía ante nuestros ojos visitantes como un espacio con escasas marcas de vida social, fue cobrando otros sentidos. Sus chivas y ovejas, sus picadas invisibles a nuestro paso por la ruta, las tranqueras que habilitan accesos y conectan los caminos internos con esas rutas y con los centros urbanos, así como las viviendas meseta adentro, son

algunas materialidades que, puestas en relato y en imágenes a lo largo de nuestra investigación, permiten exponer los trazos humanos, históricos y presentes que dieron y dan forma al proyecto del puesto. La dispersión de las cigüeñas en el paisaje, con la imponente de su tamaño y su mecánico movimiento, no solo nos evidencia que no se trata del único proyecto de territorio que se imprime sobre ese espacio. También explicita el dinamismo que tienen estos proyectos, sus interacciones y transformaciones temporales y las dimensiones de poder que los restringen o los favorecen, y sobre las cuales queda aún mucho por decir.

Bibliografía

- Bernal, Federico (2005). *Petróleo, Estado y soberanía. Hacia la empresa multietatal latinoamericana de hidrocarburos*. Buenos Aires: Biblos.
- Cabral Marques, Daniel y Crespo, Edda (2006). “Entre el petróleo y el carbón: empresas estatales, trabajadores e identidades sociolaborales en la Patagonia austral (1907-1976)”. En Bandieri, Susana, Blanco, Graciela y Varela, Gladys (directoras). *Hecho en Patagonia. La historia en perspectiva regional*. Universidad Nacional del Comahue, publicaciones del CEHIR, EDUCO.
- Cañuqueo, Lorena (2016). “Las poblaciones que dejó la gente: taperas, memorias y pertenencias en la Línea Sur de Río Negro”. En Ramos, Ana, Crespo, Carolina y Tozzini, Alma (eds.). *Memorias en lucha. Recuerdos y silencios en el contexto de subordinación y alteridad*. Viedma: Editorial de la Universidad de Río Negro.
- Cañuqueo, Lorena, Kropff, Laura y Pérez, Pilar (2007). “El ‘paraje’ y la ‘comunidad’ en la construcción de pertenencias colectivas mapuche en la provincia de Río Negro”. En VIII Congreso Argentino de Antropología

Social, Universidad Nacional de Salta, del 19 al 22 de septiembre.

- Díaz, Nora y Fuentes, Vanina (2008). "Explotación de recursos hidrocarburíferos: base de la economía neuquina". Ponencia presentada en las Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia. San Carlos de Bariloche.
- Favaro, Orietta (1999). *Neuquén. La construcción de un orden estatal*. CEHEPYC, Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura; Neuquén, Universidad Nacional del Comahue.
- Grossberg, Lawrence (1992). *We gotta get out of this place. Popular conservatism and postmodern culture*. Nueva York: Routledge.
- Ingold, Tim (2013). "Los materiales contra la materialidad". *Papeles de Trabajo*, año 7, n.º 11, mayo, pp. 19-39.
- Iuorno, Graciela (2008). "La provincialización de Río Negro. Interregno y conflictos de intereses nacionales y locales". En Iuorno, Graciela y Crespo, Edda (coords.). *Nuevos Espacios. Nuevos problemas. Los territorios nacionales*. Neuquén: Educo-Universidad Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CEHEPYC.
- Iuorno, Graciela, Miralles, Glenda y Nasser, Karim (2007). "Actores y espacio público en la etapa territorialiana. El Departamento General Roca y su desigual integración". Ruffini, Martha y Maser, Ricardo Freddy (comps.). *Horizontes en perspectiva. Contribución para la Historia de Río Negro (1884-1955)*. Viedma: Fundación Ameghino.
- Kaplan, Marcos (1981). *Aspectos del Estado en América Latina*. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Klachko, Paula (2005). "Las consecuencias políticas y sociales de la privatización de YPF. El impacto en las localidades de Cutral C6 y Plaza Huincul". *Realidad Econ6mica*, n.º 209, enero/febrero, pp. 32-57.

- Kropff, Laura y Spivak L'Hoste, Ana (2021). "Energía y territorio: tensiones en torno a la planificación de un parque eólico en Argentina". Mimeo.
- Lenton, Diana (2005). "De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880-1970)". Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Manzanal, Mabel (1983). *Agro, Industria y Ciudad en la Patagonia Norte*. Buenos Aires: Ediciones CEUR.
- Massey, Doreen (2005). *For Space*. Londres: Sage Publications.
- Mombello, Laura (2018). *Por la vida y el territorio. Disputas políticas y culturales en Norpatagonia*. Mar del Plata: EUDEM.
- Mombello, Laura y Spivak L'Hoste, Ana (2019). "Catriel: tenencia de la tierra y ordenamiento territorial en una localidad petrolera". En Pérez, Pilar, Cañuqueo, Lorena, Kropff Causa, Laura y Wallace, Julieta (comps.). *La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente*. Viedma: Editorial de la Universidad de Río Negro, pp. 179-198.
- Nagy, Mariano (2014). "Los Catriel, de amigos a apresados. ¿El fin o la continuidad de una estrategia?". *Runa*, vol. 35, n.º 1, pp. 93-112.
- Navarro Floria, Pedro (2002). "El desierto y la cuestión del territorio en el discurso político argentino sobre la frontera sur". *Revista Complutense de Historia de América*, vol. 28, pp. 139-168.
- Ortiz, Ricardo (2008). "La extracción de recursos naturales y la persistencia de las reformas neoliberales en la Argentina 'progresista'". Ponencia presentada en el Seminario "Postneoliberalismo. Cambio o continuidad". CEDLA, La Paz.
- Pérez, Pilar (2014). "De Azul a Colonia Catriel: estado, indígenas y la producción del espacio social en geografías

- condicionadas (1877-1899)". *Revista TEFROS*, vol. 12, n.º 1, pp. 123-152.
- Ramos, Ana y Cañuqueo, Lorena (2018). "Para que el winka sepa que este territorio lo llamamos de otra forma". Producción de memorias y experiencias de territorio entre los mapuche de Norpatagonia". *Runa*, vol. 39, n.º 1, pp. 23-40.
- Richard, Nicolás y Hernández, Consuelo (2018). "Las alambradas en la Puna de Atacama: alambre, desierto y capitalismo". *Revista Chilena de Antropología*, n.º 37, pp. 83-107.
- Rögind, William (1937). *Historia del Ferrocarril Sud*. Buenos Aires: Establecimiento Gráfico Argentino S.A.
- Solberg, Carl (1986). *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*. Buenos Aires: Hispamérica.
- Steyerl, Hito (2014). *Los Condenados de la Pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Tsing, Anna (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Yeatts, Guillermo (1996). *El robo del subsuelo*. Buenos Aires: Teoría.

2

Llamas, brasas y cenizas (y la tierra aún caliente)

*Montajes y figuraciones posibles entre imágenes,
tiempo y territorio*

AGUSTINA TRIQUELL

Mejor paranoica por exceso de conexiones, que muerta por carecer completamente de ellas.

Donna Haraway

Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, ser capaz de distinguir ahí donde la imagen arde, ahí donde su eventual belleza reserva un lugar a un “signo secreto”, a una crisis no apaciguada, a un síntoma. Ahí donde la ceniza no se ha enfriado.

Georges Didi-Huberman

En septiembre del 2020, Córdoba ardía. Más de 10 focos en simultáneo en los diferentes valles de la provincia dejaron, según el informe de emergencia por incendios producido por el INTA, un saldo de 44.028 hectáreas quemadas¹, entre julio y septiembre del 2020. Según este informe, también

¹ Tomamos esta cifra del informe del INTA.IGAC. La estimación de la Federación de Bomberos de Córdoba estima un total de 46.827 hectáreas, y la CONAE, por su parte, indica un total de 47.569 ha.

aproximadamente el noventa por ciento de las coberturas quemadas corresponde a vegetación nativa.

Este acontecimiento afectó, entre otros territorios, al Valle de Paravachasca², a las localidades de Anisacate, Alta Gracia, Los Aromos, La Paisanita y José de la Quintana principalmente. Si bien no era la primera vez que esta zona se veía afectada por incendios forestales intencionales, la diferencia fue que, esta vez, el fuego me tomó cerca. La afectación por la cercanía y por la vivencia cotidiana de aquellos días es el motor de escritura de este texto. Desde los comienzos del aislamiento social preventivo y obligatorio, dictado por el gobierno nacional como medida sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19, vivo en la localidad de Anisacate. Mientras escribo, y mientras progresivamente regresa la presencialidad a mis actividades en Buenos Aires, tomo distancia –espacial, emocional– de aquellos días. La urgencia de los días del fuego fue el acontecimiento que, después de meses de aislamiento y sociabilidad reducida, me permitió entramar en espacios de participación comunitaria, algunos que ya conocía y de los que había formado parte tiempo atrás y otros nuevos, desconocidos hasta entonces para mí, como el de la Asamblea Paravachasca.

Esta breve nota biográfica se proyecta también en un sentimiento compartido, en la experiencia cercana de vecinxs que buscaron en la asamblea un espacio para la gestión colectiva de lo que estaba sucediendo para, de algún modo, formular posibles respuestas al qué hacer. El espacio de la asamblea, que había tenido cierta periodicidad de reuniones en el contexto de la discusión de la ley de bosques en 2016, se reactivó quintuplicando la cantidad de vecinxs

2 Valle de Paravachasca refiere a una región turística de la provincia de Córdoba, a unos 30 km hacia el suroeste de la capital, entre los valles de Punilla y de Calamuchita. “Paravachasca” es un vocablo de origen comechingón que significa ‘lugar de vegetación enmarañada’, ‘montes enmarañados’ o ‘lluvias a destiempo’ (bit.ly/Paravachasca).

que se sintieron convocadxs³, sumado al crecimiento poblacional de las localidades del valle que, como en mi caso, convirtieron en vivienda permanente sus casas familiares de veraneo. Con el fuego cerca, la Asamblea Paravachasca se volvió un espacio de participación quincenal en las plazas de las diferentes localidades del valle y, también, un grupo de difusión de WhatsApp en el que se reportaba el estado de los incendios, los puntos de acopio de agua, frutas, borceguíes y chicotes, la caja de ahorro de alguna agrupación de bomberxs voluntarixs o brigadistas que buscara donaciones, rifas y eventos solidarios, así como también las coordenadas de cada encuentro asambleario.

Los días de septiembre corren y algunas jornadas no dan respiro: cambia el viento, aumenta la temperatura. La demanda de guardias de ceniza para evitar la reactivación de focos controlados es recurrente. Corren los días y corren imágenes: la asamblea produce, difunde y reenvía fotografías y videos generados por vecinxs y brigadistas en las líneas de fuego. “Arde el monte, arde la imagen”, apunto en mi cuaderno, y busco en mi biblioteca el texto de Didi-Huberman que mi memoria dispara:

[...] *la imagen arde*. Arde con lo *real* a lo que, en algún momento, se acercó (como cuando se dice, en los juegos de adivinanza, “te estás quemando” en lugar de “casi encuentras lo que está escondido”). Arde por el *deseo* que la anima, por la intencionalidad que la estructura, por la enunciación, e incluso por la urgencia que manifiesta (como cuando se dice “ardo por usted” o “ardo de impaciencia”). Arde por la *destrucción*, por el incendio que estuvo a punto de pulverizarla, del que escapó y del que, por consiguiente, es hoy capaz de ofrecer todavía el archivo y una imaginación posible. Arde por el *resplandor*,

³ No me detendré aquí en las dinámicas organizaciones, su pico de participación en aquellos meses y los diferentes acontecimientos que fueron desarticulando el espacio y su campo concreto de acción, sino que me interesa recuperar los ritmos de participación en los meses en que se enmarca el texto, las dinámicas acciones propuestas más allá de los niveles de convocatoria alcanzados en unas u otras.

es decir, por la posibilidad visual abierta por su mismo ardor: verdad preciosa pero pasajera, debido a que está condenada a apagarse (como una vela que nos ilumina pero que, al arder, se destruye a sí misma). Arde por su intempestivo *movimiento*, incapaz como es de detenerse a medio camino (o de “quemar etapas”), capaz como es de bifurcarse constantemente, de tomar bruscamente otra dirección y partir (como cuando se dice de alguien que debió irse porque “está en llamas”). Arde por su *audacia*, cuando vuelve todo retroceso, toda retirada, imposible (como cuando se dice “quemar los puentes” o “quemar las naves”). Arde por el *dolor* del que proviene y que contagia a todo aquél que se toma la molestia de abrazarlo. Por último, la imagen arde por la *memoria*, es decir, que no deja de arder, incluso cuando ya no es más que ceniza: es una forma de expresar su vocación fundamental de sobrevivir, de decir: Y sin embargo...

Pero, para saber sobre esto, para sentirlo, es preciso atreverse, es preciso acercarse al rostro a la ceniza, y soplar suavemente para que la brasa, por debajo, vuelva a producir su calor, su resplandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: “¿No ves que estoy en llamas?” (Didi-Huberman, 2012: 42-43).

¿Cómo arden entonces estas imágenes, las que llegan calientes instantes después de ser tomadas cerca de la línea de fuego, aquellas que el resplandor mismo de la llama permite fijarlas abriendo la posibilidad visual de volverse evidencia? ¿Qué mirada reclaman al día siguiente, con el peligro latente de la brasa que, avivada por el viento, puede reactivar el fuego ya controlado? ¿Y qué imágenes aparecen después, como cenizas del acontecimiento, para activar esta memoria, aquello que allí no deja de arder?

Imagen-llama, imagen-brasa, imagen-ceniza. Figuras posibles del tiempo y de las disputas visuales en torno a los acontecimientos que afectan al territorio. Sus usos y sentidos proponen diferentes modos de hacer: arden con lo real, como registro indicial del acontecimiento, arden en movimiento, puestas en circulación, convirtiéndose en llamamiento, pero también como proyección hacia

un afuera, como un resplandor que se proyecta en múltiples relatos de la experiencia vivida hacia fuera del territorio.

Me propongo entonces aquí mirar estas imágenes, que ya fueron eliminadas de los teléfonos por falta de espacio, y que, si no hubiesen sido descargadas, se habrían perdido, a fin de liberar espacio para otras que vinieron después⁴. Estas imágenes, recolectadas de grupos de WhatsApp, principal pero no exclusivamente de la Asamblea Paravachasca, dan cuenta de los diferentes modos de aparecer de fotografías y videos que, con distinto ritmo e intensidad según la urgencia de los acontecimientos, se entramaron comunitariamente como un elemento central tanto en la gestión de las emociones frente a la catástrofe, como en la organización de posibles acciones colectivas. Estos grupos, conformados por vecinxs del lugar, son gestionados como listas de difusión de las organizaciones, por lo que los materiales puestos en circulación son las producciones propias (piezas gráficas y audiovisuales) que buscan ser reenviadas, proyectando así mayor recepción. Sin embargo, estas imágenes no se producen de forma aislada: responden, refieren y disparan a otras imágenes, generadas por actores que también proyectan sus propios imaginarios visuales sobre el territorio. Aquellas fotografías y *renders* que imaginan un futuro de progreso y desarrollo en la zona, promocionando modos

⁴ El rescate de estas imágenes (su descarga y su sistematización en un espacio de almacenamiento virtual) se realizó con un doble propósito. Por un lado, para la escritura reflexiva en torno a estos materiales y, por el otro, para la constitución de un archivo de gestión colectiva que permita mirar estas imágenes tiempo después para pensar con/desde ellas. Este espacio se propulsó desde la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti, en el marco del proyecto “MALEZA. Laboratorio colectivo de creación visual, audiovisual y sonora desde los territorios”, en el que se convocó a “realizadores visuales, audiovisuales, artistas, músicxs y curiosxs a participar en la conformación de un archivo visual, audiovisual y sonoro de nuestros territorios para fabular a partir de estos registros historias que nos entramen, para imaginar juntxs futuros en común”. Dos piezas audiovisuales fueron generadas a partir de materiales de registro de las jornadas del fuego, puestos en relación con nuevos materiales producidos por sus participantes. Uno de ellos puede verse en este enlace: bit.ly/3NOrx3Z.

alternativos de habitar, modos no urbanos, formas de “vivir mejor”. Además de esos dos conjuntos de imágenes, existen y circulan otro tipo de piezas, aquellas producidas por artistas locales que aportan también su propia mirada, puesta en circulación tanto en el mismo grupo de WhatsApp de la asamblea como también en redes sociales propias, en afiches, *stickers* y otros productos gráficos.

Me interesan los ritmos y modos en que las imágenes son convocadas en las sucesivas coyunturas, en la urgencia del llamamiento cuando el fuego quema, en los momentos de cierta calma en los que se permite otro tipo de imaginación (y aparecen otras imágenes, otro registro) y en la posibilidad de gestión de posibles futuros, de articulación de consignas en torno al planeamiento territorial y la gestión colectiva poscatástrofe. La imagen como lugar privilegiado de aparición del reclamo colectivamente articulado y del modo de dar presencia -de hacerlos *aparecer*- a agentes no humanos que participan de esta disputa.

La recolección de estas imágenes abarca un arco temporal que comienza con las primeras imágenes de los días del fuego, de los incendios de agosto y septiembre de 2020, hasta las gestiones y resistencias frente a la presentación del proyecto de ley de realización de una autovía (Variante Ruta 5) por parte del Ejecutivo provincial a la Legislatura de Córdoba en diciembre del mismo año⁵, atendiendo a las piezas gráficas, fotográficas y audiovisuales que se fueron produciendo hasta mediados del 2021. Estos dos eventos

⁵ El 15 de diciembre de 2020, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley en el que solicita la expropiación de “los bienes necesarios para la ejecución de las obras: Variante Ruta Provincial n.º 5 – Tramo: Rotonda Ruta Provincial n.º 5 (km 25,5) y el Acceso a la Localidad de Villa Los Aromos (km 45,2)”. Con el argumento de descomprimir la congestión de tránsito que se genera en verano y el último día de los fines de semana largos en el tramo Villa Ciudad de América a Anisacate, el gobierno provincial propone una nueva ruta, llamada Variante Ruta 5, que pasaría por detrás de Dique Chico, en zona de campos, cruzaría el río Anisacate en un nuevo puente, luego por detrás a las localidades de Los Talas y llegaría a Villa Ciudad América. Comunicado Asamblea Paravachasca, enero 2021.

se enlazan argumentativamente en el reclamo de la asamblea, estableciendo una relación causal hipotética entre el primero y el segundo. Bajo la consigna: “La autovía NO es prioridad. Cuidar el monte, salud, acceso al agua, educación y buen vivir SÍ”, la Asamblea Paravachasca moviliza las acciones contra el desarrollo de la instalación de la autovía Variante Ruta Provincial 5, reclamando la participación ciudadana real y la consideración de los correspondientes informes ambientales sobre su impacto, como así también la evaluación de posibles variantes a la traza propuesta⁶.

Montaje temporal de eventos, montajes de imágenes que permiten establecer esta relación: imágenes del fuego, junto con fotos de arroyos, ríos y pájaros, son convocadas a dar testimonio; el recuerdo del fuego y la agencia de estas imágenes como argumento central para resistirse al proyecto de la autovía. Estas imágenes, en fricción con las producidas por desarrollistas locales para la venta de sus loteos, especulan en torno al futuro, en cuanto definición de prioridad, entendida como aquello que implica una anterioridad respecto a otra. Frente al proyecto del gobierno provincial de desarrollar una variante de autovía, la consigna desde la asamblea articula otros reclamos comunitarios que perciben como prioritarios. Esta consigna toma múltiples formas y produce nuevas imágenes, que buscan instalarse en el espacio público como una demanda, casi como un requerimiento previo al desarrollo (posterior) de la autovía.

⁶ La coincidencia de la ruta demarcada con la ocurrencia de los incendios forestales alimenta las conjeturas respecto a la intencionalidad del Estado provincial. La mayoría de las zonas afectadas por incendios terminan en un cambio de uso del suelo, siguiendo una tendencia progresiva que avanza desde la apertura de caminos y la planificación de redes viales provinciales, aunque esto vaya en contra de la ley. A su vez, el mismo gobernador de Córdoba ha anunciado públicamente un Plan de Restauración para las zonas incendiadas, y que el caso de Los Aromos, por donde se conectará la autovía con la actual rotonda de la Ruta Provincial n.º 5, es uno de los sectores que estaba contemplado para dicha restauración (comunicado de la Asamblea Paravachasca, marzo de 2021).

Parto de la intuición de que las imágenes son un modo particular de relación con el mundo, que nos permite corrernos de la linealidad propia de la argumentación sostenida en palabras, para dar lugar a pensamientos silvestres (Kohn, 2021), a pensar a partir de ellas y a construir en la experiencia misma de mirarlas una serie de figuraciones que nos habiliten modos posibles de establecer universos en común, de generar juegos de mirada en correspondencia: ¿cómo mirar aquello que nos rodea sin traducirlo en la representación occidental del paisaje o de la naturaleza, sin domesticar un punto de vista legítimo sobre aquello que se nos presenta por sobre otros posibles?

Intentaremos responder a esta advertencia utilizando dos procedimientos analíticos complementarios. Primero, el montaje de los materiales visuales existentes como una operación que habilita desplegar la potencia de reflexividad propia de la imagen, tal como lo entiende Didi-Huberman (2006, 2009, 2012) desde Benjamin. Montar una imagen con otra permite el pensamiento desde las imágenes, su puesta en relación, donde cada pieza constituye un fragmento que, en su articulación conjunta, habilita una experiencia sensible que une retazos de lo real. El montaje es también una manera de desestabilizar el tiempo lineal moderno, que aparece en la lógica dominante de organización de los archivos visuales (en las temporalidades mismas de los territorios aquí abordados) y permite generar una convivencia de tiempos y espacios. También son montajes de imágenes y textos las piezas gráficas y audiovisuales que los mismos actores producen y que, en su propia construcción montajística, establecen su propio tiempo⁷; estas serán analizadas en ciertos pasajes del texto.

7 Andréi Tarkovski dice en *Esculpir en el tiempo*: “Montaje es unir partes mayores y más pequeñas de una película, partes con tiempos diferentes. Sólo su unión aporta la nueva sensibilidad para con la existencia de este tiempo, que es el resultado de exclusiones, de aquello que se corta y se tira” (Tarkovski, 2000: 145). Y continúa más adelante: “El modo de estructurar el montaje perturba el flujo del tiempo, o interrumpe y le concede una nueva cualidad.

A partir de estos montajes, como muros de obsesiones en las que buscamos elementos en común que se repiten, pero que también pueden ser puestos en contraste o en contrapunto, generar metonimias y sinécdoques de otras, procederé a una segunda operatoria, la de construir figuraciones. La propuesta viene de la mano de Donna Haraway (1999, 2017, 2019), quien, más preocupada por hacer operable el concepto que por definirlo (hacer figuraciones), las presenta señalando no aquello que son, pero sí lo que producen:

No se limitan como unidades discretas, no son representativas, asumen la contingencia histórica, la artefactualidad, la espontaneidad, la fragilidad y los excesos de la naturaleza. Siempre se hallan entre lo humano y lo no humano, entre lo orgánico y lo tecnológico, entre la historia y el mito, entre la naturaleza y la cultura y [lo hacen] de formas inesperadas (Haraway, 2017: 3).

Arriesgar figuraciones para volver aprehensible un acontecimiento y sus posteriores derivas, palabras que se habilitan como catálogo de posibilidades de existencia nunca exhaustivas, habilitadas por la performatividad misma de las imágenes. Figuraciones que permitan entonces dar cuenta de modos específicos de relación entre imagen/tiempo/territorio: articulaciones situadas de modos temporales de relación con las imágenes que producen territorio, en cuanto objetos semiótico-materiales en disputa.

Como señalé más arriba, la procedencia de las imágenes es múltiple, y será el desafío aquí construir montajes y figuraciones con materialidades diversas. A lo largo del texto, me ocuparé de mirar cómo diferentes actores configuran imaginarios de futuro a través del *uso* de imágenes cartográficas, fotográficas y digitales, como así también elaboran consignas para *aparecer* en

La transformación del tiempo es una forma de expresión rítmica” (*ibidem*: 148).

el espacio público. Analizaré asimismo qué prioridades, especulaciones, saberes y valoraciones se disputan en las imágenes que se producen, circulan y consumen con respecto a estos dos acontecimientos –los incendios de 2020 y las acciones en torno al proyecto de autovía– y los modos en que las organizaciones socioambientales gestionan una relación entre ambos a través de ellas. Parto también de la idea de que las dinámicas socioespaciales de cada territorio producen y entraman una serie de registros gráficos, fotográficos y digitales sobre los cuales diferentes actores –vecinxs, organizaciones sociales, gobiernos de distintas escalas– proyectan modos legítimos de habitar el territorio, frente a otros que no lo son, lo que produce una serie de fricciones entre imágenes e imaginarios.

Este *image complex*, tal como lo entienden McLagan y McKee (2012), contiene toda la red de infraestructuras y prácticas financieras, institucionales, discursivas y tecnológicas involucradas en la producción, circulación y recepción de materiales de la cultura visual. El objetivo será construir figuraciones –la imagen-llama, la imagen-brasa, la imagen-ceniza– que me permitan ubicar las relaciones existentes entre imágenes de diferentes registros, procedencias y temporalidades, a través del modo en que distintos actores las significan y entraman narrativamente en cada una de sus apariciones públicas.

Trabajar con imágenes exige un doble esfuerzo. Esfuerzo en el llamamiento de estas al texto, en cuanto a las estrategias mediante las cuales se les hace lugar en el desarrollo de la argumentación. Esfuerzo también en la mirada y en la lectura, de quien debe trazar y reconstruir los modos en que a esa escritura fueron convocadas, esfuerzo también de imaginación de sus condiciones de circulación, de las experiencias asociadas a ellas que el texto intentará reponer. Las imágenes, nunca fijas, poseen una vida social y una historia, se producen,

circulan y se consumen, y, en cada una de sus apariciones, algo de ellas se transforma, algo se acumula.

Para hacer aparecer estas figuraciones a partir de montajes de unas con otras, las imágenes convocadas al texto, que aparecieron en una misma escala y tamaño en la pantalla de mi teléfono, se presentan aquí de un modo diferente. El montaje, como operación analítica, implica también una construcción de jerarquías de los materiales, en cuanto tamaño, secuencia y disposición en página. Este hacer acerca las lógicas de la edición fotográfica como estrategia de construcción del relato visual a las prácticas de la investigación social, donde las imágenes pierden su unicidad de sentido para entramarse en los espacios intermedios que permiten dar cuenta de sus potenciales relaciones. Comienzo entonces el recorrido atendiendo a la primera figuración: la imagen-llama.

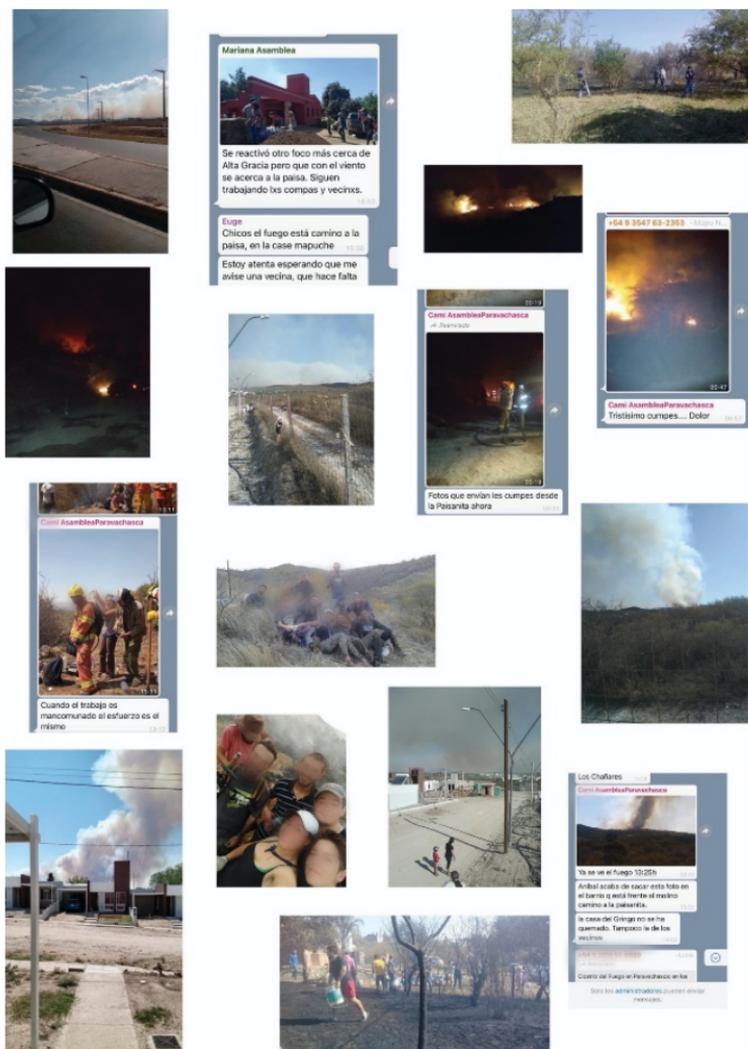
Imagen-llama

“Se reactivó otro foco más cerca de Alta Gracia pero que con el viento se acerca a la paisa. Siguen trabajando lxs compas y vecinxs”, reza el mensaje que acompaña una fotografía enviada por Mariana, en uno de los puntos de acopio de bidones de agua, desde donde brigadistas recargan sus mochilas para subir hasta la línea de fuego. “Aníbal acaba de sacar esta foto”, dice otra. En tiempo presente, estas imágenes operan desde la inmediatez: buscan mostrar la cantidad de bidones en un lugar y la falta en otros, los cuerpos en movimiento, la traza de la línea de fuego, el humo a lo lejos. Reportan unidades de información apresuradas que buscan producir acciones, desplazamientos, avisos.

La baja calidad de los registros vuelve a ciertas imágenes casi pictóricas. Otras muestran cuerpos en acción, en coreografías de trabajo colaborativo. Los encuadres

incorporan el punto de vista desde donde son producidas: un espejo retrovisor del auto en primer plano da cuenta de la mirada desde el asiento del acompañante, un alambrado en primer plano evidencia lo más cerca que se pudo llegar para tomar la fotografía. Informaciones en los márgenes, encuadres desorganizados. El humo detrás de las casas, como protagonista indicial del fuego que se acerca. Cuerpos que miran, dan espaldas a cámara hacia el foco de incendio.

Si hay algo que caracteriza a la mirada *amateur*, espontánea, es la falta de conciencia sobre los márgenes del encuadre: mirando el motivo que se coloca al centro, los márgenes son el espacio no mirado, inconsciente de recorte de lo que queda dentro y lo que queda fuera del cuadro. Se puede reconstruir allí el punto de vista, la disposición apresurada del cuerpo que produce la toma. También aparecen imágenes grupales tomadas con la cámara frontal, *selfies* de varias personas que sonríen a cámara, que dan cuenta al grupo de la presencia de quiénes y dónde, recurriendo a esta convención fotográfica instalada en las prácticas visuales realizadas con el dispositivo celular.



Estas imágenes reclaman desde su inmediatez la correspondencia de una mirada, también, inmediata. La agencia de las imágenes fotográficas en cuanto unidades de información, tal como señala Jurgenson (2019), radica en

que evidencian experiencias más que memorias: la función de aquello que el autor denomina “fotografía social” tiene más que ver con la comunicación social que con la aspiración de sostenerse como un objeto en sí mismo. Imágenes-llama que buscan hacer arder, encienden con su resplandor las pantallas, irrumpen en la cotidianidad de quienes las reciben y son convocadxs mediante su llamamiento.

La imagen-llama es urgente, tanto en su producción como en su recepción, exige ser vista también en un tiempo inmediato. Después, desaparece en el flujo mismo de las informaciones que sobre ella se imprimen. Pero, cuando otro tiempo es posible, cuando aparece cierta calma, aparecen las imágenes-brasa, a las que habita potencialmente y de algún modo las contiene en la huella misma del resto de lo que fue, pero que vienen a hacer mirar de otro modo, a proponer otra figuración. Me ocupo de ellas a continuación.

Imagen-brasa

Las fotografías de Bruno presentan la recolección de su rastreo. Imágenes que establecen un diálogo directo con la experiencia vivida. Así habitan el tiempo las imágenes que se producen en los momentos de calma. Unas imágenes que se detienen para construir un relato sobre aquellos días. Mirada documental que se posa sobre el acontecimiento. Imagen-brasa.

Estas fotografías, si bien se producen en los días del fuego, proponen otra mirada, detenida en los gestos y las coreografías corporales de la organización de la tarea: cooperación entre personas, bidones que se llenan abajo para quienes suben con sus mochilas a apagar brasas aún encendidas. Estas acciones, las de las guardias de ceniza, pero también las del combate de fuegos más pequeños, son registradas en otro tiempo: un tiempo que se aleja de lo urgente de las imágenes anteriores para dar lugar a

una construcción estetizada, con un uso más cuidado de la luz, el enfoque y el encuadre. Estas fotografías circulan en WhatsApp, pero también se encuentran en el Google Drive de la Asamblea, son fotografías de mayor calidad, disponibles no solo en su versión comprimida en formato *jpeg* (que es como primero nos llega), sino también en sus archivos *raw*, sus versiones de alta calidad para otros fines y usos que así lo requieran. Por los metadatos que las imágenes poseen sabemos que se trata de cámaras profesionales, con ópticas fijas y operadas en modo manual. Otros dispositivos, otras miradas que implican otras coreografías –y otro tiempo– entre los cuerpos de quien aprieta el obturador y aquello sobre lo que se detiene.

Estas fotografías construyen, mediante una serie de decisiones técnicas, otro modo de ver: se detienen sobre las relaciones más que sobre los elementos aislados, construyen un entrecuerpos mediante gestos, luces y juegos de mirada. Aparecen así otros elementos más allá del encuadre apresurado: la luz, la sombra, las siluetas en contraluz, la estela del agua direccionándose hacia el suelo caliente. Imágenes que permiten otra jerarquía entre los elementos, enfocando sobre unos y desenfocando otros, orientando la luz y recortando las figuras del fondo. Una figuración detenida⁸ en un tiempo latente de espera, suspendido entre el control y la potencial amenaza. Estas imágenes también

⁸ Aparece en esos días una ilustración de la artista Vale Volando, que propone también una figuración detenida. Imagen y texto en colaboración: “Suben y bajan los guardianes del monte /las guardianas del fuego, de las cenizas. / Apretando la bronca entre los labios secos y resecos, entre los borcegos encendidos, entre el jean caliente, entre el pañuelo hasta los ojos, entre el tizne de la muerte. Avanzan paso a paso las laderas luchando mano a mano contra la bestia humana incendiaria / la bestia humana inmobiliaria / la bestia humana mediática / Suben y bajan sembrando vida, avanzando en línea, unidos por el amor, la palabra, el movimiento y la acción. / El infinito pasa manos de agua recolectada en las vecindades, en los barrios, en la cuadra, en tu casa, en tu boca / Las infinitas manos de agua llegando a la madre sierra nativa. / Suben y bajan eludiendo controles, denunciando intereses, corriendo con bidones, senderos de duendes, en la noche en el día, en todas las horas del fuego...con las mochilas caseras / con los chicotes comunitarios

muestran un gesto en suspenso, cuerpos trabajando juntos en acciones que no terminan de completarse en la totalidad del encuadre.

También aparecen, durante esos días, imágenes detenidas que encuadran el detalle: imágenes que presentan materialidades y gestos. Planos cortos de la flora entre la ceniza, gestos entre personas que trabajan juntas. Imagen-brasa, donde la amenaza aún persiste (y, de hecho, por momentos se activa y aparecen de nuevo imágenes-llama), pero la mirada logra detenerse a construir otro tipo de repertorios visuales. Aquellos donde no se trata ya de una urgencia, sino de una mirada documental que busca construir relato. Estas imágenes formarán parte de ensayos documentales, circularán luego en portafolios de quienes las realizaron, más allá de su circulación anónima primera. Serán estas también las que serán convocadas después para articular un proyecto de territorio que se enfrente al desarrollo de la autovía. Serán así reavivadas, con el suave soplido de la memoria, imágenes-brasas que potencialmente volverán a arder.

/ con las palas recicladas / con el corazón del bosque en la mano". Texto: Cristiano Castro. Ilustración: Vale Volando.

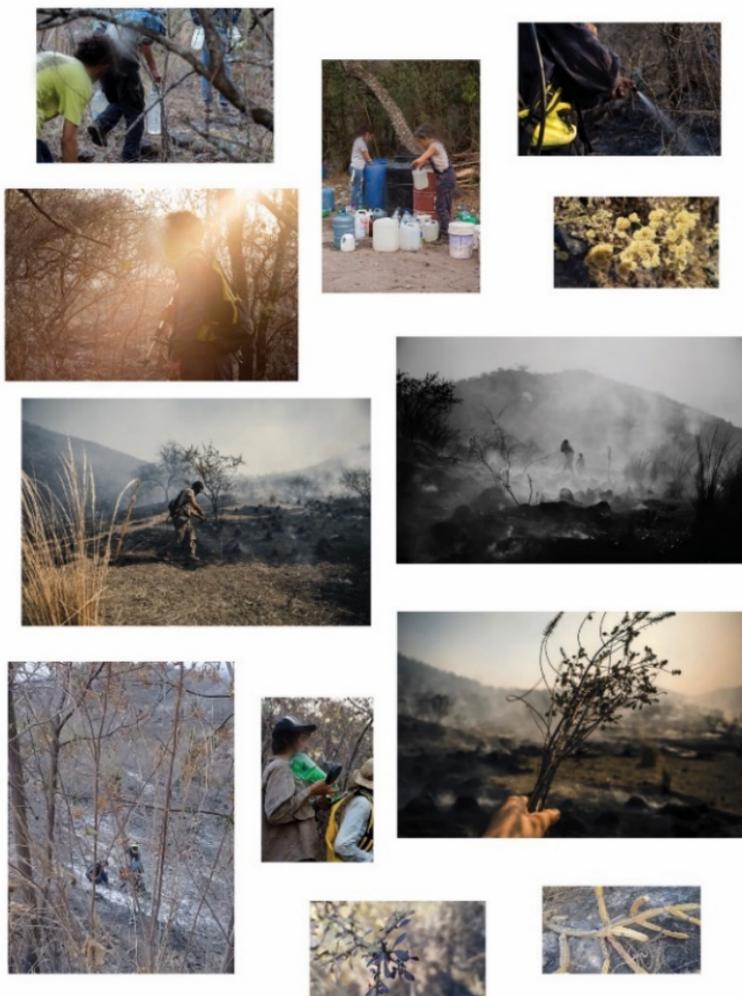


Imagen-ceniza

Recibo hace unos meses una serie de fotografías de Bruno por WhatsApp. Él es un vecino del Valle de Paravachasca con quien compartimos el espacio de trabajo en la Biblioteca Popular de Anisacate. “Por aca va a pasar la autovia a la altura de valle de anisacate”, escribe en un mensaje. Después, el envío se compone de una serie de ocho fotografías de su caminata que dan cuenta de aquello que Bruno se detiene a mirar. El “acá” no es preciso, no reconstruye la traza exacta, sino que se orienta por conversaciones con vecinxs con que se cruza, a quienes les pide orientaciones; son quienes habitan las últimas calles de la traza del poblado quienes apuntan con su dedo y señalan por dónde avanzar.



Aquí las imágenes-ceniza inscriben otra temporalidad, enlazan los días del fuego y las cicatrices que dejaron con los proyectos de territorio que se disputan, las miradas sobre aquello que se empieza a transformar, sobre qué hacer con lo que quedó. Los puntos de vista se ponen aquí en contrapunto: la mirada detenida sobre el paisaje, la de Bruno y la de las piezas audiovisuales de la asamblea, frente a las proyecciones vistas desde el dron de los desarrollos inmobiliarios de la zona, pero también el recurso de Google Maps, utilizado, asimismo, por la asamblea.

Como dije más arriba, el principal reclamo de la Asamblea Paravachasca, bajo la consigna “La autovía no es prioridad”, establece una relación de consecuencia entre los incendios y el desarrollo inmobiliario de la zona y, para hacerlo, recurre a la vista satelital para la producción de piezas visuales y audiovisuales, como este video⁹ que, grabado en formato vertical, en las proporciones óptimas para ser visto en teléfonos celulares, presenta a la autovía como una línea animada que avanza sobre una vista de Google Maps. Estamos en caída libre sobre ella, tal como nos enseña Hito Steyerl (2014), perdemos el horizonte, esa línea estable de orientación propia de la modernidad, de la convención tácita que ignora la curvatura propia de la Tierra y establece como norma un punto de vista estable, fijo, que es el del espectador, hacia quien todo mira: es la mirada de este sujeto universal la que ordena la representación del mundo. Esta misma idea de línea ordena también nuestra representación del tiempo: el tiempo lineal, el futuro por delante.

⁹ Disponible en bit.ly/3PjfN4s.



La única fotografía que aparece al inicio del video muestra el arranque del recorrido. Se trata de una imagen de la rotonda de la ciudad de Alta Gracia, donde comenzaría la traza de la autovía en cuestión. Después de esta imagen, la representación es satelital y gráfica. Vemos la autovía como una serpiente que avanza, desafectada de lo que se topa en su camino. Aquí no hay gestos de resistencia, obstáculos o topografías que afecten su ritmo, apenas señalamientos de aquello con lo que se encuentra y de aquello que corre riesgo de transformarse con su llegada. Sin embargo, las alertas se prenden sin alterar su andar, se acerca por momentos a la superficie, y en otros tramos sobrevuela más alto.

Sobre un punto de vista similar y por transparencia, se proyecta el logo del loteo “Ayres de Paravachasca”: una imagen gráfica de una sierra con un gran pájaro que la sobrevuela se posa sobre la vista del loteo. Con un punto de vista similar, pero de escala más próxima, las fotografías y los videos generados con dron buscan promocionar potenciales desarrollos inmobiliarios en el territorio. Allí donde Bruno encuentra la sutil huella del paso, el rastro de un camino, Ayres de Paravachasca proyecta su logotipo.

Drones, *renders*, Google Maps. Tecnologías que proporcionan un punto de vista desde otra escala. Sobre esas imágenes se proyectan prioridades. En el video de la desarrollista Evi (bit.ly/DesarrollistaEvi) se prometen obras de luz y agua. Las imágenes digitales que las empresas constructoras proponen para imaginar modos futuros de habitar el territorio: “un paraíso natural a un paso de la ciudad”, “el privilegio del paisaje” o “tu futuro está acá” como consignas que acompañan vistas aéreas o *renders*, como imaginarios visuales de cómo se verá ese futuro, sobre qué superficie –extensa, verde, deshabitada– se desplegará el habitar. Todas estas imágenes disputan sentidos sobre el futuro del territorio: dibujan sobre él potenciales construcciones, cercamientos, avances. Las fotografías sirven también de paño de fondo para proyectar sobre ellas estos desarrollos futuros. Trazar la perspectiva vertical y disputar su soberanía

genera un palimpsesto de usos y ocupaciones, no solo del espacio aéreo, sino también de todas las capas subterráneas de la superficie terrestre.

Así como la perspectiva lineal produce un observador estable y un horizonte imaginarios, la perspectiva arriba-abajo produce un observador flotante y un piso estable imaginario. Esto instaura una nueva normalidad visual [...]. Se podría concluir que se trata en realidad de una radicalización –aunque no una superación– del paradigma de la perspectiva lineal (Steyerl, 2014: 27).

Sin embargo, esta no es la única pieza de la asamblea que convocamos a esta figuración, y no todas las piezas son construidas de la misma manera. Además de las imágenes fijas, la asamblea produce un video para el Día de la Tierra (bit.ly/3GkwX4c). Un montaje que comienza con detalles de arroyos, flores, pájaros y mariposas se abre al paisaje de la sierra con sonidos de aves que se ven interrumpidos de golpe por el sonido de un auto que pasa a velocidad sobre la imagen de las dos líneas que separan los carriles de una ruta. Sobre esa imagen, se imprime el texto con la consigna “La autovía no es prioridad”, para luego volver a las imágenes naturales junto con la siguiente placa de texto: “La reserva hídrica y forestal del Valle de Paravachasca, sí”. Una cámara que captura imágenes en movimiento se mueve también –hace *zoom*, hace paneos, enfoca– en diferentes escalas y grados de aproximación: del detalle casi abstracto del agua que corre al movimiento que imprime haciendo *zoom* sobre diferentes flores y frutos. Sobre aquello que no se mueve, se mueve la cámara, frente a las mariposas que revolotean, el punto de vista es firme, luego acompaña el vuelo de un pájaro que planea sobre un cielo celeste, para terminar, en el mismo sentido de orientación del movimiento, en un paneo general sobre una vista abierta de las sierras. Esta sucesión de imágenes se ve interrumpida por un paneo vertical que sigue la traza de una doble línea sobre el asfalto (paneo que, imágenes atrás con un movimiento similar, acompañaba a

contracorriente el fluir del arroyo). A diferencia de las imágenes fijas de Bruno, aquí el montaje concluye estableciendo una relación de contraste, de contrapunto entre aquella naturaleza y la irrupción de la línea de la autovía. Aquí el paneo ya no es horizontal, de izquierda a derecha, sino que avanza de abajo hacia arriba y termina con la irrupción de un auto que pasa (este sí desde la izquierda del cuadro hacia la derecha) a toda velocidad, casi indistinguible.

Disputas sobre el futuro, especulación sobre el territorio. Terrenos comercializados en cuotas, con la promesa futura de servicios de luz y agua, con fechas inciertas, cuya incertidumbre solo se atisba en la letra chica. Imágenes-ceniza que siguen rastros, que hacen también sus propias especulaciones y establecen sus propias prioridades, haciendo foco sobre ciertos detalles y no otros.

Imágenes-ceniza que comparten un punto de vista, aquel que se apoya sobre la certeza de que el ser humano es el amo de la naturaleza, ya sea para explotarla como recurso –el paradigma orientalista que señala Pálsson (2001)–, ya sea desde una mirada paternalista que “alerta sobre las consecuencias ecológicas de la actividad humana” (Pálsson, 2001: 89-90), donde los seres humanos poseen una responsabilidad de protección y cuidado¹⁰.

Pero hay en estas imágenes algo más. Imagino a Bruno caminando, conversando y siguiendo pistas y rastros, no las huellas de algo que ya sucedió, sino el gesto orientativo de qué y por dónde, tanteando entre palabras, orientaciones, vegetación y animales. En estas imágenes aparece algo de lo que Vinciane Despret nombra como “el arte de hacer geopolítica rastreando invisibles”, para referirse a la invitación de Baptiste Morizot a ir “tras el rastro animal”. Son las

¹⁰ Pálsson señala tres paradigmas de relación entre humanos y el ambiente: el orientalista, el paternalista y el comunalista. Para un desarrollo más extenso de los tres, véase Pálsson, Gísli. “Relaciones humano-ambientales: orientalismo, paternalismo y comunalismo”. En Descola, Philippe y Pálsson, Gísli (orgs.). *Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas*. Ciudad de México, Siglo XXI Editores, pp. 80-100.

imágenes de Bruno un modo particular de rastreo, allí donde encuentra huellas, rastros, senderos, detiene su cámara.

Rastrear [...] es aprender a detectar las huellas visibles de lo invisible, o incluso transformar algo de lo invisible en presencias, rastrear es aprender a hallar un mundo habitable y más hospitalario en el que sentirse “en casa” ya no nos convierte en pequeños propietarios avaros y celosos (amos y poseedores de la naturaleza como parecía tan evidente) sino en cohabitantes que se maravillan con la cualidad de la vida en presencia de otros seres. Rastrear es enriquecer los hábitos (Despret, 2020: 15-16).

El rastreo, como práctica atenta a las huellas, es el procedimiento central en las imágenes de Bruno, y quizás sea también la manera de fisurar el modo occidental dominante de construir una mirada cristalizada sobre la naturaleza, otra visualidad, acaso más cercana al paradigma comunalista propuesto por Pálsson (2001), aquella tercera posibilidad en la que se establecen relaciones de cooperación, “rechazando la separación radical entre naturaleza y sociedad, entre el objeto y el sujeto [...] [sugiriendo] una reciprocidad generalizada en las relaciones humano-ambientales, invocan[do] los conceptos de contingencia, participación y diálogo” (Pálsson, 2001: 84). Imágenes que no clausuran el sentido estableciendo linealidades de causa-efecto, sino que se detienen en gestos pequeños, ordenan el mundo sin más que por detenerse a mirarlo (y llevárselo consigo dentro de su cámara). Las fotografías de Bruno presentan la recolección de su rastreo, trae las imágenes con las que establece un diálogo con la experiencia vivida. Radica allí su potencia: las imágenes-ceniza que podrán disputar otros futuros para el territorio, a través de una mirada detenida, que habilita la cooperación entre todo lo vivo.



Imágenes-llama, imágenes-brasa, e imágenes-ceniza fueron las figuraciones que me permitieron hasta aquí abordar la temporalidad de los acontecimientos de los días del fuego y lo que vino después. Imágenes que fueron vistas

sosteniendo un teléfono en la mano, en una pequeña pantalla junto con otras, con otros textos, con otros mensajes, y que aquí se entraman de otro modo, en la operación analítica y en el relato mismo de los días, donde cada una de ellas aporta al telar abigarrado de lo común. Fuera de la linealidad del orden y del instante que las produjo, aquí el llamamiento es a pensar con ellas, a partir de ellas, en la generación de figuraciones posibles que habiliten un ejercicio de imaginación. A pensar también desde las imágenes, aceptando el desafío de su condición esquiva, polisémica, que no deja ser del todo domada en la escritura. Es justamente allí, en esa resistencia, donde habita su mayor potencia.

Bibliografía

- Despret, Vinciane (2020). “¿Dónde vamos mañana?”. Prefacio a Morizot, Baptiste. *Tras el rastro animal*. Buenos Aires: Isla Desierta.
- Didi-Huberman, Georges (2006). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Didi-Huberman, Georges (2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada.
- Didi-Huberman, Georges (2012). *Arde la imagen*. Ciudad de México: Televisa.
- Haraway, Donna (1999). “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles”. *Política y sociedad*, vol. 30, pp. 121-163.
- Haraway, Donna (2017). *Manifiesto de las especies de compañía. Perros, gentes y otredad significativa*. Córdoba: Boca-vulvaria.
- Haraway, Donna (2019). “Una familia de figuraciones feministas”. En *Las promesas de los monstruos. Ensayos*

sobre *Ciencia, Naturaleza y Otros Inadaptables*. Barcelona: Holobionte.

Jurgenson, Nathan (2019). *On Social Photo. On Photography and Social Media*. Londres: Verso.

Kohn, Eduardo (2021). *Cómo piensan los bosques*. Buenos Aires: Heckt.

McLagan, Meg y McKee, Yates (2012). *Sensible Politics: The Visual Culture of Nongovernmental Activism*. Nueva York: Zone Books.

Morizot, Baptiste (2020). *Tras el rastro animal*. Buenos Aires: Isla Desierta.

Pálsson, Gísli (2001). "Relaciones humano-ambientales: orientalismo, paternalismo y comunalismo". En Descola, Philippe y Pálsson, Gísli (orgs.). *Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, pp. 80-100.

Steyerl, Hito (2004). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.

Tarkovski, A. (2000). *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid: Ediciones Rialp.

3

La coproducción transnacional de la Pachamama

*Cambio climático y saberes indígenas
en los discursos de Evo Morales en Naciones
Unidas (2006-2010)*

FEDERICO RODRIGO

Introducción

El 19 de septiembre de 2006, Evo Morales participó por primera vez de una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidente de Bolivia. Su presencia generaba cierta expectativa ya que se trataba de la intervención del “primer presidente indígena” del mundo. Incluso antes de su alocución, su vestimenta –con motivos andinos, confeccionada por una diseñadora de alta moda– causó cierto interés ya que fue interpretada como metáfora de la incorporación de la “cultura” tradicional u originaria en los espacios de poder de un Estado nación moderno (Schavelzon, 2012). La promesa de un “Estado indígena” (Postero, 2018), así, emergía en el campo internacional movilizando anhelos y ansiedades por la posibilidad de ampliar el espectro de temas y lógicas que lo constituyen.

En esa oportunidad el presidente expuso muchos de los tópicos que caracterizarían sus intervenciones en organismos internacionales durante todo su mandato: su per-

tenencia al movimiento indígena y la búsqueda de revertir los “500 años de desprecio” que sufrieron los pueblos originarios; la crítica a las políticas de “recolonización” que los Estados Unidos pretenderían ejercer sobre su país; el cuestionamiento a las políticas de erradicación de la hoja de coca, elemento representativo de la “cultura andina”; el llamado a desarrollar una forma de vida que no se base en la explotación y en el saqueo de la naturaleza y de otros pueblos humanos (lo que denominó el principio de “vivir mejor”), sino en la solidaridad y la complementariedad, siguiendo las enseñanzas de los ancestros indígenas (el principio de “vivir bien”); entre otros. Además, sobre el final de su exposición, sintetizó estos reclamos afirmando que, para “salvar a la humanidad”, es necesario “salvar al planeta Tierra”, que estaría siendo destrozado por las “competencias hegemónicas”.

De esta manera, Morales comenzaba a construir un posicionamiento que combinó la agenda ambiental con cuestionamientos a las injusticias que genera el modo de producción capitalista, a la desigualdad entre los diferentes países y a la subalternización de los pueblos indígenas y de algunas de sus prácticas. Estas reivindicaciones tendrán un fuerte desarrollo especialmente a partir de las discusiones de la agenda del cambio climático y se cristalizarán bajo la idea de “salvar a la Madre Tierra”.

Se ha señalado que, en el marco de distintos conflictos ambientales, es posible registrar la presencia de diferentes “lenguajes de valoración” vinculados con marcos ontológicos divergentes, muchas veces inconmensurables entre sí (Martínez-Alier, 2008). A partir de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron propuestas que buscaban reconocer que “la Naturaleza tiene ciertos valores que le son propios, independientes de la utilidad para el ser humano, y que por lo tanto se la debe reconocer como un sujeto” (Gudynas, 2010: 49), alejándose de la concepción que la entiende como un conjunto de recursos disponibles para su explotación. Ciertas transformaciones legales y constitucionales en

Ecuador y Bolivia en el comienzo del siglo XXI fueron reconocidas como innovaciones legislativas y jurídicas en esta dirección, incorporando en su formulación alusiones explícitas a las cosmovisiones originarias, como la utilización del término “Pachamama” (Canessa, 2012; Melo, 2013; Postero, 2018; Pinto Calaça, Carneiro de Freitas, Da Silva, y Maluf, 2018). En cuanto a los colectivos ambientalistas, especialmente luego del fracaso de la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de Copenhague (2009) y de la represión que sufrieron las movilizaciones que rechazaban sus conclusiones, se consolidó la visión de que no es posible enfrentar el cambio climático sin cuestionar el capitalismo global (Svampa, 2020) y se desarrolló un lenguaje contencioso que presenta continuidades –y discontinuidades– entre las críticas a ciertas actividades antropogénicas y algunos elementos que introdujeron los movimientos indígenas (Carman, 2018).

En síntesis, desde su primera intervención en Naciones Unidas, Morales participó de la articulación de una discursividad crítica de circulación creciente que, reivindicando una cosmovisión “ancestral”, rechaza no solo ciertas vinculaciones humano-naturaleza, sino el sistema social y económico que las sustenta. De esta manera, en América Latina fue convirtiéndose en una referencia, y sus intervenciones se volvieron una instancia de cristalización de las posiciones del movimiento de justicia ambiental y de luchas que, sin inscribirse en este, buscan preservar para diferentes comunidades recursos pretendidos para la explotación económica (Martínez-Alier, 2008).

En Argentina (y así lo evidencian los casos estudiados en este libro), algunos de los tópicos que fue articulando el presidente boliviano comenzaron a tener relevancia entre diferentes organizaciones, inclusive entre muchas que son críticas de su gobierno o de algunas de sus decisiones. En el marco de nuestro proyecto, encontramos expresiones de esta discursividad en numerosas experiencias de campo. La conexión entre cuestionamientos a diferentes prácticas

antropogénicas y la reivindicación de saberes indígenas está presente entre productorxs hortícolas, funcionarixs y expertxs que promueven la agricultura familiar y agroecológica y entre organizaciones comunitarias que enfrentan proyectos mineros o desarrollos inmobiliarios en las provincias de Jujuy o de Córdoba. Así, la Pachamama es invocada en diferentes coyunturas en las que actores y colectivos con demandas y lógicas organizativas diversas escenifican una contradicción que puede sintetizarse –remitiendo a las modalidades de relación entre humanos y no humanos que plantearon Descola y Pálsson (2001)– como un antagonismo entre formas de existencia basadas en la reciprocidad o en la rapacidad para con la naturaleza.

En la búsqueda de reconstruir algunas instancias relevantes en la construcción de este conjunto de nociones que se pone en juego y se articula en distintas luchas, en este trabajo indagaremos en las relaciones que, en su primera presidencia, Evo Morales construyó entre las “vivencias” originarias y las problemáticas ligadas a la agenda ambiental global, atravesada por tópicos que refieren al planeta y a los seres que lo habitan. Este periodo condensa las transformaciones más ambiciosas de los gobiernos del MAS-IPSP, al menos en lo que se refiere al planteo de modelos de desarrollo alternativos: lxs especialistas coinciden en que, luego de 2010 (los hitos paradigmáticos son la cumbre de Tiquipaya en ese año y la sanción de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en 2012), inició un proceso de transformación de la agenda y del marco de alianzas que lo acercan a posiciones desarrollistas extractivas (Canessa, 2012; Postero, 2018). Entonces, a partir del análisis de la participación de representantes bolivianos en foros y cumbres internacionales entre 2006 y 2010 y en espacios alternativos “de los pueblos”, buscamos situar la distinción entre modos indígenas y occidentales en la relación humano-naturaleza en campos de disputas en los que esta distinción se articula con diversos conflictos. Nos mueve el interés de visibilizar las conexiones entre los

foros internacionales y las luchas locales del movimiento de justicia climática, así como las retroalimentaciones –lo que no implica ausencia de tensiones– entre acciones desarrolladas por las organizaciones sociales y los Estados nacionales. En este sentido, en lugar de enfatizar en las diferencias ontológicas entre lenguajes y discursos, buscamos iluminar procesos que se constituyen en un marco de fricciones (Tsing, 2005) entre ellos.

El texto comienza con un breve repaso de las transformaciones en la política exterior boliviana que introdujo el gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Luego, en los apartados “El capitalismo es la cultura de la muerte” y “¿Pachamamismo de Estado?”, repasamos los principales argumentos desarrollados por Morales en los foros y las conferencias analizados : las Asambleas Generales de Naciones Unidas de los años 2006, 2007, 2008 y 2009; la Cumbre sobre Medio Ambiente de Naciones Unidas de 2007; las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2008 (Poznan), 2009 (Copenhague) y 2010 (Cancún); el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas de 2008; la Declaración de Naciones Unidas del Día Internacional de la Madre Tierra (2009) y los encuentros “de los pueblos”: Mandato de los Pueblos y Naciones Indígenas Originarios a los Estados del Mundo (Chimoré, 2007); IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala (Puno, 2009); Encuentro con el Caucus Indígena (Copenhague, 2009); Encuentro de Presidentes del ALBA-TCP con Movimientos Sociales de Europa (Copenhague, 2009); Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya, 2010). En el apartado final, sintetizamos nuestras principales reflexiones.

Transformaciones en la política exterior: la diplomacia de los pueblos

Con la llegada de Evo Morales a la presidencia, el gobierno boliviano transformó su agenda internacional e impulsó diferentes temáticas: el reclamo frente a Chile por una salida soberana al Pacífico, la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, el rechazo a la mercantilización de los servicios básicos y la defensa de la hoja de coca en cuanto elemento “representativo de la cultura andina” (Ceppi, 2014), entre otras. A su vez, la reorientación de su inserción institucional tuvo como espacios privilegiados de desarrollo nuevos instrumentos de cooperación como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

De forma simultánea a estos posicionamientos, el MAS-IPSP introdujo nuevos actores y lógicas en el desarrollo de su política exterior. En sintonía con la tendencia creciente a la complejización de las relaciones diplomáticas que se registra en las últimas décadas (Zurita, 2013), comenzó a reconocer la legitimidad de organizaciones sociales y comunitarias en la definición de los intereses de la ciudadanía en los marcos transnacionales y la construcción de mecanismos que posibiliten su representación. De esta manera, impulsó la conformación de espacios de debate y negociación donde cobran protagonismo actores no estatales como cumbres y conferencias. En ellas, organizaciones sociales de diversas regiones del mundo participan de la construcción de una agenda alternativa a la promovida por los principales organismos internacionales.

Al mismo tiempo, la Cancillería boliviana introdujo en sus reglamentos principios de la “diplomacia y el protocolo indígena que existían antes de la colonización” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009: 7). Así buscó introducir en la formación y práctica de sus funcionarios procedimientos y criterios que se identifican con matrices culturales

diferentes a las que dieron origen a la diplomacia inter-estatal moderna.

Este conjunto de transformaciones se enmarca en la adscripción a la denominada “diplomacia de los pueblos”. Si bien no existe una única definición de este concepto y su uso extendido vuelve dificultoso desarrollarla, en términos generales focaliza en una “democratización” de los objetivos de las relaciones internacionales y sus dinámicas de desarrollo –y de las posibilidades de participar en ellas–. En este sentido, la Ley de Celebración de Tratados del Estado Plurinacional de Bolivia sancionada en 2013 destaca en su artículo 22 que

la Diplomacia de los Pueblos procura atender, dialogar y trabajar para todos, y no para algunos sectores privilegiados, priorizar los intereses de la nación sobre los intereses de cualquier sector, promover y facilitar no sólo el relacionamiento entre cancillerías sino también entre pueblos y valorizar el respeto a los Derechos Humanos y principios de la vida por sobre criterios exclusivos de mercado y capital (Ley de Celebración de Tratados n.º 401/2013).

Asimismo, el texto de la ley destaca “el respeto a la Madre Tierra, el principio de la vida y los Derechos Humanos” como fundamentos para las relaciones “entre los pueblos del mundo”. De esta manera, el Estado Plurinacional de Bolivia suscribe formalmente a una perspectiva sobre la diplomacia que busca ampliar los parámetros de representación política en las relaciones internacionales.

“El capitalismo es la cultura de la muerte”

A partir de su asunción, en sintonía con algunas organizaciones de su país, el gobierno de Morales comenzó a cuestionar los supuestos que subyacen en los debates internacionales sobre el ambiente y el desarrollo sostenible desde

una perspectiva que recupera la discursividad indígena y cuestiona a los países desarrollados. Ante la realización de la 14.º Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Poznan, Morales envió una carta cuyo título nos permite sintetizar el encuadre que en sus múltiples intervenciones propuso para el tema: “Salvemos al planeta del capitalismo”. Allí expuso algunas nociones que habían sido introducidas en su intervención en la Cumbre sobre el Medio Ambiente en el 62.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007 y que se repetirían en numerosas participaciones posteriores en otros foros y cumbres.

De acuerdo con su planteo, la competencia y la búsqueda sin límites de ganancias monetarias generan la destrucción del planeta Tierra. La lógica mercantil que regula el comportamiento de los diferentes actores en este sistema, que lleva a concebir como recurso explotable a la totalidad de los seres y bienes existentes, sería entonces responsable de la depredación de los bosques y de las consecuencias del calentamiento global. De esta manera, el carácter destructivo del capitalismo lo convierte en el “camino de la muerte” y constituye una contradicción con la reproducción de la vida en el planeta. En síntesis, prácticamente desde el comienzo de sus participaciones en organismos internacionales, el gobierno del MAS-IPSP planteó que la relación entre capitalismo y naturaleza se constituye como un antagonismo (Prada Alcoreza, 2010).

Son muchos los tópicos con los que, a lo largo de los años, Morales fue ejemplificando la conexión entre capitalismo y problemáticas ambientales. Especialmente en sus primeras intervenciones, se destaca el rechazo a la producción de los denominados “biocombustibles”. Afirmando la irracionalidad de que los alimentos no se produzcan para el consumo humano, es decir, de que la tierra no se destine a “la vida”, señalaba en el debate general del 62º período de sesiones de Naciones Unidas: “No puedo entender que podamos llevar alimentos agropecuarios para autos, no

puedo entender que la tierra sea para las chatarras” (Morales, 2007). Al mes siguiente a esta intervención, durante la cumbre denominada Mandato de los Pueblos y Naciones Indígenas Originarios a los Estados del Mundo, el tema volvió a estar presente: allí se destacó que es necesario aplicar políticas de “soberanía alimentaria” y “repudiar el biocombustible”.

Otro de los modos en los que Morales cuestionaba el capitalismo se vincula con que sus lógicas producen asimetrías y desequilibrios en las relaciones entre las personas y los grupos humanos. En sus términos, este modo de producción “genera lujo, ostentación y derroche para unos pocos mientras millones mueren de hambre en el mundo” (Morales, 2008). De esta manera, la búsqueda de acumulación monetaria como motor de todas las actividades sería la causante del “genocidio de la humanidad”, tanto por su impacto ambiental como por sus consecuencias en las relaciones sociales.

Por otro lado, el modo en el que se desenvuelven las relaciones internacionales también fue objeto de sus cuestionamientos. Sus críticas a las agencias y foros internacionales se expresaron a partir de la organización de espacios alternativos “de los pueblos”. Tanto en estas instancias como en los foros oficiales, Morales señaló a los tratados de libre comercio y a las agencias financieras internacionales (principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) como mecanismos fundamentales en el “resquebrajamiento” de las relaciones humanas y entre humanos y naturaleza. Como planteó en el mensaje que envió a la IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala, en Puno, estos tratados y organismos “mercantilizan los recursos naturales y la cultura de los pueblos; privatizan los servicios básicos; pretenden patentar la vida” (Morales, 2009a).

Las entidades financieras y ciertos gobiernos (especialmente el de Estados Unidos de Norteamérica) aparecen en muchas de sus intervenciones como obstáculos a las

posibilidades de los países periféricos de elaborar modelos de desarrollo alternativos. Las sanciones, las presiones sobre las deudas externas y el intervencionismo militar son rechazados por Morales, quien propone que el proceso de descolonización de Bolivia conllevaría también una dimensión “externa”, vinculada a la construcción de cierta autonomía en la definición de sus políticas. Estas críticas adquirieron otro modo de síntesis a partir de señalar la necesidad de construir otro tipo de “globalización”, en la cual –aludiendo explícitamente a la situación de los migrantes (muchxs de lxs cuales, de acuerdo con sus planteos, abandonan sus lugares de origen por la crisis ambiental)– lo que se globalice es el ser humano.

Esta idea se conecta con otra de sus propuestas: descolonizar las Naciones Unidas, lo que incluso podría implicar mudar su sede central. En su intervención en el séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizado en 2008, argumentaba:

No es posible que haya en Naciones Unidas países de primera y países de segunda, por ejemplo. No es posible que en las Naciones Unidas hayan miembros vitalicios y con derecho de veto. Eso tiene que terminar hermanas y hermanos. No es posible que algunos países tengan todo el poder y otros no [...] necesitamos organismos, organizaciones que puedan democratizarse, y en el marco de la democracia, cómo expresar la vivencia de las distintas regiones y países del mundo (Morales, 2008).

También los acuerdos y mecanismos institucionales destinados a enfrentar el cambio climático fueron foco de fuertes críticas. Según su interpretación, en ellos se evitó abordar las causas de la problemática para garantizar la continuidad del modelo económico y del patrón de poder en las relaciones internacionales. Por su parte, los países dominantes, en cuanto origen de las emisiones históricas de gases y sedes de las principales compañías predatorias

de los recursos naturales, eran presentados como responsables morales del calentamiento global. En este sentido, especialmente en 2008 y 2009, el mandatario denunció la complicidad de los Estados más fuertes con las condiciones que generan la crisis ambiental por medio de una comparación entre el dinero destinado al sistema financiero luego de la caída de las bolsas del mundo y el reservado para el sostenimiento de los programas vinculados al cambio climático. Decía en la Conferencia sobre Cambio Climático de Poznan: “Mientras Estados Unidos y la Unión Europea destinan 4.100 billones de dólares para salvar a los banqueros de una crisis financiera que ellos mismos provocaron, a los programas vinculados al cambio climático les destinan 313 veces menos” (Morales, 2008).

Los diferentes cuestionamientos expuestos hasta aquí formaron parte de las propuestas que Morales elaboró para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague y que también se expresaron en las “contracumbres” simultáneas al evento oficial de las que lxs representantes bolivianxs formaron parte: el Encuentro con el Caucus Indígena y el Encuentro de Presidentes del ALBA-TCP con Movimientos Sociales de Europa, ambos realizados en diciembre de 2009 en la ciudad danesa.

Estas propuestas se elaboraron retomando algunas formulaciones realizadas en el marco de encuentros previos: se destacan los “Los Diez Mandamientos para salvar el Planeta, la Humanidad y la Vida”, presentados por primera vez (y repetidos en distintas ocasiones) en el séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en 2008, y la propuesta de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, expuesta con motivo de la Declaración de Día Internacional de la Madre Tierra en la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2009.

En Copenhague, la intervención de Morales partió, en primer lugar, de atribuir a los países desarrollados una “deuda climática” que deberían reconocer y pagar. Esta

premisa se completó con otra demanda: “la devolución a los países en desarrollo del espacio atmosférico”. Esto implicaba que los países ricos debían reducir y absorber los gases de efecto invernadero que emiten, para permitir una distribución del espacio atmosférico disponible para cada país en función de su población.

Por otro lado, en numerosas oportunidades, el mandatario señaló que el Protocolo de Kioto (sancionado en 1997), que establecía un marco para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, no fue cumplido. Entonces, para evitar el incumplimiento de las medidas aprobadas por los organismos internacionales, el presidente boliviano propuso crear un tribunal de justicia climática. Esta instancia permitiría cuantificar los daños que generan ciertas compañías y países y, a partir de ello, definir sanciones que incentiven la adecuación de las prácticas a las normativas internacionales.

Asimismo, Morales insistió en transformar el modo en el que se distribuyen los recursos destinados a esta problemática. Propuso priorizar el financiamiento a programas que buscan contrarrestar los efectos del calentamiento global (denominados “de adaptación”), en su opinión desplazados por las políticas desarrolladas para reducir las emisiones (de “mitigación”). Así se evitaría que los recursos se dirijan principalmente a los países que más contaminaron y no a los que preservaron el medio ambiente y sufrieron las consecuencias de un modelo de desarrollo que los sitúa en posiciones subalternas. Además, bajo esta lógica de reparación de daños, y como fue mencionado previamente, el mandatario demandó a las potencias hegemónicas que se comprometan a acoger a los migrantes que se movilizan afectados por el cambio climático.

Frente a los desacuerdos que se sucedieron durante el proceso preparatorio y el propio desarrollo de la Conferencia de Copenhague, el presidente boliviano presentó otra de sus propuestas más relevantes: hacer un referéndum mundial sobre el tema. Según su razonamiento, si los gobiernos

no podían ponerse de acuerdo, deberían ser “los pueblos del mundo” quienes decidan “el destino de la humanidad”.

Muchos de estos planteos formaron parte de las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que Bolivia organizó en abril de 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, en la que participaron representantes de movimientos sociales, de gobiernos aliados al boliviano, y científicos e intelectuales. Allí se insistió en las críticas al encuentro de Copenhague y se expusieron mecanismos alternativos al mercado para garantizar los derechos colectivos a las tierras y a los territorios, lo que conllevó que algunos de sus organizadorxs calificaran sus conclusiones como “un primer documento de la revolución mundial anticapitalista” (Prada Alcoreza, 2010).

Estos eventos le permitieron al gobierno boliviano posicionar a Morales como una referencia global en la búsqueda de modelos sociales, económicos y culturales alternativos. Al combinar su estrategia de alianzas con movimientos sociales, indígenas y ambientales de todo el mundo y, al mismo tiempo, ser un jefe de Estado con recursos y la posibilidad de participar en los organismos internacionales, logró situarse como mediador de algunas demandas del activismo que estaban excluidas de los debates oficiales.

Ahora bien, el propio encuentro de Tiquipaya representó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno del MAS-IPSP y algunas de las organizaciones indígenas o ambientalistas de su país. Durante el desarrollo del evento, diferentes colectivos se nuclearon en torno a un espacio paralelo que denominaron “Mesa 18”, en el que buscaron discutir problemas que, afirmaban, no serían abordados por los 17 grupos de trabajo formales dentro de la cumbre (a la que caracterizaban como controlada completamente por el gobierno). Allí, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) abogaron por la expulsión de todas las “industrias extractivas” del país, ya que estas generan degradación ambiental y el

desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios. Uno de sus principales dirigentes, Felipe Quispe, planteó que Bolivia necesitaba un modelo de desarrollo basado en los ayllus y en las “cosmovisiones andinas”. De esta manera, comenzaron a plantearse tensiones en torno al modelo de desarrollo y los alcances del “vivir bien” (Aguirre y Cooper, 2010).

Por su parte, luego de la Cumbre de los Pueblos, ante el rechazo de los organismos internacionales a incorporar sus propuestas, Bolivia se retiró de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Cancún en diciembre de ese mismo año, para luego volver a las negociaciones en el año siguiente (González, 2018).

Pachamamismo de Estado

Al igual que en muchas otras áreas de la gestión gubernamental, en lo que respecta al cambio climático, el gobierno del MAS-IPSP se propuso explícitamente recuperar experiencias y reivindicaciones de diversos movimientos y organizaciones sociales y políticas de su país y del mundo. Al menos desde la década de 1990, en Bolivia se ha desarrollado un movimiento enfocado en este tema, que moviliza marcos culturales indígenas para presionar tanto al Estado como a la comunidad internacional (Hicks y Fabricant, 2016). Los conflictos denominados “guerras del agua”¹ y “del gas”², que tuvieron lugar en los primeros años de la

1 Se conoce como “guerra del agua” al proceso de protestas referidas a la prestación de este servicio que tuvieron lugar en Cochabamba los primeros meses del año 2000. Luego de la privatización del abastecimiento de agua en la ciudad en septiembre de 1999, hasta entonces bajo la administración municipal, y del aumento de las tarifas que dispuso la nueva concesionaria, comenzaron las manifestaciones, que fueron fuertemente reprimidas por la policía.

2 La “guerra del gas” fue un conflicto iniciado en octubre del año 2003 a partir de la decisión gubernamental de exportar gas natural por Chile. A partir del

década de 2000, en los cuales se desarrollaron nuevas formas de organización y acción que rearticulaban distinciones identitarias, de clase y regionales, fueron claves en este proceso. En ellos se conformaron demandas que conectaron la reivindicación de los “usos y costumbres” indígenas como derechos culturales colectivos con el rechazo a la privatización de los servicios públicos (Albro, 2005). Así, el lenguaje de la indigeneidad adquirió una fuerte relevancia en los discursos críticos de la globalización neoliberal y en la construcción de nuevas relaciones con el Estado (Canessa, 2012) y con el entorno natural (Hicks y Fabricant, 2016).

Recuperando estos antecedentes, como alternativa al capitalismo, Morales formuló en sus intervenciones en foros internacionales una serie de propuestas más o menos amplias que fueron adquiriendo distintas definiciones: la “cultura de la paz y de la vida”, el “buen vivir” o el “socialismo comunitario” son algunas fórmulas recurrentes. Si bien tuvieron diferentes niveles de puntualización y desarrollo, plantean algunas nociones comunes: la principal es la necesidad de recoger “vivencias” de los pueblos indígenas del mundo que permitan desarrollar vínculos de solidaridad entre los seres humanos y de armonía con la “Madre Tierra”.

El mandatario planteó una serie de argumentaciones que podemos denominar “ontológicas”, que tienen un eje fundamental en la metaforización materna del planeta. En este sentido, de acuerdo con sus afirmaciones, para el movimiento indígena la Tierra no puede ser una mercancía, no es un objeto que pueda venderse y comprarse o utilizarse en busca de la maximización de ganancia. Por el contrario, es una “madre que nos da vida”, algo “sagrado”. Si bien esta sacralidad encuentra diferentes modos de concreción, que se vinculan con distintos tipos de actividades humanas, en

cuestionamiento al privilegio que se le daba, por un lado, a la comercialización al exterior de este producto por sobre el abastecimiento del mercado interno y, por el otro, a los precios acordados, comenzaron a desarrollarse una serie de protestas principalmente en la ciudad de El Alto.

su intervención por la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra en la Asamblea General de Naciones Unidas destacaba la realización de homenajes por parte de los pueblos originarios: “Realizamos sagradamente ritos, homenajes, a nuestros ríos, a nuestros cerros, a nuestros lagos, a nuestros animales; tantas músicas como expresión de respeto a la Madre Tierra” (Morales, 2009b).

Radicalizando argumentos que tienen antecedentes en las perspectivas biocéntricas de la naturaleza, a partir de los cuales al menos desde la década de 1960 diferentes colectivos de activistas y científicxs han planteado reclamos ambientales que parten de la concepción de la existencia de valores intrínsecos de la naturaleza que conllevan su reconocimiento como sujeto (Gudynas, 2010), Morales afirmaba que es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que los derechos humanos. Según planteaba, la Tierra o la naturaleza existen más allá de la presencia humana, pero nuestra especie no puede sobrevivir sin el planeta. Así, debido a que sus cosmovisiones constituyen pilares fundamentales en las luchas ambientales, los pueblos indígenas estarían llamados a encabezarlas y a asumir al cambio climático como “una gran bandera de lucha de todo el movimiento indígena del mundo”.

El presidente realizó en numerosas oportunidades una analogía entre los desalojos de los pueblos originarios de sus territorios y las “heridas de muerte” que sufre cotidianamente la Madre Tierra. En la perspectiva de Morales, ambas cuestiones se vinculan con las políticas neoliberales de dominación de la naturaleza, que victimiza por igual a los territorios y a sus habitantes ancestrales.

En este sentido, sería necesario recuperar los saberes campesino-indígenas subalternizados, ya que representan modos de vinculación con la naturaleza que fueron oprimidos y desplazados en el proceso de colonización y de constitución del capitalismo. A través de diversas anécdotas personales, en su saludo a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la

Madre Tierra en Tiquipaya, el presidente remarcaba que este modo de producción implica mecanismos racistas de clasificación de la población y de jerarquización epistemológica, que subordinan a los pueblos y a los países periféricos:

[...] cuando en la madrugada aúlla el zorro, mi madre sabía exactamente que anuncio nos da el zorro o la zorra y sabía exactamente al escuchar que va ser un buen año o mal año en la producción [...]. Yo me acuerdo de niño como nuestros abuelos leían las estrellas, como nuestros abuelos y abuelas, entendían de la llamada luna menguante, cuando hay que sembrar papa, o yuca o algunos productos; y el occidente va eliminando esa gran enseñanza que nos dejaron, esa gran cultura por la vida que nos dejaron nuestros antepasados (Morales, 2010).

Siguiendo estas argumentaciones, la Cancillería boliviana impulsó en Naciones Unidas la ampliación de la denominación para lo que hasta entonces era el Día Internacional de la Tierra³. En 2009 la agencia aprobó la propuesta y se proclamó el Día Internacional de la Madre Tierra, recuperando la perspectiva de reconocer al planeta como “hogar común” y señalando la necesidad de establecer la “armonía” en las relaciones con la naturaleza. Asimismo, en 2010, presentó la propuesta de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en la que sugirió entender la naturaleza no como un objeto inanimado, sino como un “ser vivo” con derechos inherentes inalienables, a partir de los cuales se establecen obligaciones para los seres humanos y para los Estados y las instituciones privadas. Sin embargo, el proyecto no logró aprobación. Finalmente, en 2012, Bolivia sancionó su Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo

³ El Día Internacional de la Tierra fue establecido el 22 de abril en 1972 durante la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, con el objetivo de promover la agenda ambiental.

Integral para Vivir Bien (Ley n.º 300), en la que también se constituyen las perspectivas de este “nuevo paradigma”.

Todas estas propuestas recuperan la noción de “vivir bien” o *suma qamaña* en aymara. Este concepto articula una serie de sentidos que intentan construir un modo de vida alternativo a la modernidad capitalista y colonial. Si bien su definición varía contextualmente e, inclusive, esta constituye un campo de disputa discursivo (Postero, 2018), en las intervenciones consideradas en este artículo se destacan una serie de sentidos como la defensa de la vida en comunidad entre los seres humanos y en armonía con la naturaleza, lo que implica una distribución equitativa de la riqueza.

Diferentes autorxs (Canessa, 2012; Postero, 2018) han señalado distintas etapas en el abordaje tanto de la indigeneidad como del “vivir bien” en el gobierno del MAS-IPSP. Mientras que, afirman, en un primer momento se articularon en discursos que apuntaban a desafiar los pilares del orden neoliberal y a producir fuertes transformaciones en el Estado y la sociedad bolivianos, especialmente a partir del segundo período presidencial de Evo Morales (que inició en 2010), estos tópicos formaron parte de la consolidación de un nuevo orden con fuertes continuidades con las etapas previas (particularmente en lo que se refiere a la realización de proyectos extractivistas). De acuerdo con Postero, la sanción de la Ley Marco de Madre Tierra en 2012 representa un hito en este proceso de transformación, ya que en ella se observa una rearticulación de la idea de “vivir bien” en función de los objetivos de “desarrollo integral”, en muchos casos asociados a la explotación de recursos naturales como el litio. De esta manera, el MAS-IPSP impulsó un modelo de acumulación basado en la explotación capitalista de las ventajas comparativas, recuperando la retórica indígena y de la descolonización para justificar la necesidad de la producción de *commodities*.

Muchxs activistas evaluaron que la implementación de proyectos estatales extractivos y el desarrollo de obras de infraestructura que colisionaban con comunidades indíge-

nas y reclamos ambientalistas eran una traición e, inclusive, abandonaron el gobierno y la alianza social y política en la que se sostenía. Así se reactualizaban, en este caso al interior de la fuerza encabezada por Morales, disputas sobre la relación entre indigeneidad y nación que atraviesan la historia reciente de Bolivia.

Conclusiones

La idea de la “inconmensurabilidad de valoraciones” fue propuesta como un modo de explicitar los intentos de ciertas comunidades y colectivos de sacar los bienes de la naturaleza de la esfera económica para concebirlos desde otras lógicas (de subsistencia, culturales, ecológicas, etc.). En este sentido, lxs actorxs sociales muchas veces escenifican contradicciones irreconciliables en sus prácticas o discursos, como lo vimos en este artículo entre Madre Tierra y capitalismo. Valiéndonos de las categorías que propusieron Descola y Pálsson (2001) para comparar las identidades y los esquemas de interacción que componen la colectividad de humanos y no humanos en diferentes culturas, encontramos que las divergencias en la asignación de valor que manifiestan los discursos analizados en este libro pueden comprenderse recuperando la distinción entre lógicas de rapacidad y de reciprocidad.

Las múltiples menciones a la Pachamama parecen aludir a un tiempo utópico identificado con un pasado relativamente inmediato (como el de “lxs abuelxs”) o que se sumerge en una profundidad ancestral. Este estadio habría sido y estaría siendo corrompido por las lógicas de la modernidad capitalista occidental, frente a la cual se opone como modelo alternativo a seguir y defender.

Mientras que los proyectos extractivos o, en términos más generales, la avidez de ganancia conllevarían una búsqueda de explotación de la máxima riqueza monetaria

posible de los recursos humanos y naturales disponibles en un territorio, las prácticas indígenas se presentan como más saludables, menos nocivas con la tierra y la Tierra, benignas ante el calentamiento global y socialmente equitativas. Cuando quienes se oponen a la explotación de litio en la Puna Central reivindican los “derechos a estar tranquilos” de las salinas y los animales (que, a su vez, estarían relacionados con la “vida sana” de la comunidad), o cuando funcionarixs y militantes del cordón hortícola de La Plata señalan la necesidad de tener un “vínculo estrecho con la tierra” como requisito para la producción agroecológica, proponen un principio de equivalencia entre humanos y no humanos, por lo que deben garantizar mecanismos de compensación frente a la energía que extraen de los otros seres cohabitantes del planeta.

Por supuesto, en cada una de estas coyunturas, la deidad andina adquiere definiciones disímiles, vinculadas a las configuraciones y los conflictos en que emerge su figura. Sin embargo, lo que buscamos destacar es que, en las últimas décadas, las referencias a modos de relación indígenas entre humanos y naturaleza se volvieron un lugar común en la discursividad crítica de los movimientos de justicia ambiental o que conforman lo que Martínez-Alier (2018) llamó el “ecologismo de los pobres”.

Se ha destacado que la defensa de los derechos de la Pachamama es un modo de recuperar la cosmovisión de los pueblos originarios, que la conciben como un ser, en lugar de como un objeto (Carman, 2018). Nuestro análisis nos permite reconocer que, además, especialmente a partir de las intervenciones de Evo Morales en los foros y las conferencias internacionales, esta implica la articulación de una idea de reciprocidad entre humanos y entre humanos y naturaleza que opera en sentido negativo, antagonizando con las lógicas productivas del capitalismo. En este sentido, los antecedentes originarios de esta figura se producen y reelaboran en marcos de interacción (y fricción) complejos

en los que son apropiados y transformados, y así crean nuevas fuerzas y agentes (Tsing, 2005: 4).

En la política exterior boliviana, esta figura es introducida en la construcción de su posicionamiento internacional y, consecuentemente, en el marco de las relaciones que establece con otros Estados nacionales. Es decir, la producción social de una idea de naturaleza y el conjunto de prácticas –cognitivas, productivas, políticas, etc.– asociadas a ella (e imbricadas en ella) (Nouzeilles, 1999; Jasanoff, 2004) se encuentra estrechamente vinculada con los espacios y las disputas que el Estado boliviano entabló en la esfera internacional. En las intervenciones de Morales, es posible reconocer que las entidades que antagonizan con el capitalismo son más amplias que la deidad andina. Además de la Pachamama, la naturaleza o el ambiente, sus discursos recuperaron también el lugar subalterno de los grupos indígenas y de las naciones del sur global. De esta manera, la lógica impugnada es aquella que combina y articula un modo de explotación capitalista, imperialista y colonial. En este sentido, definiciones como la de “vivir bien”, que plantean una reestructuración civilizatoria, se reactualiza en clave nacional, además de comunitaria.

Por supuesto, en los planteos del presidente boliviano, los saberes indígenas adquieren una relevancia indudable, ya que serían las comunidades originarias las que deben enseñarles a los países desarrollados de Occidente nuevos modos de vincularidad humano-naturaleza y humano-humano. Sin embargo, en la medida en que la indigenidad no es una esencia inmutable que poseen (o no) ciertos actorxs, sino que constituye un sitio de ambigüedad y de lucha política, en el que diferentes colectivos disputan la transformación y permanencia de distintos aspectos del orden social (Postero, 2018; Canessa, 2012), su valoración cuantitativa y cualitativa (qué es aquello que, efectivamente, tiene valor) concreta es objeto del devenir y la interacción social.

Finalmente, es importante destacar que el análisis de las intervenciones de Morales permite reconocer que, así como el cambio climático, entendido como un campo cognitivo y político, es coproducido (Jasanoff, 2004) en y por las demandas que buscan defender y ampliar sujetos, discursos y lógicas subalternizadas por los parámetros dominantes en la modernidad capitalista (Quijano, 2000), del mismo modo, las intervenciones críticas del sistema de relaciones internacionales y de las lógicas coloniales que organizan la vida en la mayor parte del mundo adquirieron modulaciones específicas a partir del aumento de la relevancia de la agenda ambiental. Es decir, esta cuestión, en cuanto que espacio de desarrollo de narrativas del fin del mundo (Danowski y Viveiros de Castro, 2019), es un factor fundamental en la introducción de discursos críticos de orden civilizatorio, que abordan desde los antagonismos de la colonialidad entre modos de conocimiento indígenas y europeos (De la Cadena, 2009), hasta la crítica en las lógicas de las relaciones entre Estados y entre Estados y empresas transnacionales.

Bibliografía

- Aguirre, Jessica y Cooper, Elizabeth (2010). "Evo Morales, Climate Change and the Paradoxes of a Social Movement Presidency". *Latin American Perspectives*, vol. 37, pp. 238-244.
- Albro, Robert (2005). "The Indigenous in the Plural in Bolivian Oppositional Politics". *Bulletin of Latin American Research*, vol. 24, pp. 433-453.
- Canessa, Andrew (2012). "Conflict, Claim and Contradiction in the New Indigenous State of Bolivia". *Working Paper Series* n.º 22, desiguALdades.net.

- Carman, María (2018). “La animalidad en cuestión: derechos, ontologías, moralidades y políticas”. *Revista del Museo de Antropología*, vol. 11, pp. 195-208.
- Cepi, Natalia Paola (2014). “La política exterior de Bolivia en tiempos de Evo Morales Ayma”. *Si Somos Americanos*, vol. 14, pp. 125-151.
- Danowski, Deborah y Viveiros de Castro, Eduardo (2019). “Los miedos y los fines... del mundo”. *Nueva Sociedad*, n.º 283, pp. 37-46.
- De la Cadena, Marisol (2009). “Política indígena. Un análisis más allá de la ‘política’”. *Red de Antropologías del Mundo*, vol. 4, pp. 139-176.
- Descola, Phillipe y Pálsson, Gísli (2001). “Introducción”. En *Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*. México: Siglo XXI Editores.
- González, Joel (2018). “Analizando la política sudamericana de cambio climático y bosques a través de REDD+: Los casos de Argentina, Brasil y Bolivia”. *Latin American Journal of International Affairs*, vol. 8, pp. 1-17.
- Gudynas, Eduardo (2010). “La senda biocéntrica: Valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica”. *Tabula Rasa*, n.º 13, pp. 45-71.
- Hicks, Kathryn y Fabricant, Nicole (2016). “The Bolivian Climate Justice Movement Mobilizing Indigeneity in Climate Change Negotiations”. *Latin American Perspectives*, vol. 22, pp. 1-18.
- Jasanoff, Sheila (ed.) (2004). *States of Knowledge. The co-production of science and social order*. Londres: Routledge. Taylor and Francis Group.
- Ley de Celebración de Tratados n.º 401/2013 del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Martínez-Alier, Joan (2008). “Conflictos ecológicos y lenguajes de valoración”. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, vol. 26, pp. 24-34.
- Melo, Mario (2013). “Derechos de la Naturaleza, globalización y cambio climático”. *Línea Sur*, vol. 5, pp. 43-54.

- Ministerio de Relaciones Exteriores (2009). *Aprendiendo nuevos protocolos: El Akhulli, la hoja de coca en la diplomacia de los pueblos*. Diplomacia por la vida. La Paz: Ministerio de Relaciones Exteriores. Academia Diplomática Plurinacional.
- Morales, Evo (2006). Debate general del 61.º período de sesiones de Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Morales, Evo (2007). Debate general del 62.º período de sesiones de Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Morales, Evo (2007b). Mandato de los Pueblos y Naciones Indígenas Originarios a los Estados del Mundo. Chimore, Bolivia.
- Morales, Evo (2008). “El Planeta es mucho más importante que las bolsas de Wall Street”. Mensaje a la 14.º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 14). Poznan, Polonia.
- Morales, Evo (2008b). Debate general del 63.º período de sesiones de Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Morales, Evo (2008c). Séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Morales, Evo (2009a). IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala. Puno, Perú.
- Morales Evo (2009b). Día Internacional de la Madre Tierra en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Morales, Evo (2009c). XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Copenhague, Dinamarca.
- Morales, Evo (2009d). Encuentro con el Caucus Indígena, XV Conferencia sobre el Cambio Climático. Copenhague, Dinamarca.

- Morales, Evo (2009e). Encuentro de presidentes del ALBA-TCP con Movimientos Sociales de Europa. Copenhague, Dinamarca.
- Morales, Evo (2010). Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Tiquipaya, Bolivia.
- Morales, Evo (2010b). XVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cancún, México.
- Nouzeilles, Gabriela (1999). "Patagonia as a Borderland: Nature, Culture and the Idea of the State". *Journal of Latina American Cultural Studies*, vol. 8, pp. 35-48.
- Prada Alcoreza, Raúl (2010). "La revolución mundial del vivir bien". *Aportes Andinos*, n.º 28, pp. 1-3.
- Pinto Calaça, Irene, Carneiro de Freitas, Patricia, Da Silva, Sergio y Maluf, Fabiano (2018). "La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia". *Revista Latinoamericana de Bioética*, vol. 18, pp. 155-172.
- Postero, Nancy (2018). *The Indigenous State. Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia*. Oakland: University of California Press.
- Quijano, Aníbal (2000). "Colonialidad del poder y clasificación social". *Journal of World-System Research*, vol. 2, pp. 342-386.
- Schavelzon, Salvador (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una asamblea constituyente*. La Paz: CLACSO.
- Svampa, Maristella (2020). "¿Hacia dónde van los movimientos por la justicia climática?". *Nueva Sociedad*, n.º 286, pp. 108-121.
- Tsing, Anna (2005). *Friction. An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
- Zurita, Andrés (2013). "Reinterpretando la diplomacia de los pueblos". *Trabajos y Ensayos*, n.º 17. Universidad del País Vasco. Bilbao.

4

Puna N1 ≠ Puna N2

Minería litífera y campos de interlocución en la puna jujeña

GONZALO FEDERICO ZUBIA

La Puna es un desierto duro, con algunos cursos de agua en los veranos; en el resto del año esos regueros son rastros secos como estelas geológicas. Aquí, en este desierto, está el hombre solo ante la áspera naturaleza. Apenas un puñado de gente –menos de uno por kilómetro cuadrado– que disminuye año a año puede vivir aquí, en estas altas tierras, indigentes e ingratas. Aquí, en este desierto, está el hombre solo entre sus semejantes en su destino más elemental. Ellos nada le piden y esta dura intemperie es indiferente a sus obstinados pobladores: no viven en ciudades sino en el medio rural, en módicos poblados, muchos de los cuales datan de cuatro siglos de instalación, pero admiran las ciudades y viajan continuamente a ellas.

Héctor Tizón (2012), *Memorial de la puna*

La puna jujeña y sus hilos: la hipótesis del aterrizaje

¿Qué relación podría establecerse entre las protestas por el acceso al agua y a los territorios comunitarios que en la puna jujeña llevan adelante las comunidades aborígenes de

las Salinas Grandes y los monitoreos ambientales alrededor de los salares de Olaroz y Cauchari? ¿Y entre la inauguración de la Escuela de Educación Técnica Química n.º 2 de Olaroz Chico y los emprendimientos de extracción de iones de litio en Susques? ¿Hay alguna relación entre el movimiento turístico en las Salinas Grandes y la movilidad laboral en los salares puneños? A simple vista, estos eventos parecen aislados entre sí y solo tendrían en común el escenario de fondo: la puna jujeña. No obstante, si bien correlación no implica causalidad, estos eventos en apariencia discretos tienen en común más que un mero escenario “de fondo”. Interactúan y sostienen microconexiones entre sí, y configuran una urdiembre acerca de cómo se construye el paisaje en la puna jujeña a través de diversas operaciones: desde fotos turísticas hasta procedimientos químicos de lixibización de minerales, desde protestas por los territorios comunitarios hasta proyectos educativos y emprendimientos extractivos. Alrededor de estos procedimientos y experiencias, el presente trabajo indaga los modos en los que el paisaje puneño transiciona, muta a través de diferentes modulaciones y gradientes, reconfigurando el escenario y quienes lo habitan. Con este cometido, el trabajo se inscribe en una serie de controversias y conflictos.

Una de estas controversias gira en torno a los impactos y las transformaciones que la minería de litio podría generar en la región. La puna jujeña forma parte de la puna de Atacama, una altiplanicie desértica ubicada a 4.500 m s. n. m. y con una superficie aproximada de 80.000 km² que comparten Argentina y Chile. Esta región árida integra el denominado “triángulo del litio” en Sudamérica, en cuya geografía sobresalen el salar del Hombre Muerto en Catamarca, el salar de Atacama en Chile y el salar de Uyuni en Bolivia; y en Jujuy, como parte de esta macroestructura geográfica, las Salinas Grandes y los Salares de Olaroz y el de Cauchari. Por su composición geológica y climática, toda esta región es un territorio rico en litio: los tres países concentran el 55 % de las reservas mundiales y cerca del

85 % de los depósitos de salmueras (Zícari, 2015). El litio es el mineral estratégico que sustenta la promesa del “carbono cero”, es decir, el pasaje de las matrices energéticas basadas en combustibles fósiles a otras de menor impacto ambiental. El litio se vuelve así una piedra angular de las “tecnologías verdes” y convierte a los salares que componen la región en el nuevo El Dorado del litio: enclaves estratégicos de exploración y explotación de este mineral.

El interés geopolítico global sobre el litio motorizó en la provincia de Jujuy el inicio de emprendimientos litíferos en la puna: tras varios años de exploración en los salares de Olaroz y Cauchari en Susques, en 2014 se inauguraron las plantas de procesamiento de este mineral, iniciativas que suscitaban la actualización del imaginario desarrollista por parte del gobierno jujeño, por un lado, y por otro, la actualización de problemáticas históricas en la región tales como la tenencia de los títulos de los territorios comunitarios por parte de las comunidades originarias o el acceso al agua. La actualización de estas problemáticas fundamenta la denuncia por la violación de derechos comunitarios por parte de los emprendimientos litíferos: este es el caso de la “Mesa de las 33 Comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”, que inició en 2011 un proceso de movilización colectiva y solicitud de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las Naciones Unidas por la prospección de litio en sus territorios. Este proceso de acción colectiva y movilización generó una alerta temprana acerca del impacto de la minería de litio en la región por sus consecuencias ambientales y por cómo impactaría al ecosistema alrededor de los salares y a las comunidades de la zona, su comprensión del territorio y sus formas de relacionarse con este (Zubia, 2014). Esta alerta también promovió la investigación científica sobre la temática.

Al analizar el conjunto de cambios en la región, Barbara Göbel –investigadora de referencia sobre la puna de Atacama– subraya los efectos que el *aterrizaje* de las empresas mineras produce en el paisaje ecosistémico local:

El ejemplo del Salar de Olaroz-Cauchari [...] evidencia la multiplicidad de los efectos que produce el aterrizaje de proyectos mineros de litio. A pesar de que la fase de exploración del litio no requiere de grandes medidas de infraestructura, ya se nota el carácter invasivo de la minería del litio en un ecosistema tan frágil, como son los salares, con la instalación de encerramientos, torres de perforación, casas y otras edificaciones, y el movimiento de camionetas, entre otros. Las injerencias y los impactos serán mayores cuando comience la explotación del litio y el primer procesamiento del mineral en el lugar, como ya lo indican las instalaciones de extracción y procesamiento que se están construyendo en el salar (Göbel, 2014: 177).

La utilización de la noción de “aterrizaje” para describir los emprendimientos mineros es una referencia indirecta al planteo de Vladimir Gil (2020), y connota un impacto abrupto de cambios regionales producto de la instalación de los complejos mineros: plantas, vehículos, entre otros. Son estos ensamblajes sociotecnológicos los que *aterrizan* en los territorios y alteran las tramas locales. Göbel extiende esta premisa analítica al escenario de la puna de Atacama, extensión que es recuperada por Puente y Argento en su análisis sobre la acción colectiva en las Salinas Grandes:

Las tensiones que han ido emergiendo expresan una disputa por la organización del espacio entre la forma ancestral de ocupar y transformar el territorio por parte de las comunidades y el modo en como las empresas multinacionales “aterrizan” en los salares, donde capitales privados mineros, automotrices y empresariales se asocian para su explotación (Puente y Argento, 2015: 123).

La hipótesis del *aterrizaje* connota el concurso de dos proyectos territoriales en tensión: uno local ancestral y otro foráneo, cuyo índice es el complejo sociotecnológico del equipamiento fabril.

Por otra parte, prevalece en la discusión sobre la región una concepción de unidad territorial de la puna jujeña.

Sobre este presupuesto de unidad territorial, sin embargo, cabe señalar que las comunidades que iniciaron la movilización contra la minería de litio se encuentran alrededor de las Salinas Grandes, mientras que donde ya se inició la explotación minera es en los salares de Olaroz y Cauchari. Alrededor de estos salares, también hay poblados con comunidades aborígenes¹. Entre ambas zonas hay una distancia relativamente corta, aproximadamente de 100 km, pero las experiencias habitacionales no son idénticas. En el escenario puneño en Jujuy, las movilizaciones acerca de las resistencias a la minería litífera alrededor de las Salinas Grandes han convocado la atención sociológica y periodística, y esto ha solapado la exploración de otras zonas y otras orientaciones. Al inscribirse en estos debates, y anclado en la diversidad y heterogeneidad de la puna jujeña, el presente trabajo indaga la diversidad de posiciones y de los campos de negociación y discusión sobre el tema en la región.

A partir de estas primeras distinciones empírico-conceptuales, el trabajo se propone matizar la hipótesis del *aterrizaje*. Para expandir y complejizar esta hipótesis, el trabajo describe y analiza un conjunto de procesos sociotécnicos coetáneos y concomitantes al de la instalación de los complejos productivos en la puna, procesos que cuestionan no solo la polarización entre los dos proyectos, sino también la homogeneidad territorial. Al reponer los procesos complementarios, el artículo indaga estos otros procesos comprendiéndolos como *zonas de contacto*, de acuerdo con el planteo de Pratt (2010): esto es, espacios fronterizos que desplazan los centros de gravedad y los puntos de vista

¹ A lo largo de este texto, utilizaremos “aborigen” para referir a la cuestión originaria. La elección se fundamenta en la presentación misma de las comunidades que, en el proceso de reconocimiento estatal, tanto a nivel provincial como nacional, se constituyen como asociaciones con personería jurídica bajo el nombre de “Comunidad Aborigen” (véase, por ejemplo, el sello en el acta en la imagen 12 de este mismo texto). Para más referencias sobre el proceso de asociación de las comunidades aborígenes de Jujuy, puede consultarse García Moritán y Cruz (2011).

estables hacia las zonas de encuentros capilares y en ellos la formulación de los lenguajes y las representaciones que mutan. En estas zonas de contacto, el trabajo se esfuerza en distinguir los microcambios de los módulos tecnológicos: más que concentrarse en un único despliegue de la instalación fabril, repone entramados sociotécnicos previos, los cuales van produciendo cambios a baja escala e intensidad (Thomas y Buch, 2008). Estos otros campos de interlocución son también espacios de encuentros culturales, transitorios e interactivos, en los que se modulan microcambios (Tsing, 2005) que ampliarán y enriquecerán la perspectiva acerca de los cambios alrededor de los emprendimientos litíferos.

A partir de estas coordenadas heurísticas, el trabajo concentra su atención en los procesos sociocomunitarios de la región de Susques, donde se ubican los salares de Olaroz y Cauchari, y combina esta indagación con el análisis comparativo de los procesos alrededor de las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, escenarios atravesados por los intereses geopolíticos de exploración y explotación del litio, pero también por el turismo y otras tecnologías que inciden en la reconfiguración del escenario local, espacio donde se localiza la movilización que resiste a la explotación litífera. Si bien el trabajo se focaliza en la indagación del impacto de la minería de litio en la región, la conecta con otros procesos como la migración, las dinámicas de transporte, la conectividad telefónica en la región y los procesos productivos, entre otros. En suma, se trata de construir una madeja a través de la cual estudiar cómo se transforma el paisaje local y, particularmente, el generado por la minería de litio.

Este texto recoge materiales obtenidos en entrevistas y observaciones de campo realizadas durante los veranos de 2018, 2019 y 2020, tanto en la región puneña como en la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Combina estos registros de campo con el relevamiento

de noticias y bibliografía sobre el tema. Recupera también la experiencia laboral precedente en la zona como técnico territorial para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre el 2006 y el 2011.

¿Cuál salar?: el presupuesto de la unidad territorial

La puna es una meseta de alta montaña que integra el sistema de la cordillera de los Andes y se caracteriza por una baja presión atmosférica, un clima árido y bajo nivel de precipitaciones anuales. En Jujuy la puna comprende los departamentos de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Susques. En su conjunto, la región presenta las siguientes características: comunidades aglomeradas en pequeños pueblos, también población dispersa y núcleos urbanos de mediano tamaño (La Quiaca, Abra Pampa, Susques pueblo); una economía de subsistencia, que combina la producción agrícola-ganadera con el empleo en servicios comerciales y administración pública; y un deficiente acceso a la infraestructura del servicio cloacal y del eléctrico –gran parte del área forma parte del servicio de energía dispersa: al no contar con tendido eléctrico, la población se abastece con gasoil y solo cuenta con luz eléctrica en horarios determinados–, a red de agua potable, a caminos, entre otros. Por la dispersión de su población, la región también presenta deficiencias de acceso a los servicios de comunicación fija y de telefonía celular: solo las localidades de Abra Pampa, La Quiaca, Susques pueblo y Mina Pirquitas cuentan con antenas de telefonía móvil. Otra característica relevante es la alta dinámica de emigración educativa y laboral, con bajo retorno, la cual Karasik (2005) analiza en términos de “drenaje” de la población de las zonas altas (puna y quebrada) y del campo en general hacia áreas de desarrollo

capitalista más dinámico, en las regiones de valles al sur de la provincia, zonas vinculadas a la producción azucarera, tabacalera y los servicios estatales y comerciales, particularmente en Gran Jujuy.

Imagen 1. Vista panorámica de Susques pueblo



Fuente: registro fotográfico propio.

A nivel comunitario, la población de cada localidad se encuentra organizada en Comunidades Aborígenes. Estas son espacios de asociación jurídica de carácter asambleario en la que las y los vecinos de cada localidad participan. Cada Comunidad Aborigen cuenta con una comisión directiva, encargada de convocar a las asambleas periódicas, seguir el mandato de la asamblea y realizar las gestiones administrativas referentes a la cuestión comunitaria².

En función de la disposición de las rutas provinciales y nacionales, de los caminos internos y de los flujos de circulación y comunicación en la zona, se distinguen cuatro subregiones: La Quiaca, Yavi y Santa Catalina en

² A lo largo del texto, la cuestión comunitaria y el quehacer de las Comunidades Aborígenes (como asociación jurídica) se solapan. Este solapamiento no es solo nominal: las comunidades representan a la población de cada localidad. Para precisar entre uno y otro sentido, referiremos a las “Comunidades Aborígenes” (con mayúscula) en su aspecto representativo-asociativo, y como “comunitario/a” a lo vecinal.

la puna norte; Rinconada, Cusi Cusi y Mina Pirquitas, la puna oeste; Abra Pampa y Cochinoca, la puna central; y finalmente Susques, la puna sur de Jujuy.

Sobre este panorama general, consideremos algunas características particulares.

La zona de Salinas Grandes se encuentra ubicada en la puna central, entre las provincias de Jujuy y Salta. Tiene una extensión aproximada de 212 km² y se ubica a una altura de 3.450 m s. n. m. Por su cercanía a la quebrada de Humahuaca –Patrimonio de la Humanidad desde el 2003–, las Salinas son un lugar muy visitado turísticamente, dinámica esta que ha tenido un impacto territorial en la región: los pueblos alrededor del salar iniciaron sus propios emprendimientos turísticos e incluso recorridos con caravanas de llama sobre el salar, los cuales evocan la dinámica de movilidad que caracterizó históricamente a la región. Esta actividad económica convive con la “cosecha de sal”, esto es, la recolección y comercialización de sal para consumo animal y humano (minería a escala comunitaria), por un lado, y, por el otro, con intensos procesos de organización sociocomunitaria que desplegaron organismos como la Asociación de Mujeres Warmi Sayajsunqo, la red de productores PUNHA (Por un Nuevo Hombre Americano), y la Fundación O.CLA.DE. (Obra Claretiana para el Desarrollo), dependiente del Obispado de Humahuaca.

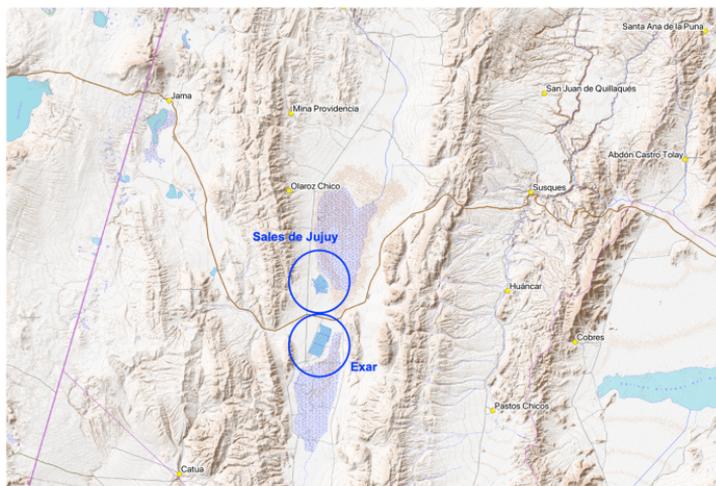
Imagen 2. Ubicación geográfica de las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari, departamentos y localidades de referencia



Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el salar de Olaroz y el de Cauchari se ubican en el departamento Susques. En esta zona se localizan las primeras plantas de procesamiento de litio de la puna jujeña: tras siete años de planificación, construcción y puesta en marcha del proyecto, la empresa Sales de Jujuy inauguró su planta en el salar de Olaroz en diciembre de 2014, y, alrededor de la misma fecha, la empresa Exar hizo lo mismo con el Proyecto Cauchari-Olaroz al sur de la Ruta 52. La primera de las empresas es una *joint venture* fundada en 2010 e integrada por JEMSE (Jujuy Energía y Minería, una empresa estatal del gobierno de Jujuy) y Sales de Jujuy Pte. Ltd. –con sede en Singapur–. Por su parte, Exar S.A. es también una *joint venture* conformada por Lithium Americas Corp (Vancouver) y Ganfeng Lithium Co. Ltd. (China), y desde el 2021 también cuenta con la participación de JEMSE.

Imagen 3. Ubicación geográfica de las áreas de explotación de Sales de Jujuy y Exar en los salares de Olaroz y Cauchari



Fuente: elaboración propia.

Si bien ambas plantas de procesamiento de litio son de inauguración reciente, las empresas transnacionales tienen una presencia de varios años en la zona: Exar opera allí desde el 2007, y Sales de Jujuy, desde el 2006, aproximadamente. Esta presencia territorial de prospección y exploración resta el carácter “novedoso” al emprendimiento litífero: a nivel comunitario, en el departamento Susques ya se conoce a las empresas y sus actividades, las y los habitantes de la zona están familiarizados con sus actividades exploratorias y con la circulación de sus vehículos por la región.

En las Salinas Grandes, en cambio, todavía no hay emprendimientos de explotación litífera, aunque sí cateo, y esto ha sido objeto de denuncia local: en 2011 las Comunidades Aborígenes alrededor de las Salinas Grandes, organizadas en la Mesa de las 33 Comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, presentaron

un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Jujuy y Salta y el Estado nacional, “a fin de que se condene a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos de participación y consulta” (CSJN, 2011: 1). De acuerdo con el planteo de las comunidades, en la zona ya se estaban realizando actividades prospectivas³. En la audiencia pública de la causa, celebrada en 2012, el fiscal de Estado Alberto Matuk, en representación del gobierno de Jujuy, informó que no existían pedimentos de exploración ni explotación de litio en la zona de las Salinas Grandes, y sí en la zona de Olaroz y Cauchari, donde se contaba con el consentimiento informado de parte de las comunidades. La denuncia por la falta de consulta se elevó ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Anaya, 2012) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo a la estrategia jurídica, también se realizaron movilizaciones colectivas, como los cortes de la Ruta Nacional n.º 52. Estas dieron mayor visibilidad al escenario de las Salinas Grandes. De hecho, la bibliografía que se ocupa del impacto del litio en la región se concentra mayormente en este caso (Schiaffini, 2013; Argento, 2020; Pragier, 2019; Puente y Argento, 2015).

Con el foco en la emergencia de las protestas en la acción colectiva y la disputa territorial alrededor de las Salinas Grandes, estas indagaciones parten del efecto novedad y de la concepción de la unidad territorial sin distinguir dos subregiones distintas. ¿Cómo enriquecer estas investigaciones desde una perspectiva más diacrónica, una que vaya más allá del efecto novedad y que considere, por ejemplo, las experiencias de convivencia con las empresas litíferas

³ Al respecto, en distintas declaraciones a medios nacionales, las y los referentes comunitarios indicaron que las actividades estaban a cargo de tres empresas: Luis Losi S.A., Ekeko S.A. y A.I.S. Resources. De las tres, Losi indica específicamente en su página web que tiene minas de bórax y litio en Mina Cardero, Minas Guayatayoc I y III, y Mina Gianninna en la provincia de Jujuy.

desde hace más de una década en el pueblo de Susques, y que considere, además de la minería de litio, otros procesos territoriales?

La metamorfosis del paisaje. Susques, Olaroz, Cauchari

No hay duda de que la puesta en funcionamiento de las plantas de procesamiento de litio en Olaroz y Cauchari resultan un acontecimiento sociotécnico en el paisaje puneño, de clima árido y seco: las nuevas infraestructuras fabriles, con sus módulos verticales y coloridos piletones verde esmeralda, contrastan con los ocres del paisaje y el predominio de la línea horizontal, de acuerdo con la imaginería turística predominante desde hace décadas.

Imagen 4. Vista panorámica del complejo fabril de la empresa Sales de Jujuy en Olaroz



Fuente: *El Tribuno de Jujuy*.

Los Informes de Impacto Ambiental (requeridos por el Decreto Reglamentario Provincial n.º 5.772 de 2010) de

cada una de las empresas dan cuenta de ese acontecimiento sociotécnico en la puna a través de la descripción de sus complejos fabriles:

Todas las obras del Proyecto afectarán el paisaje en la medida en que representarán una modificación del entorno natural. [...]. Estas constituyen el mayor impacto del Proyecto sobre los factores naturales, ya que afectan la continuidad visual del salar que es su atributo más valioso desde el punto de vista paisajístico (Expte. n.º 655-2017, Secretaría de Minería de la Provincia).

Para dar a conocer la magnitud de los equipamientos globales emplazados en la puna, las empresas organizaron *tours* guiados por la zona para funcionarias, funcionarios, periodistas, investigadores e investigadoras. En conjunto, como efecto de estas excursiones, se instaló en la opinión pública el efecto novedad del emplazamiento fabril en Susques, efecto que se trasladó también a la investigación sobre sus efectos. En conjunto, los análisis sociológico y periodístico olvidan, sin embargo, la continuidad entre el equipamiento fabril y otros módulos que componen el entramado sociotécnico preexistente, por ejemplo, las camionetas.

Las camionetas son un medio de transporte clave en la región, ya que no se cuenta con transporte público que conecte las localidades alrededor de esta zona de producción. Y las camionetas de las empresas, mientras realizan sus tareas, sirven también de vehículo de conexión para distintas actividades cotidianas: traslado de agentes de salud, de familias entre las zonas, de maestros y maestras, etc. Seguir la dinámica de los vehículos sirve de referencia para pensar la familiaridad de las y los lugareños con los equipamientos móviles de las empresas y las facilidades que estas proveen desde hace más de una década.

Trazar una continuidad entre la instalación de las plantas de procesamiento de litio a gran escala y las camionetas que le preceden, como parte de un conglomerado tecnológico más complejo, permite matizar la hipótesis

del *aterrizaje* del emprendimiento fabril: no hay un único módulo fabril que “desciende” en la puna, sino más bien una trayectoria de instalación productiva de la cual camionetas y plantas son unidades con diferentes escalas de un proyecto territorial y productivo mayor. En este sentido, los entramados socioproductivos impactan más bien capilarmente en la reconfiguración del paisaje local y no a grandes saltos. Es este el planteo de Milton Santos (2000), quien, en su analítica de la ontología del espacio, focaliza la atención en *objetos y acciones*, en cuanto conforman sistemas técnicos que determinan el carácter singular de una configuración espacial. Siguiendo su planteo, preguntar cómo cambia el paisaje implica interrogarnos por las diferentes instancias en las que se producen microcambios técnicos que transforman la relación con el medio: son estos *acontecimientos* los vectores de la metamorfosis. En esta línea, no solo las camionetas, sino también los tendidos eléctricos, las líneas telefónicas, los otros medios de transporte, los materiales de las viviendas, los electrodomésticos cotidianos, entre muchos otros artefactos que podríamos considerar aquí, van produciendo cadenas de acontecimientos en las que también ocurre la instalación de la planta de litio.

Los sistemas productivos regionales también forman parte de esos entramados de objetos y acciones. Así, por ejemplo, al analizar el impacto de la economía capitalista en la región durante los siglos XIX y XX, Göbel estudia cómo se fue combinando la economía de hacienda pastoril de base con los primeros emprendimientos mineros de la puna, la migración laboral zafrera a las yungas y el empleo salarial estatal, entre cuyos efectos distingue los cambios en las unidades domésticas:

La existencia de objetos que solamente se pueden adquirir con dinero como mesas, sillas, armarios, camas, radios, bicicletas, etc. refleja el grado de involucramiento de esta unidad doméstica con la economía capitalista; y esto tanto en el pasado como en el presente. Se podría contar a través de

estos objetos la historia del entrelazamiento entre la economía de mercado y el pastoreo. Además, son marcadores de diferenciación social entre las unidades domésticas. Otras expresiones del impacto de la economía capitalista son determinados alimentos (por ejemplo, fideos, arroz, fruta enlatada, gaseosas, pan de la panadería) y ropa que fue confeccionada industrialmente (por ejemplo, pantalones vaqueros, zapatillas, camperas) (Göbel, 2003: 197).

Entre las dinámicas de pastoreo y hacienda en la región, pero también entre las gaseosas, los *jeans*, las escuelas, las camionetas y las plantas de procesamiento, hay una contigüidad material. Hay gradientes. En la misma línea, las instalaciones de las plantas de procesamiento en la zona dejan de ser una novedad local porque a nivel comunitario ya se tenía conocimiento de su futura construcción mucho antes de que se efectivizaran las obras: las camionetas y los uniformes con sus logotipos de las empresas ya lo anunciaban, en una penetración y cambios capilares.

Durante los últimos años, los pequeños cambios cotidianos que se iban produciendo alrededor de las iniciativas mineras causaron el retorno a Olaroz Chico de gente que había emigrado, ya fuera por razones laborales o educativas. Esta migración de retorno viene acompañada de teléfonos celulares, internet y pantallas led: quienes vuelven a la puna vuelven con sus costumbres, gustos y consumos aprendidos en otras partes. Y estos producen también cambios locales.

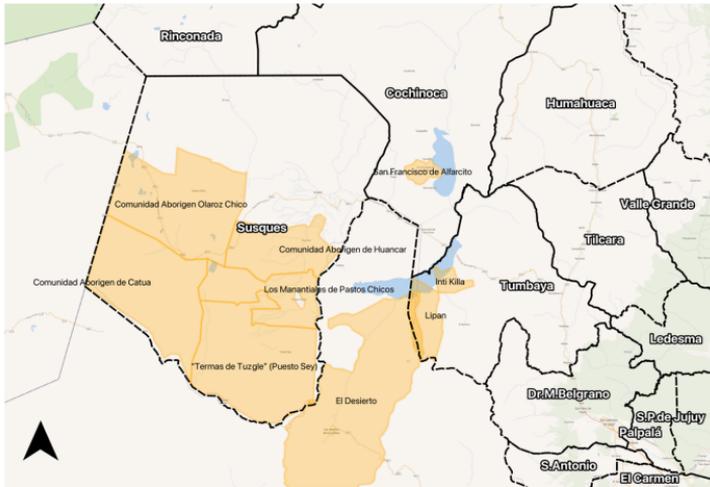
Entre polígonos y superficies: la puna hojaldrada

¿A quiénes les pertenecen los salares? Esta es una pregunta bastante espinosa, pero de algún modo también permite comprender la complejidad del escenario regional, y no solo por las jurisdicciones políticas que

convoca, sino también por la configuración espacial a partir de las cuales se definen estas. Veamos.

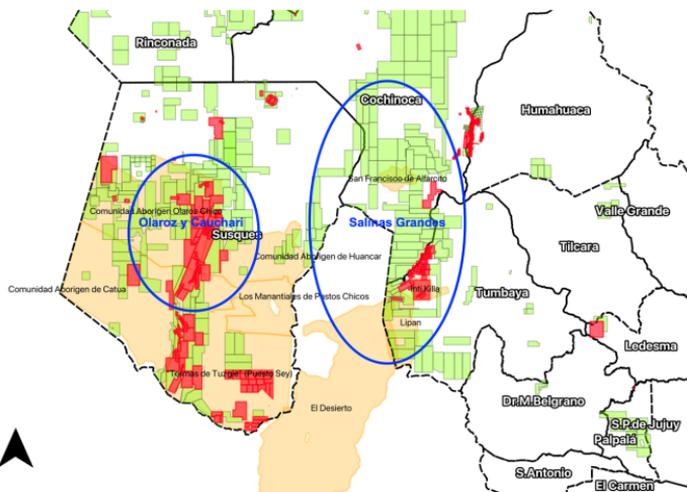
De acuerdo con la legislación argentina (Constitución Nacional y Código Minero), los “recursos naturales” como el litio –y otros minerales metalíferos– son recursos estratégicos, y su dominio es potestad de los gobiernos provinciales. La jurisprudencia distingue suelo y subsuelo, este último es objeto de gestión estatal o de concesión privada, pero cuyos derechos administra el Estado. De aquí que la condición de propiedad terrenal en la Argentina, en cualquiera de sus formas, lo sea solo en términos de superficie. De este modo, la jurisprudencia construye una primera operación de abstracción geométrica del espacio que tiene una expresión material en la región de nuestro interés: un corte topográfico vertical que asigna derechos por capas. Esta primera operación se complementa con otra, horizontal y más compleja, la que define polígonos en la superficie. Estos determinan jurisdicciones superficiales: un terreno particular, un ejido municipal, una división político-geográfica gubernamental, un territorio comunitario aborígen, etc., cada una con sus respectivos derechos. Estas capas de polígonos se superponen o se complementan, de acuerdo a las jurisdicciones. Ahora bien, por sus cualidades en las minas, el eje vertical y el eje horizontal se unifican, estas son tanto polígonos de superficie como subsuelo de exploración geológica. Consideremos las siguientes imágenes para comprender en detalle el escenario que nos convoca:

Imagen 5. Localización geográfica de los Territorios Comunitarios de Ocupación Actual Tradicional y Pública (OATyP) con resolución, ubicados sobre y alrededor de las cuencas de Salinas Grande y laguna de Guayatayoc y los salares de Olaroz y Cauchari en la puna Salto-Jujeña. Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Ejecución Ley n.º 26.160



Fuente: elaboración propia a partir de datos georreferenciados provistos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Imagen 6. Superposición de polígonos mineros y territorios comunitarios en las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari. En rojo las minas concedidas, en verde los pedimentos mineros



Fuente: elaboración propia a partir de microdatos del GeoVisor Minero, elaborado por la Secretaría de Minería de la provincia de Jujuy (edición de febrero de 2021).

Las dos imágenes anteriores nos muestran cómo se gestiona el territorio en la puna jujeña, conformado por polígonos que diseccionan el paisaje territorial. La imagen 5 señala los territorios de las Comunidades Aborígenes reconocidos alrededor de las Salinas Grandes y laguna de Guaytayoc y los salares de Olaroz y Cauchari, conquistados a través de lucha y demanda por reconocimiento identitario. Por otra parte, la imagen 6 grafica los polígonos mineros en la misma zona de referencia: en rojo las minas concedidas, en verde las minas solicitadas. Cada conjunto minero concedido a las empresas constituye el área de explotación en Olaroz y Cauchari. En la zona de las Salinas Grandes, por otra parte, también se observan polígonos de minas

concedidas y pedimentos, de litio, boro y borato, pero todas recién en fase de cateo.

En este complejo hojaldre de polígonos territoriales, también se dirime la transformación de la puna jujeña, en cuanto cada uno no solo condensa una operación de abstracción geométrica del territorio, un segmento en la superficie, sino que también connota la incisión de jurisdicciones con sus correspondientes derechos: en Susques, el relevamiento territorial de la Ley n.º 26.160 reconoció casi todo el ejido departamental como territorio comunitario; en cambio, en la zona de las Salinas, todavía no se institucionalizó el reconocimiento de los territorios comunitarios, y esto también se actualiza en el proceso de movilización y acción colectiva en este salar. En este sentido, de algún modo, las Comunidades Aborígenes de Susques se encuentran en “mejores” posiciones político-territoriales frente a las empresas mineras, en cuanto poseen ya el reconocimiento estatal de sus territorios comunitarios. Esto convierte a las comunidades de Susques en interlocutoras necesarias del emprendimiento litífero, dado que los recursos estratégicos se encuentran en el subsuelo de sus territorios.

Entonces, ¿a quiénes les pertenecen los salares? Esta pregunta conduce a una encerrona, es claro, pero el no formularla incurre en el desconocimiento de los linajes geomorfológicos que inciden en los campos de interlocución, de cómo se configuran y de cómo se rearmen las agencias territoriales. De tal forma, los emprendimientos mineros no *aterrizan* sobre los territorios, sino que más bien se engarzan sobre este hojaldre de incisiones geomorfológicas, se integran a un escenario que tiene también una configuración previa.

Campo de interlocución 1: las áreas de relaciones comunitarias

En Susques las empresas mineras vienen operando territorialmente hace más de quince años, por lo cual se fue conformando un mercado de trabajo regional con contratación de mano de obra local –requerimiento establecido por las comunidades–, el cual comprende una serie de segmentos: el primero es de empleo directo de contratación a cargo de las mismas empresas; un segundo son las empresas subcontratistas; y finalmente un tercero, el sector de servicios asociados. Entre estos se ubican hospedajes, lavanderías, comedores que prestan servicios para las y los trabajadores de las plantas casi de forma exclusiva, por lo cual son trabajos satélites.

A lo largo de estos años, la conformación de este mercado de trabajo ha sido incorporado como forma de vida habitual en las comunidades locales: directoras de escuela y personal de salud mencionan la existencia de trabajadoras y trabajadores mineros que generan ingresos familiares. Están también la inversión de la tendencia migratoria y la circulación de bienes y mercancías, así como algunas mejoras en la construcción: en un recorrido por Susques pueblo, Puesto Sey, Olaroz y otras localidades, se observan obras de viviendas particulares en construcción que generan empleo local. Otro cambio mencionado es el control del consumo de alcohol, preocupación comunitaria extendida en la región. Al respecto, y a pedido de las autoridades locales, las empresas efectúan controles de alcoholemia a las y los trabajadores. Esto ha tenido efectos señalados por agentes sanitarios y autoridades escolares, y también por las y los comerciantes despenseros de la zona, que observaron una merma en sus ventas.

En estos temas, existen espacios de interacción entre referentes de Comunidades Aborígenes y las áreas de relaciones comunitarias de las empresas. Este “componente social” de los emprendimientos mineros es una orientación técnico-política

surgida de la conflictividad socioambiental en torno a la actividad minera en el mundo, y también de la emergencia de la noción de “responsabilidad social corporativa” como tecnología de gestión de actuaciones y conflictos por parte de las empresas en general (el desarrollo de la *stakeholder theory* en el ámbito de las finanzas y de las corporaciones empresariales). Visto desde el lado empresario, la antropóloga e investigadora Mónica Echenique, responsable del relaciones comunitarias de Exar, indica:

En lo social se señalan dos acciones: hacia adentro de los proyectos vinculados a las poblaciones indígenas, se ha iniciado un camino adaptando a medidas explícitas de reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad de la tierra, el acceso a recursos y la protección de su patrimonio [...]; y hacia afuera, en las áreas urbanas, la acción ha consistido en responder a los ataques [antimineros] antes que dando a conocer sus acciones (Echenique, 2012: 363-364).

En Susques cada empresa tiene su propia área de relaciones comunitarias, y cada una cuenta con sus respectivos programas y áreas de intervención. Sales de Jujuy consigna como área de influencia comunitaria a 10 localidades, a saber: Coranzulí, El Toro, Jama, Puesto Sey, Pastos Chicos, Catua, Susques pueblo, Olaroz Chico, Huancar y San Juan de Quillaques. Por su parte, Exar conforma su área de influencia con 6 localidades: Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Catua, Olaroz Chico y Susques pueblo. En cada una de estas áreas de influencia, las empresas trabajan con programas de transporte comunitario, acompañamiento a campañas de salud, programas de comunicación y consulta, generación de bolsas de trabajo y empleo local, entre otras acciones territoriales.

Estos programas de trabajo social parten de un diagnóstico de las problemáticas territoriales. Por ejemplo, la del transporte terrestre. En toda la región, la infraestructura de movilidad es deficiente: solo el pueblo de Susques cuenta con transporte público de pasajeros, que conecta esta localidad con Puramarca y San Salvador de Jujuy, con una sola frecuencia por día,

pero el resto de las comunidades no tienen transporte regular. En este contexto, la implementación de programas de transporte social fue bien visto por parte de las comunidades, en cuanto resuelven una necesidad inmediata frente a la cual el Estado no plantea solución. Lo mismo acontece con los programas de microdonaciones que realizan las empresas: las entrevistas de campo realizadas a directoras de establecimientos educativos y agentes de salud coinciden en destacar los beneficios directos –microdonaciones– que reciben por parte de las empresas, a las cuales acuden solicitando colaboración para la realización de eventos y actividades especiales (fiestas de egresados, celebraciones religiosas, actividades sociales), o incluso el mejoramiento de la infraestructura institucional o comunitaria (salones comunitarios, infraestructura de plazoletas, etc.) (ver imagen 7). Se trata de la ejecución a corto plazo de acciones comunitarias por parte de las empresas, frente a la pobreza de la población y a la ausencia de servicios estatales.

Imagen 7. Laboratorio y sala de música en Olaroz Chico, edificio construido por Sales de Jujuy



Fuente: *El Tribuno de Jujuy*.

Como se desprende de estos beneficios inmediatos, la cotidianidad de la vida regional se ve empapada por la actuación de las empresas a través del accionar de sus áreas de relaciones comunitarias. Estas parten de diagnósticos situados, como la cuestión del empleo, la deficiencia del sistema de transporte, la necesidad de conectividad digital y de recursos específicos de micro-financiamientos, y generan planes y estrategias de intervención al respecto.

Campo de interlocución 2: entre escuelas, fábricas y asambleas

La continuidad educativa es otro de los motivantes de la migración regional de Susques. En cada uno de los poblados, solo hay una escuela primaria con régimen de verano –el ciclo lectivo se inicia en septiembre y culmina en junio–. Para continuar los estudios secundarios, las opciones son emigrar al pueblo de Susques o directamente a Gran Jujuy. En Susques pueblo, hay una escuela secundaria (n.º 13, Comandante Piedrabuena) y un profesorado de nivel terciario (Instituto de Educación Superior n.º 3).

En este contexto, fue novedosa la inauguración en 2018 de la Escuela de Educación Técnica n.º 2 en Olaroz con orientación en química, perfil directamente relacionado con los emprendimientos mineros regionales. La inauguración de la escuela era un proyecto anhelado a nivel comunitario, ya que permitiría no solo la continuidad de la formación, sino fundamentalmente contener a la población juvenil en la zona. Antes de su concreción, se institucionalizó un secundario virtual a distancia, como primera iniciativa de contención. Esto fue posible con la instalación de internet en la zona, a través de la intervención de la empresa Sales de Jujuy.

Luego la Comunidad Aborigen de Olaroz alcanzó un acuerdo educativo estratégico para su proyecto territorial: la comunidad se encargó de la construcción del edificio escolar con los aportes de las empresas, y el gobierno de Jujuy proporcionó los cargos docentes.

Este acuerdo pone sobre relieve dos situaciones: por un lado, el sistema de donación por parte de las empresas a las Comunidades Aborígenes. Respecto de la escuela, Sales de Jujuy señaló que fue construida con un “acompañamiento muy importante”⁴ por parte de la empresa, mientras que, en el acto de inauguración, el gobernador Gerardo Morales señaló que la escuela “fue construida por la comunidad con esfuerzo propio”⁵. Entre una y otra declaración, el sistema de donación de las empresas es un tópico sensible a nivel local y por tanto esquivado durante las entrevistas de campo: cuánto y con qué regularidad las Comunidades Aborígenes reciben tales fondos no se explicita bien, ni tampoco es claro el carácter formal y su correlación con los derechos territoriales descritos en la sección “Entre polígonos...”. Lo que sí se señala en las entrevistas es que la gestión de esos fondos ha activado la reorganización de las comisiones de las Comunidades Aborígenes. Con estos fondos, y a nivel asambleario-comunitario, se ha definido la realización de obras de mejoramiento de la infraestructura de los salones de las Comunidades Aborígenes en Olaroz Chico, Puesto Sey, Huacar y otras localidades. En Olaroz Chico los fondos se utilizaron también para la construcción de la escuela técnica. Por otra parte, la creación de cargos docentes se realizó en situaciones institucionales particulares, a pesar de que no se cumplieron requisitos para la institucionalización

4 Borax Argentina S.A. (28 de diciembre de 2016). “Comunidades fuertes con herramientas para crecer”. En bit.ly/3w1JWo8.

5 *Todo Jujuy* (10 de septiembre de 2018). “Olaroz Chico cuenta con nueva técnica que promete salidas laborales”. En bit.ly/3MHUfDP.

de este nivel de acuerdo con la política educativa, tales como cantidad de población general, número de escuelas primarias en la zona, etc. No obstante esto, el gobierno provincial creó los cargos necesarios para responder a la priorización realizada a nivel local.

Imagen 8. Foto panorámica de Olarzos Chico, con destacado del edificio de la Escuela de Educación Técnica n.º 2



Fuente: *El Tribuno de Jujuy*.

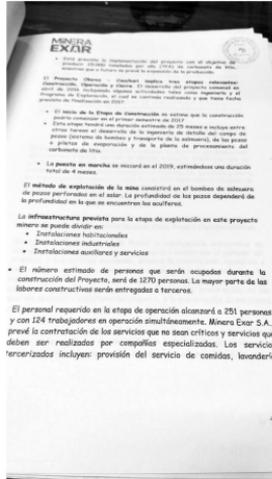
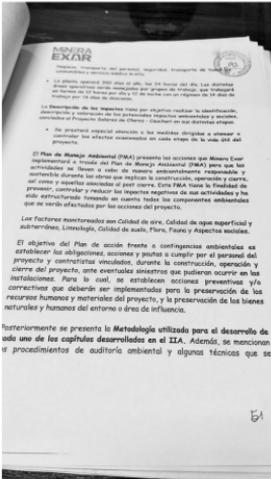
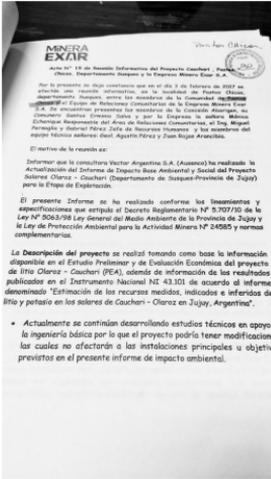
El director de la escuela relató los pasos iniciales de la escuela: el diseño de los contenidos programáticos estuvo guiado por los procesos químicos realizados en la lixiviación del litio en los salares de Susques, las empresas mineras se encargaron de la donación del equipamiento de los laboratorios y se esperaba que, a medida que avanzara la formación, las y los estudiantes pudieran realizar pasantías educativas en las empresas, proveyendo la mano de obra que estas requerían. En suma, el proyecto educativo institucional está asociado directamente a los emprendimientos litíferos en su despliegue territorial, que convergieron con la oportunidad de llevar adelante proyectos educativos

locales que generan mecanismos de retención de la emigración de las y los jóvenes.

La misma orientación definió la inauguración de la Tecnicatura Superior Química Minera Sustentable, que funciona desde el 2017 en el Instituto de Educación Superior (IES) n.º 3. La formación profesional se engarza con el proyecto territorial productivo-minero en curso, y retoma la historia de la minería en la región y cómo esta se inscribe en las dinámicas familiares, ya que las y los pobladores de Susques conformaron históricamente la mano de obra que se empleaba en las minas puneñas (Delgado y Göbel, 2003).

En su aspecto más formal, las acciones de las áreas de relaciones comunitarias de las empresas se enmarcan en los procedimientos de consulta requeridos para cada emprendimiento minero. El Decreto Provincial n.º 5.772 establece como requerimiento de pedimento minero la consulta previa e informada, por notificación formal, al titular del dominio. Esta tarea de consulta es llevada a cabo por las áreas de relaciones comunitarias de Sales de Jujuy y Exar y consiste, básicamente, en la realización de reuniones comunitarias por localidad, en las que agentes de las empresas informan sobre el proyecto minero en su conjunto, y atienden las inquietudes surgidas del proceso de consulta. Si tenemos en cuenta que el requerimiento se aplica para cada uno de los IIA de las tres etapas del emprendimiento minero, la cantidad de reuniones informativas y de consulta por localidades es considerable.

Imágenes 9, 10, 11 y 12. Acta de reunión informativa en la localidad de Pastos Chicos. Esta y las demás actas componen el expediente de la Resolución n.º 008/2017



Fuente: registro fotográfico propio tomado en la biblioteca de la Secretaría de Minería de la provincia.

El conjunto de actas que componen los expedientes consultados dan cuenta de las reuniones mantenidas a lo largo del tiempo. Las consultas fueron ejecutadas por las empresas en el marco del Decreto Provincial n.º 5.772 y fueron avaladas por referentes de las Comunidades Aborígenes que integran la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), órgano intersectorial que asesora a la autoridad de aplicación minera respecto de cada emprendimiento. La trama de este procedimiento de entablar diálogos y acuerdos tiene antecedentes que preceden a la consulta de la tecnocracia corporativa de las áreas de relaciones comunitarias, y estas son la forma asamblearia misma a través de la cual las Comunidades Aborígenes se organizan y son reconocidas estatalmente.

La organización de los polígonos y las jurisdicciones desglosada en el apartado “Entre polígonos...” es posible en función de esta organización de base: la asamblea de la comunidad. Esta discute y define a nivel comunitario cada acción que se realice en la zona, desde la consideración sobre los IIA hasta el proyecto del INAI. Entonces, al trazar una conexión entre las experiencias asamblearias aborígenes locales y los procedimientos de consulta informada ejecutados por las empresas, lo que se subraya es la genealogía de esas zonas de contacto entre locales, organismos nacionales, el Estado y las empresas, en una intrincada arquitectura de espacios de participación y consenso o disenso. La consulta informada y tecnocrática de las empresas no es un evento novedoso a nivel comunitario. Evoca la asamblea aborígen misma, esta vez con interlocutores poderosos además del Estado.

Este conjunto de acciones –la inauguración de la escuela, los trayectos de formación con perfil en química minera, la construcción de espacios de infraestructura escolar y comunitaria, las reuniones informativas– señala la existencia de vías de comunicación entre las comunidades, las empresas mineras desde sus áreas de relaciones comunitarias, y las instancias estatales. Un campo de interlocución

que se viene construyendo de forma situada desde hace varios años.

En conjunto, se puede debatir respecto a las y los actores de estas interlocuciones –con las desigualdades de recursos y de poder entre ellos–, de las grandes empresas transnacionales y de las comunidades locales, como también sobre el rol del Estado en todo el intercambio. En estos espacios, con actoras y actores con diferente poder, se negocian y definen los consensos (y también los disensos) acerca de los emprendimientos mineros.

Puna N1 ≠ Puna N2: proyectos territoriales y zonas de contacto

El paisaje puneño de Jujuy está cambiando con la minería de litio en la región, y, para estudiar los impactos que esta tiene y las alteraciones que produce, nos interrogamos por la forma en la que se piensan los cambios territoriales. Señalamos al respecto cómo el campo de discusión retoma la hipótesis del *aterrizaje*, la cual plantea el despliegue abrupto de los complejos y las infraestructuras de los emprendimientos litíferos con sus propias lógicas productivas. Esta hipótesis supone, como matriz epistemológica, la implantación de un proyecto territorial minero *sobre* una experiencia habitacional de carácter ancestral. Esquemáticamente, esto puede sintetizarse del siguiente modo: un espacio N2 que se superpone sobre un espacio N1 y, consecuentemente, una temporalidad N1 que se ve reorganizada por una temporalidad N2. Esta matriz tiempo-espacio N1 ≠ tiempo-espacio N2 se focaliza en el equipamiento fabril y en cómo se territorializa como una implantación sobre el paisaje cultural previo. Su foco es la novedad del emplazamiento y su impacto en la reestructuración de las lógicas y dinámicas locales. De este esquema se deduce que N1 es el espacio ancestral, originario, que N2 interrumpe.

Para matizar esta polarización, operó como vigilancia epistemológica de nuestro análisis el señalamiento de Rivera Cusicanqui, quien indica:

Al hablar de pueblos situados en el “origen” se niega la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de las lides de la modernidad. Se les otorga un status residual, y de hecho, se las convierte en minorías, encasilladas en estereotipos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza (Rivera Cusicanqui, 2010: 59).

A partir de este planteo, seguimos con atención un conjunto de procesos coetáneos y concomitantes que también constituyen el paisaje regional puneño en transición: las dinámicas de migración, la continuidad educativa y los proyectos escolares, el acceso a servicios como internet, la constitución de un mercado de trabajo local, el impacto del turismo, la incidencia del transporte comunitario entre localidades, la configuración de rutas y caminos, la tenencia de los territorios comunitarios, entre otros. Estas dimensiones forman una urdiembre que configura el paisaje territorial y trazan vasos comunicantes entre los polos del esquema Puna N1 ≠ Puna N2.

Por otra parte, en pos de estudiar los cambios en la región, nos resultó necesario también distinguir y precisar la particularidad de los escenarios en cuestión, las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari, como dos subregiones diferenciadas en sus dinámicas de movilidad, servicios y accesos, rutas y caminos, entre otras. Las primeras son más conocidas tanto por sus paisajes fotográficos turísticos (declarada una de las siete maravillas de la Argentina), como por su posición explícita en contra de la minería de litio (la acción colectiva de la Mesa de 33 Comunidades); el segundo escenario, en cambio, es más conocido por las plantas de los complejos sociotécnicos mineros. La zona alrededor de las Salinas evidencia mayor dinamismo y circulación, sobre todo por integrar el circuito turístico patrimonial y por su accesibilidad. Por el contrario, en el

interior del departamento Susques, la dinámica está dada, por un lado, por la migración y, por el otro, por los movimientos de circulación, exploración y extracción minera que se ejecutan desde hace más de una década.

Despejar la hipótesis del *aterrizaje* y el presupuesto de unidad territorial de la puna nos permitió indagar con más detalle la zona de Susques, que es la de más difícil acceso y también la parte en la que se emplazan los complejos fabriles de las plantas de procesamiento de litio. Esta zona se vio históricamente afectada por la migración a los nodos urbanos de la región y del sur de la provincia (el conglomerado Gran Jujuy), sea por estudio o por trabajo, proceso que Karasik (2005) denomina como el “drenaje de las tierras altas a las tierras bajas”. La generación de puestos de trabajo y de trayectos de formación educativa –nivel secundario y terciario–, como así también la disponibilidad de transporte comunitario, todo esto con patrocinio de las empresas, tienen una incidencia directa en la contención e inversión de la tendencia migratoria: el trabajo de campo realizado evidencia el retorno por trabajo y la retención por escolarización, además del mejoramiento general del equipamiento territorial (salones comunitarios, puestos de salud, escuelas, entre otros).

El conjunto de la situación denota, por un lado, que el patrocinio territorial de las empresas, a través de sus áreas de relaciones comunitarias, se asienta sobre un corrimiento de la función estatal: las empresas proveen conexión a internet, transporte comunitario, empleo y apoyo a la salud y la educación, financiamiento para el equipamiento edilicio comunitario y para eventos locales, etc. En suma, lo que antes las instituciones y organizaciones territoriales demandaban al Estado, ahora lo acuerdan con las empresas. Visto desde el ángulo de la vida cotidiana de las y los pobladores, estas iniciativas permiten responder a las numerosas necesidades insatisfechas, y las comunidades realizan sus proyectos territoriales: la escuela, la formación técnico-química, el transporte comunitario, etc.

La realización de proyectos comunitarios no supone la interlocución entre módulos monolíticos en diálogo: las comunidades + Comisión Municipal + las empresas. Los programas de relaciones comunitarias de las dos empresas que trabajan en la zona se superponen sin coordinación territorial alguna, como también sus zonas de intervención en casi los mismos poblados (Exar consigna como campo de intervención la zona sur del departamento, mientras que Sales de Jujuy consigna la zona sur y parte de la zona norte). Del otro lado, las comunidades no son tampoco módulos homogéneos: no solo hay intereses divergentes entre las Comunidades Aborígenes de la zona, sino también al interior de estas. Durante los últimos años, se han activado los intereses por ocupar los puestos directivos de las Comunidades Aborígenes –el rol de presidencia del Consejo Comunal– y, con ellos, la gestión de los fondos mineros. Estos últimos son un tema opaco a nivel local: si bien varias de las entrevistas indican que las comunidades reciben fondos mineros, la forma legal de éstos no es clara: si son regalías, donaciones o servidumbre de paso. Por último, cabe señalar el rol de la Comisión Municipal de Susques en toda la interlocución. Históricamente, la comisión trabajó en conjunto con las empresas mineras, en cuanto estas no solo generaban trabajo local, sino que también resolvían demandas específicas a nivel local (al respecto, un dato relevante es que el actual comisionado municipal, Santiago Mamani, integró el equipo técnico del área de relaciones comunitarias de Exar).

Al concentrarnos en la interacción entre diversos participantes en diálogo, se constata la complejidad de la situación. No es una polarización entre dos proyectos territoriales, sino más bien la cohabitación de varios, algunos en coincidencia y otros no. En esta línea, la conjunción de actuaciones en estos campos de interlocución implica reconocer también la diversidad de fuerzas: por su capacidad de administración de recursos, es claro que las empresas tienen mayores posibilidades de ejecución y resolución de

necesidades territoriales, pero esto no supone la cooptación inmediata de la población a través de atender a las necesidades y los proyectos comunitarios, que encuentran su viabilización a través de aquellos.

Finalmente, despejar la hipótesis Puna N1 ≠ Puna N2 también nos permite repensar los procesos de transculturación y considerarlos en sus gradientes: las lides de la modernidad –tal cual la cita de Rivera Cusicanqui– no arriban o se inauguran con el emplazamiento de las empresas, sino mucho antes: zonas de contacto producto de las migraciones y los movimientos por la región.

Por último, concentrarnos en los microcambios de la subregión de Susques permite complejizar la composición del escenario regional en su conjunto. Así, la acción colectiva de las comunidades alrededor de las Salinas Grandes y su preocupación por las fuentes de acceso al agua también están presentes en la zona de Olaroz y Cauchari. El relevamiento de los expedientes de las concesiones mineras muestra que las empresas mismas indican como riesgo ambiental el descenso de las capas freáticas de agua en la zona (lo explicitan en sus Informes de Impacto Ambiental), y las actas de las reuniones informativas contienen pasajes que denotan la preocupación comunitaria por el tema agua. Esta es una cuestión también presente en las entrevistas de campo, junto a otros temas como el trabajo, la educación, la conectividad o incluso el alcoholismo. Sin embargo, mientras que estos otros temas encuentran resonancias en las instancias de relaciones comunitarias de las empresas, la cuestión del agua se sostiene como una inquietud permanente y no resuelta a nivel comunitario: una preocupación expectante por los efectos a largo plazo de aquello mismo que se conquista a corto plazo. Esto es así porque es una cuestión medular de la explotación minera litífera, que pondría en peligro las maneras en que las empresas se han instalado y la tecnología que utilizan.

Bibliografía

- Anaya, James (2012). “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas.
- Argento, Melisa (2020). “Sentidos políticos y construcción de lo común en los territorios de resistencias a la minería del litio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc”. *Cartografías del Sur. Revista de Ciencias Artes y Tecnología*, vol. 12, pp. 105-134.
- CSJN (2011). C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponible en bit.ly/3gUK8g8.
- Echenique, Mónica (2012). “Interrelaciones de los distintos actores sociales que participan en los conflictos del sector minero en Jujuy”. En Bergesio, Liliana y Golovanevsky, Laura (eds.). *Industria y sociedad. El sector manufacturero en Jujuy y Argentina*. San Salvador de Jujuy: EdiUNJu.
- Decreto Reglamentario Provincial n.º 5.772/2010. Reglamentación de la Ley 5.063 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, 6 de mayo de 2010, Jujuy. Disponible en bit.ly/372FICA.
- Delgado, Fanny y Göbel, Bárbara (2003). “Departamento de Susques: la historia olvidada de la Puna de Ataca”. En Benedetti, Alejandro (comp.). *Puna de Atacama: sociedad, economía y frontera*. Córdoba: Alción, pp. 81-104.
- García Moritán, Matilde y Cruz, María Beatriz (2011). *Comunidades originarias y grupos étnicos de la Provincia de Jujuy*. Yerba Buena, Tucumán.
- Gil, Vladimir (2020). *Fighting for Andean Resources: Extractive Industries, Cultural Politics, and Environmental Struggles in Peru*. Arizona: University of Arizona Press.
- Göbel, Bárbara (2003). “La plata no aumenta, la hacienda sí: continuidades y cambios en la economía pastoril de

- Susques (Puna de Atacama)". En Benedetti, Alejandro (comp.). *Puna de Atacama: sociedad, economía y frontera*. Córdoba: Alción, pp. 199-242.
- Göbel, Bárbara (2014). "La minería de litio en Atacama: disputas sociales alrededor de un nuevo mineral estratégico". En Göbel, Bárbara y Ulloa, Alejandra (eds.). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia y Ibero-Amerikanisches Institut, pp. 167-196.
- Karasik, Gabriela (2005). *Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003*. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán.
- Pragier, Deborah (2019). "Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus territorios: contextos similares, respuestas distintas". *Polis*, vol. 18, n.º 52, pp. 76-91.
- Pratt, Mary Louis (2010). *Ojos imperiales. Literatura de viaje y transculturación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Puente, Florencia y Argento, Melisa (2015). "Conflictos territoriales y construcción identitaria en los salares del noroeste argentino". En Fornillo, Bruno (coord.). *Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina*. Buenos Aires: El Colectivo y CLACSO, pp. 123-155.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Santos, Milton (2000). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: Ariel.
- Schiaffini, Hernán (2013). "Litio, llamas y sal en la Puna argentina: Pueblos originarios y expropiación en torno al control territorial de Salinas Grandes". *Entramados y Perspectivas*, vol. 3, n.º 3, pp. 121-136.
- Thomas, Hernán y Buch, Alfonso (2008). *Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

- Tsing, Anna Lowenhaupt (2005). *Friction. An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.
- Zícari, Julián (2015). “El mercado del litio desde una perspectiva global: de la Argentina al mundo. Actores, lógicas y dinámicas”. En Fornillo, Bruno (coord.). *Geopolítica del litio: industria, ciencia y energía en Argentina*. Buenos Aires: El Colectivo y CLACSO, pp. 19-56.
- Zubia, Gonzalo Federico (2014). “Las trampas de la identidad bajo el designio del logos”. *Polis*, vol. 13, n.º 38, pp. 325-344.

Preparados, ferias y bolsones: agroecología, un horizonte de innovación en el sector hortícola del Gran La Plata

CANDELA VICTORIA DÍAZ Y DARÍO MARTÍNEZ

En el cinturón hortícola del Gran La Plata, la agroecología se presenta como un conjunto de prácticas que se mezclan con otras provenientes de la agricultura convencional y que las tensionan y antagonizan. Durante los últimos años, a partir del incremento de participación de productoxs¹ en organizaciones que lxs nuclean, la problemática agroecológica se instaló en los debates acerca de las modalidades productivas, en diálogo con un conjunto de normativas que reconocen y tienden a promover la agricultura familiar a nivel nacional. En 2019, mientras realizábamos trabajo de campo con migrantes bolivianxs que trabajan en quintas de producción de hortalizas en la zona oeste del Gran La Plata, este proceso incipiente nos motivó a interrogarnos sobre los procesos de innovación en la producción agrícola.

En la zona estudiada, a partir de 2016, las condiciones económicas y eventos climáticos adversos marcaron la preocupación de lxs productoxs por los costos y promovieron renovadas valoraciones de los vínculos que

¹ A lo largo del capítulo, utilizamos la X en la flexión nominal de género con el propósito de evitar cualquier modalidad de lenguaje sexista y agilizar su lectura.

mantenían con técnicxs y profesionales de distintos organismos públicos y del trabajo que realizaban. Luego, entre fines de 2018 y comienzos de 2019, el valor de lo producido apenas alcanzaba para sostener las condiciones de vida y el pago del alquiler de las quintas donde cultivaban, por lo que muchxs productorxs comenzaron a revisar su inserción en la horticultura y la posibilidad de continuar su tarea tal como la venían desarrollando. Por su parte, técnicxs y profesionales vinculadxs a la práctica hortícola realizaron diversas acciones que buscaban mantener la producción a pesar de estas dificultades.

Dentro de la perspectiva de análisis de las innovaciones (Thomas, 2008; Callon, 2008; Arce, 2013; Goulet y Vinck, 2013; Goulet, Aulagnier y Hubert, 2020), nuestra hipótesis, para el caso de la agroecología en la horticultura del oeste del Gran La Plata, es que, al mismo tiempo que hay añadidas, también se producen sustracciones, y que, por tanto, es preciso analizar ambos movimientos para profundizar la comprensión de estos desplazamientos en la búsqueda de nuevos o alternativos modelos hortícolas. En ese interjuego, no exento de tensiones, proponemos analizar este proceso de acuerdo con los contextos específicos de dicha práctica, en los que lxs productorxs se desplazan entre lo convencional y lo agroecológico según las coyunturas particulares, dando forma de manera singular a la horticultura que desarrollan. En esta dirección, el análisis permitirá caracterizar las sucesivas reconfiguraciones que producen nuevas asociaciones entre elementos del proceso de producción y de comercialización (Goulet y Vinck, 2013), atendiendo a las diversas agencias que participan en dicha innovación (Ingold, 2010).

Para el análisis propuesto, recurrimos a entrevistas y conversaciones informales con productorxs migrantes bolivianxs y técnicxs de algunas de las organizaciones presentes en el oeste del Gran La Plata que promueven la agroecología, así como personal de programas institucionales de promoción de la agricultura familiar y de nuevas tecnologías en

la producción hortícola en pequeña escala a nivel nacional. Comenzaremos con una breve caracterización del proceso que resultó en la visibilización e implementación de prácticas agroecológicas en el sector hortícola. Consideraremos también la incidencia de los factores climáticos y cambios en las condiciones económicas para el sector, como umbrales para realizar innovaciones en la producción y en la comercialización. Para ello, señalaremos en qué consiste la diferencia entre la agricultura convencional y la agroecológica. Por último, presentaremos algunas reflexiones sobre la implementación de prácticas agroecológicas en las quintas del sector hortícola, las sustituciones que efectúan y los aportes que realizan, donde la agroecología lleva a la visibilización de la producción hortícola y a la promoción de estrategias de comercialización directa.

Un contexto de revisión de los modos de producción hortícola

La implementación de prácticas agroecológicas en el cordón hortícola en la zona oeste de La Plata se intensificó en los últimos años. Lxs productorxs, trabajadorxs migrantes bolivianxs que, desde mediados de los años 90, han cobrado relevancia como actorxs centrales de las cadenas de producción hortícola en Argentina, y particularmente en el área de producción bonaerense (Benencia, 1997; Benencia y Quaranta, 2005; Benencia, 2006 y 2012), refirieron que el tipo de trabajo que habitualmente realizaban en la producción se vio modificado desde 2016, pasando de ser convencional a ser agroecológico. Sin embargo, su promoción en esta dirección por parte de técnicxs del INTA y profesionales universitarixs databa de más de una década atrás. ¿Por qué dichas transformaciones coinciden en desarrollarse a partir de 2016? ¿Cuáles fueron los elementos que materializaron este proceso?

Las tormentas de los veranos de los años 2016 y 2017 arrasaron invernáculos, viviendas, maquinaria y automóviles. También dejaron sin servicio de luz a las quintas –lo que permitía la provisión de agua para consumo humano y riego– y provocaron pérdidas de la producción y de los invernaderos que, en algunos casos, fueron totales. Las zonas de las quintas de Melchor Romero, Olmos, Abasto, Etcheverry y El Peligro sufrieron daños en la mayor parte de la producción cubierta (bajo invernaderos) y las hortalizas a campo. A ello se sumaba que el mal estado de las calles no asfaltadas anegadas dificultó el ingreso de los camiones a las quintas para la compra de verduras que luego comercializarían en el mercado regional o central. Esta situación restringió las habituales condiciones de comercialización e impidió a lxs productorxs recuperar lo invertido para continuar con el mismo volumen de producción.

Para el año 2018, la modalidad de producción habitual en el cordón resultó cada vez más difícil, y otras tormentas afectaron fuertemente las quintas, lo que redundó en una nueva pérdida de producción. Otros aspectos condicionaron aún más la realidad de lxs productorxs. Por un lado, la posibilidad de producir se vio afectada por el elevado incremento del costo del alquiler de las quintas y de las tarifas de los servicios de luz y agua, gastos que implicaban valores mayores al dinero obtenido en las ventas “a culata de camión”². Además, la situación económica de las familias productoras se hallaba comprometida por deudas con los comercios de agroquímicos y por la imposibilidad de comprar materiales para el rearmado de invernaderos (rollos de nailon, maderas, cintas de plástico) destruidos por los temporales de los veranos de los años 2016 y 2017, cuyos

² La venta “a culata de camión” refiere a una modalidad de comercialización que lxs productorxs desarrollan en sus quintas con camioneros que realizan compras mayoristas de cajones de verduras para luego comercializarlos en el mercado regional o central. Estos, intermediarios de la cadena de comercialización, ingresan al circuito de la horticultura al ofrecer el transporte de verdura a mercados centralizadores.

precios se habían disparado. Si el trabajo en las quintas del cinturón hortícola platense era intensivo en condiciones normales, en una situación económica adversa se potenciaron exponencialmente la cantidad de horas y de dinero que implicaba el trabajo de lxs productorxs, y ello restringió aún más la posibilidad de permanencia de las familias productoras en el sector. Así expresó esta situación uno de lxs productorxs del cordón:

Y ahora ya estoy cansado de trabajar de esto [...]. La cosa es: nosotros compramos los insumos en dólares y vendemos en pesos. Si no, tiramos. Hoy en día... tengo un invernáculo allá que no lo puedo techar. Antes yo los techaba, ponía bajo techo, viste... Y sale un montón de guita. Todo lo que usted sepa que es de la quinta... todo en dólares. Usted va a la agroquímica y enseguida está pa pa pa, cuánto está el dólar, y te cobran. Así que no se puede trabajar más. Muchos están dejando, no hay gente para trabajar, no quieren trabajar, y estamos por cerrar todo. Yo lamentablemente ya no quiero saber más nada de la quinta. Yo hago números... Porque yo hago números, eh, no me da para trabajar, para producir. Y aparte vienen los impuestos caros, yo pago alquiler, pago luz (productor hortícola, Abasto, Cooperativa Nueva Esperanza y Asociación 15 de Abril. Entrevistado en septiembre de 2019).

Mientras algunxs productorxs se vieron expulsadxs de la producción, otrxs realizaron cortes de calle³ para visibilizar las adversas condiciones de trabajo en las que se encontraban y reclamar respuestas que posibilitaran sostenerse en la producción de verduras. Estas inquietudes comenzaron a ser parte de un horizonte común entre ellxs, como también entre técnicxs y profesionales vinculadxs al desarrollo

3 Entre fines de 2018 y principios de 2019, se realizaron cortes en los cruces entre la ruta 2 y la ruta 36, y en la rotonda de 197 y 44, intersecciones de calles que son de circulación central para camiones en el traslado de alimentos, entre otros productos, y que resultan accesos de comunicación con los mercados frutihortícolas de La Plata, Florencio Varela y Buenos Aires.

agrícola y la promoción de la agroecología en la agricultura familiar, preocupadxs por una merma o un deterioro de la producción en la zona oeste del Gran La Plata.

El área hortícola del Gran La Plata concentra un tercio de la producción hortícola provincial y la mayor parte de las hortalizas que se comercializan en el Mercado Central de Buenos Aires, principal centro de consumo del país (García, 2012). La Plata, junto con Florencio Varela y Berazategui, integra el cordón sur del periurbano productivo hortícola y florícola del Área Metropolitana de Buenos Aires. A la vez, conforma “la estructura agraria más antigua del Área Hortícola Bonaerense (AHB)”, que “abastece entre el 60 y el 90% de la demanda de hortalizas del interior de la provincia de Buenos Aires” y otras provincias, mientras que el resto se produce en regiones especializadas (Fingermann, 2018). De ahí el interés de lxs diferentes actorxs en la promoción de prácticas que permitieran sostener la producción hortícola.

Según los relevamientos del INTA en el marco del Programa Cambio Rural II (Cieza *et al.*, 2015), en el año 2014 había cerca de cuatro mil productorxs hortícolas. No existen datos actualizados, ni se cuenta con datos oficiales actuales sobre la cantidad de productorxs que en los últimos años desarrollaron prácticas agroecológicas. Aunque se trata de una minoría, estas experiencias se encuentran presentes en varias organizaciones locales –la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rama rural, entre otras– que incorporaron la comercialización de bolsones de verduras producidas con reducción o sin el uso de agroquímicos en ferias de venta directa⁴.

4 El bolsón de verduras se arma a partir de un conjunto variado de hortalizas de estación. Este nombre surge de las bolsas de nailon donde se reúnen entre 5 y 7 kg de verduras para transportarlas y venderlas. Por su parte, las ferias de venta directa son espacios de comercialización que gestionan las propias organizaciones de productores, junto a la universidad local o las dependencias estatales. Su propósito consiste en desarrollar un canal directo entre productorxs y consumidorxs en el que lxs productorxs llevan

Las organizaciones de productoxs hortícolas existen desde mediados de los años '80 en el cinturón hortícola platense. Entre los años 2010 y 2015 el proceso de organización se incrementó, tanto en la cantidad de participantes y organizaciones como en el volumen de sus demandas (Seibane y Ferraris, 2017). En este proceso de expansión paulatina de la participación de productoxs en estas organizaciones, registramos una mayor intensidad a partir de 2016. En 2018, varios de estos grupos encontraron en los espacios de movilización y reclamo un escenario para compartir junto a otrxs productoxs una modalidad de producción alternativa a la desarrollada habitualmente:

Después en cada movilización que hacíamos empezábamos a fomentar, porque mucha [gente] había empezado a tomar un poco más de conocimiento de esto, de la agroecología, te preguntaban: “¿Esto es verdura agroecológica?” (productor hortícola, Abasto, MTE Rural. Entrevistado en abril de 2019).

Al mismo tiempo, a partir de los vínculos entre agentes oficiales del área de la agricultura familiar –particularmente técnicxs que habían participado del Programa Cambio Rural del INTA– y las organizaciones de productoxs de la zona, se llevó adelante la promoción de prácticas agroecológicas. Por medio de reuniones, visitas a las quintas y trabajo conjunto en parcelas de tierra y talleres de formación sobre la actividad biológica del suelo –a partir de recursos naturales no tóxicos–, en los que se proporcionaba el acceso a semillas y fertilizantes naturales de bajo costo, se desarrollaron e incorporaron técnicas e insumos vinculados a una modalidad agroecológica de producción hortícola. Por ejemplo, el uso de fertilizantes e insecticidas naturales (realizados a partir de plantas, bosta y otros elementos de bajo costo, como alcohol o vinagre), que hacía

sus hortalizas a los puestos donde lxs consumidorxs realizan sus compras de alimentos. Las ferias tienen un carácter itinerante, según los días de la semana, por distintos puntos de la ciudad.

algún tiempo algunxs técnicxs de organizaciones, del INTA o de la UNLP compartían en las quintas, se implementó como una primera estrategia para desarrollar la producción con un menor costo de inversión. También la distribución en algunos casos de semillas criollas (no modificadas genéticamente) o recetas para extraer semillas de lo ya plantado que acercaron lxs técnicxs del INTA generó la posibilidad de sostener la producción hortícola para lxs productorxs migrantes bolivianxs insertxs, entre otras, en el MTE rama rural y en la UTT, dos de las organizaciones de mayor relevancia numérica en la zona.

Si bien estas iniciativas se venían desarrollando con anterioridad, los cambios de orientación política a nivel nacional en 2015, que desestimularon o invisibilizaron este tipo de producción, y los factores económicos y climáticos que venían afectándola limitaron la producción en la modalidad convencional. Este escenario despertó el interés por una modalidad alternativa de producción, como estrategia para afrontar las dificultades en las condiciones de vida y trabajo que supone el mercado de la producción y venta de hortalizas.

La integración a espacios colectivos de organización frente a la crítica situación posibilitó la visibilización de este sector productivo y sus demandas por medio de cortes de ruta en la zona, de reclamos en las oficinas de coordinación provincial para la producción de hortalizas y de la vinculación con actorxs universitarixs y funcionarixs de organismos públicos dedicadxs a la promoción de “buenas prácticas productivas” en el marco de la agricultura familiar⁵. Los talleres y las reuniones compartidos entre productorxs y técnicxs generaron la oportunidad de conversar y de probar en las quintas prácticas alternativas a las

⁵ Esta denominación refiere a una línea de trabajo impulsada con el Programa Cambio Rural para la implementación de buenas prácticas agrícolas. Luego, la Res. 5/2018 (bit.ly/Res-5-18) estableció pautas para su certificación en la producción de verduras, la cual entró en vigencia a principios del año 2021.

que se venían implementando. Entre talleres junto a técnicxs, movilizaciones de organizaciones y experimentación en las quintas de lxs productorxs, se fue compartiendo una modalidad de producir que ahora comprendía prácticas y verduras agroecológicas. En este proceso, entre los años 2016 y 2019, fueron convergiendo redes de trabajo que buscaron generar alternativas a la difícil situación de las familias productoras y colaboraron en la promoción de este modo de producción.

Una modalidad alternativa de producción entre agroquímicos y preparados

La modalidad habitual de producción, denominada por productorxs y técnicxs como “convencional”, es aquella que se realiza de manera intensiva en pequeñas parcelas de tierra e incorpora el uso de fertilizantes y productos químicos para el control de insectos y plagas. Esta práctica se caracteriza por una dependencia creciente de agroquímicos de alto costo, particularmente por sus precios dolarizados. Su uso implica una degradación de las propiedades naturales de la tierra y de su fertilidad, con la consecuente necesidad de ser suplantadas con la utilización de nuevos químicos para la continuidad de la producción.

Ante la crítica situación que atravesaban lxs productorxs, los intercambios con técnicxs posibilitaron el acercamiento a la producción agroecológica (Marasas, 2012; Sarandón y Flores, 2014) a partir de insumos naturales, que no requieren la inversión de importantes cantidades de dinero en químicos. Algunx de lxs productorxs cedía durante algunos meses algún surco a un técnicx para así mostrar en la práctica cómo este tipo de producción podría generar equivalentes resultados (hortalizas para comercializar), pero con un menor costo de producción. Estas experiencias eran compartidas entre productorxs y técnicxs en talleres y

actividades de control y seguimiento en las quintas, donde se intercambiaban muestras de producción agroecológica.

Asimismo, en los talleres se realizaban en forma conjunta recetas de fertilizantes e insecticidas a partir de plantas o excremento de animales⁶, al tiempo que se conversaba sobre las propiedades de cada uno de los elementos y su incidencia en la actividad biológica del suelo. En dichos intercambios, la elaboración de “preparados” para la fertilización de la tierra o la fumigación de las hortalizas, la práctica de su uso en algunas de las quintas, la toma de fotos para compartir sus resultados en talleres o con otrxs productorxs por medio de WhatsApp o en reuniones de la organización y los diagnósticos construidos entre técnicxs y productorxs sobre plagas que afectan a las hortalizas y los modos de combatirlas o tratarlas promovieron la circulación de recursos (semillas, plantines), saberes (recetas, estrategias, propiedades de las plantas y el suelo) y valoraciones (económicas, medioambientales) acerca de la implementación de prácticas agroecológicas en la producción hortícola. También permitieron compartir entre técnicxs y productorxs conocimientos sobre el trabajo agrícola.

En esta dirección, los talleres movilizaron saberes en torno a la actividad biológica del suelo, permitiendo revisar los insumos necesarios para contribuir a la fertilización de la tierra para la siembra y al crecimiento de la planta. Estas experiencias eran destacadas por lxs productorxs como un ejercicio distinto a aquel que caracterizaba los encuentros con los ingenieros de los comercios de agroquímicos (“las semilleras”), cuya forma de relacionarse con lxs productorxs consistía en la aplicación directa de agroquímicos en las hortalizas o en dar indicaciones sobre cómo aplicarlos cuando iban a comprarlos a los locales comerciales, sin

6 Dichos fertilizantes o insecticidas son productos elaborados por productorxs o técnicxs, cuyas recetas comprenden el uso de plantas, desechos de animales, elementos de bajo costo como agua, alcohol, vinagre, etc. Son denominados “bioinsumos” o “(bio)preparados”.

conversaciones sobre las características del suelo o los componentes de la sustancia por aplicar en la tierra. Por el contrario, el experto que atendía indicaba qué, cuánto y cómo se debía aplicar en función del problema que lxs productorxs formulaban en el mostrador del comercio. Mientras que lxs técnicxs de organismos públicos, en vinculación con algunas de las organizaciones del cordón, buscaron promover soluciones dentro del abanico de políticas públicas tendientes a sostener o fortalecer la agricultura familiar y sus actorxs, y planificaron encuentros que comprendieran conversaciones y experimentaciones para compartir ideas acerca de lo que ocurría en las plantas, en los surcos y en las quintas y dialogar sobre técnicas, estrategias, insumos, modos de trabajar la tierra y comercializar la producción en vinculación con una modalidad de tipo agroecológica.

Este proceso conllevó redefiniciones en los modos de nombrar algunos de los elementos que componen su producción. Hubo un desplazamiento de los criterios para evaluar y resolver las afecciones del suelo y las hortalizas que llevó a revisar la consideración de los químicos como “remedios” para luego ser observados como “venenos”. Donde antes lxs productorxs evaluaban que la planta se enfermaba y necesitaba un remedio para curarla, ahora se diagnosticaba el estado de la tierra y de la planta en función de sus propiedades biológicas y se buscaba promover su cuidado, un cuidado de estas cualidades que atendiera a preservar los nutrientes que están en la tierra y en las hortalizas.

Los debates sobre las características del suelo que intervinieron en los encuentros y talleres, así como la experimentación junto a técnicxs, pusieron de relieve la cuestión del cuidado productivo de la tierra como una instancia a ser considerada junto a la protección de los alimentos que comercializar y la de la familia que trabaja en la quinta.

A partir de ello, la búsqueda de una modalidad de producción alternativa generó que los llamados “remedios” pasaran a ser los preparados confeccionados a partir de

plantas, insumos o desechos naturales, vistos como productos que permiten “cuidar de las plantas para que no se enfermen”, pero también resguardar la salud de las familias productoras de las quintas, ya que algunos de sus miembros sufren de afecciones respiratorias que causa el uso de químicos, y también la salud de los consumidores (productores hortícolas, Poblet y Olmos, UTT y MTE rural. Entrevistados en octubre y noviembre de 2018). Este cambio orientó una producción de hortalizas que no utilizara agroquímicos, o que los empleara de manera reducida, ya que la renovación de la tierra de los efectos de desmineralización producidos por su uso llevaría muchos años. En este sentido, los insumos químicos que se aplicaban bajo la lógica de la agricultura convencional y eran comprados en las semilleras (agroquímicas) comenzaron a ser denominados “venenos”.

Así se visualizaba que la intensificación de la producción que permitía mantener la oferta de hortalizas más allá de su carácter estacional requería de la utilización de insumos químicos que le quitaban nutrientes al suelo, lo que provocaba a futuro una merma en las cosechas. Como señala uno de los productores, esa constante aplicación generó una pérdida de fertilidad de la tierra, que solo podía sostenerse mediante una aplicación reiterada de agroquímicos:

El bromuro te dura un año, un año para plantaciones de tomate y morrón. Podés hacer dos plantaciones en ese tramo, en la temporada que se dice que son seis meses. Pero después, si de vuelta querés poner tomate, tenés que otra vez tomar. O sea, el suelo no te hace nada, directamente vive drogado el suelo, con pichicata, con pichicata, con pichicata, y donde lo hiciste faltar, tenés suelo muerto (productor hortícola, Abasto, MTE Rural. Entrevistado en abril de 2019).

Ello también trajo consigo la revisión acerca del esfuerzo y el tiempo invertido en el trabajo realizado, y por tanto de las tareas en las quintas. Los productores comenzaron a destinar algunos surcos para la producción agroecológica,

mientras continuaban con la producción convencional en el resto de la quinta. Ambos modos de producir comenzaron a convivir en una misma superficie de tierra donde lxs productorxs mantenían estrategias diferenciadas y combinadas o superpuestas.

En suma, se trató de un modo de hacer frente a las dificultades que implicaba el trabajo en horticultura desde 2016, ya que la producción realizada a partir de insumos naturales reducía costos y ofrecía la posibilidad de ir gradualmente endeudándose menos o de desendeudarse de los gastos efectuados en las agroquímicas, eludiendo a estxs actorxs de la cadena de producción. Como ya se dijo, su implementación también implicó una valoración del cuidado de lxs trabajadorxs y de lxs consumidorxs de las hortalizas producidas.

Esta valoración posibilitaba considerar a más largo plazo esta modalidad alternativa de producción, dado que también permitió orientar la atención al cuidado realizado como un agregado de valor a la hora de comercializar alimentos. Lxs productorxs identificaron que implementar prácticas agroecológicas suponía un mayor trabajo, en especial en aquellas cuestiones relacionadas con el seguimiento de la planta y el control de plagas para preservar los cultivos: la producción convencional implicaba menos demanda de mano de obra porque el agroquímico se aplicaba solo una vez y luego se cosechaban las hortalizas, pero requería de una mayor inversión monetaria, mientras que “la agroecología es más esfuerzo [mayor cantidad de horas de trabajo y tareas], pero menos dinero [para invertir]” (productor hortícola, Abasto, MTE Rural. Entrevistado en noviembre de 2018).

Estas diferentes valoraciones asociadas a cuidados económicos y medioambientales se pusieron en circulación a partir de un cambio en las condiciones estructurales para el sector y habilitaron espacios de interlocución entre productorxs y técnicxs en torno de un modo de producción alternativa. Ello movilizó un reenfoque respecto del uso

de agroquímicos y la modalidad convencional, favoreciendo el desplazamiento hacia un tipo de práctica que otorga visibilidad a elementos hasta ese momento inadvertidos o invisibles: las propiedades de los suelos y las plantas pasan de ser soportes a ser considerados el punto de partida en el proceso de producción. En este movimiento, mientras que se produjo una reducción o sustracción del uso de agroquímicos, los bioinsumos se añadieron a la producción de hortalizas. Al mismo tiempo, el trabajo hortícola a partir del uso de estos últimos promovió un rol más activo de lxs productoxs en detrimento de lxs técnicxs de las agroquímicas y sus productos. Lxs productoxs pasaron de ejecutorxs (encargadx de aplicar químicos) a responsables del proceso de producción (administrar, improvisar, desarrollar habilidades para una cosecha productiva, diagnosticar las características de la tierra y hortalizas, elaborar y utilizar preparados para cada caso). Ahora bien, los movimientos de las prácticas de la horticultura en una dirección alternativa no se dieron solo en el nivel de la producción, sino también en el de la comercialización.

Una modalidad alternativa de comercialización entre intermediarixs, ferias y bolsones

La experiencia de una producción de hortalizas que incorpora una modalidad de trabajo alternativa generó también movimientos en el nivel de la comercialización. No se trató exclusivamente de un modo de trabajo con la tierra a partir de la reducción o sustracción de químicos y el uso de preparados en su lugar, sino que las valoraciones asociadas a la producción hortícola se combinó con la propuesta de eludir a algunxs de lxs actorxs en la cadena de comercialización (como sucede en la venta a culata de camión), disputando las valoraciones sobre el aspecto y el precio instaladas por la supermercadización de los años 90 a partir de la

intensificación de la producción bajo la modalidad convencional (García, 2012). Esta última descansaba en un tamaño homogéneo y un color brillante de las hortalizas.

La producción alternativa cambió las valoraciones pre-existentes con respecto a la apariencia de las hortalizas por su tamaño, color y sabor, y movilizó a nuevxs actorxs implicadx en la venta de verduras, así como espacios y elementos no contemplados previamente. La verdura que se cosechaba a partir de la implementación de prácticas agroecológicas es “más chiquita y manchadita”, pero “tiene sabor y es más sana”, mientras que, en la producción convencional, “es más grande, presenta mejor color, brilla, pero no tiene gusto” (productorxs hortícolas, Olmos y Abasto, MTE rural. Entrevistadx en diciembre de 2018, marzo y abril de 2019)⁷. Estas observaciones que lxs productorxs fueron construyendo junto a técnicxs y profesionales en talleres y reuniones abrieron una nueva consideración respecto del producto del trabajo realizado, ya que, si bien este implicaba un mayor esfuerzo, se consideraba que las hortalizas que se producían eran más sanas. Las valoraciones relacionadas con el sabor, la alimentación saludable y el cuidado del suelo se agregaron como aspectos a considerar por lxs productorxs para el precio de venta de las hortalizas producidas.

Dichas cualidades, que se incorporaron a la producción hortícola por la implementación de una modalidad alternativa, traen observaciones de lxs productorxs respecto de su capacidad de establecer el precio de las verduras al momento de comercializarla. Esto implicó una revisión del habitual canal de comercialización, lxs intermediarixs.

Ante el difícil contexto que atravesaban lxs productorxs, esta valoración de la producción de un alimento sano que se fue construyendo entre talleres y procesos de seguimiento de la producción y de las cualidades de la tierra

⁷ Una mayor profundización del tema está en el capítulo “Hortalizas, cuerpos y trabajo. La agroecología como discusión de las relaciones sociales de producción”, de Sergio Caggiano.

en las quintas de lxs productorxs, junto a técnicxs y profesionales, comenzó a ser compartida y discutida también en las reuniones de las organizaciones al evaluar estrategias alternativas de comercialización que permitieran recuperar ingresos. Ya no se trataba solo de ingresos que respondieran monetariamente a lo invertido para volver a iniciar el proceso de producción, sino que ahora también se consideraba el esfuerzo físico y de tiempo que la aplicación de esta modalidad alternativa conllevaba, así como el tiempo invertido en los saberes específicos en torno a las propiedades del suelo y de las plantas, y la elaboración de preparados que posibilitaba la producción de verduras menos atractivas en cuanto al aspecto, aunque más sanas.

A diferencia de la modalidad de producción convencional, en la que el canal central de comercialización son lxs intermediarixs, la alternativa abría caminos distintos de los recorridos, también en la comercialización. En la convencional, el precio es estipulado por lxs intermediarixs, dueñxs de camiones que compran cajones de verduras en las quintas de la zona para luego revender en el mercado central o regional. Entre las razones, una de las productoras señalaba: “Viene alguien y te pone el precio, te dice ‘Bueno, te pago tanto’” (productora hortícola y referente territorial, Poblet, UTT. Entrevistada en marzo de 2019). Y, si no accedían, podían ir a otra quinta a comprar lo que querían con el precio que buscaban. Ante una eventual pérdida de dinero, o si la verdura se pudría y tenía que ser desechada, lxs productorxs se veían condicionadxs a aceptar los precios ofrecidos en la venta a culata de camión por lxs intermediarixs. A su vez, en los casos en los que en las quintas se comenzó a probar una producción con preparados y menos químicos, el aspecto de la hortaliza solía volverse otro elemento por el cual los camioneros evaluaban su compra en un precio menor del habitual. Ello planteó nuevas valoraciones respecto de la comercialización y movilizó a buscar una alternativa que, al mismo tiempo que redujera los costos de producción, también permitiera garantizar la

venta de lo producido a un precio que pudiera ser decidido por lxs productorxs. En esa búsqueda comenzaron a diseñar canales de comercialización como las ferias de venta directa (de productorxs a consumidorxs) y los bolsones de verdura con la participación de otrxs actorxs como técnicxs y profesionales en la coordinación del transporte y el lugar para la distribución espacial de los puestos de las ferias.

Si bien las ferias de venta directa eran un canal de comercialización preexistente donde lxs productorxs llevaban las hortalizas para que lxs consumidorxs las compraran, no eran el destino prioritario de las hortalizas de lxs productorxs. En las nuevas condiciones, las ferias comenzaron a constituir una modalidad de comercialización alternativa, que se gestionaba entre productorxs, organizaciones y técnicxs, y se proponía como una estrategia de respuesta frente a los bajos precios de las verduras que se les imponía a lxs productorxs en la cadena habitual de venta.

Otro canal alternativo consiste en el armado de un bolsón que contiene un conjunto variado de hortalizas de estación. A diferencia de la modalidad habitual, en la que cada productorx o familia evaluaba qué tipo de hortalizas y cuánto producir de cada una de ellas en su quinta, el armado de bolsones por organización requirió la coordinación entre productorxs para la siembra y cosecha de distintas variedades de hortalizas de estación, de manera de poder conformar un bolsón variado con la participación del conjunto de productorxs que integran cada organización. Las valoraciones respecto de las cualidades del suelo y de las plantas que la modalidad alternativa de producción había movilizado entre lxs productorxs permitieron que se repartieran cuotas de variedades de hortalizas, relacionadas con las características de la tierra y las experiencias de lxs productorxs para la producción de determinadas hortalizas o la coordinación de su cantidad (cuando más de unx producía una misma variedad de verdura), evitando la competencia entre productorxs al vender la misma verdura. El armado de los bolsones de verduras, que en un inicio fueron

llevados a las ferias de venta directa y luego se comenzaron a distribuir en domicilios particulares, ofreció una estrategia de comercialización que incorporó la organización colectiva de lxs productorxs para aportar lo cosechado y garantizar su venta.

La gestión de las ferias y los bolsones otorgó nuevas tareas a lxs productorxs, quienes, junto a técnicxs de las organizaciones, coordinaron tareas para economizar esfuerzos y garantizar la comercialización. Así describió una productora cómo se gestionó este proceso:

Se empezó como a conseguir ferias y [...] hacíamos bolsones con las variedades que hacíamos. Después ya como que fue creciendo, ahora tienen mercaditos [las organizaciones]. Tienen todo un sistema que la verdura que vos plantás, ya está vendida directamente. Llegamos a ese nivel de organización que todos los que hacen agroecología saben qué tienen que plantar. Se planea en reuniones qué variedades planta cada uno o se dan cupos de producción. Por ejemplo, si a vos te gustan, por decir, los tomates, entonces, toda la temporada que vos hagas tomate, la comercializadora de la organización te saca todo. No se pierde nada, no se tira verdura como en la convencional. Y te paga un precio fijo, que nosotros decimos cuánto es. Entonces, ahí económicamente como que nos levantó un montón (productora hortícola, Poblet, UTT. Entrevistada en marzo de 2019).

El aspecto económico es uno de los elementos presentes en esta modalidad alternativa de producción y comercialización. El desplazamiento de lxs intermediarixs dio lugar a la visibilización de las ferias de venta directa y los bolsones como alternativa que provee de mejores condiciones a lxs productorxs para la comercialización. Se trata de una estrategia que posibilitó sostener la horticultura y hacer frente a la crítica situación vivida por lxs productorxs, en combinación con una menor pero persistente venta a culata de camión.

Estas iniciativas dieron espacio al surgimiento de un nuevo rol de lxs productoxs, que además deben participar en varios otros roles: el de referentxs técnicxs encargadx del seguimiento de la producción en diferentes quintas de la organización, de recomendar el uso de preparados para el rendimiento de lo plantado, distribuir las cuotas de producción, armar bolsones y organizar las ferias. Todo esto incluye debates para consensuar el precio por el que las verduras serán comercializadas.

En este camino alternativo, lxs productoxs transitaron de un papel de soporte de la producción a un rol más activo también en el nivel de la comercialización. Desplazar al intermediario como eslabón central de la cadena de comercialización implicó esfuerzos de coordinación para alcanzar grados de convergencia. Fijar el precio, marcar cupos de siembra y colocar la totalidad de la verdura producida son acciones que caracterizaron un nuevo rol por parte de lxs productoxs respecto de la modalidad convencional.

Reflexiones finales

A partir de nuestro trabajo de campo, observamos que factores económicos y climáticos se articularon en un contexto de revisión de los modos de producción convencional y orientaron la producción de hortalizas en un camino alternativo. La afeción de abundantes lluvias que inundaron las quintas y fuertes vientos que derribaron, volaron o rompieron postes y náilonos de los invernaderos, sumada a los altos costos dolarizados de los materiales para la producción, entre ellos insumos químicos, son materialidades que cooperaron en el despliegue de un conjunto de acciones de productoxs y técnicxs que movilizaron la producción hacia la implementación de prácticas agroecológicas.

La búsqueda de alternativas que permitieran mantener la producción y los ingresos familiares de lxs productoxs,

así como favorecer su crecimiento, movilizó un conjunto de valoraciones que llevó a repensar la producción hortícola como una actividad asociada a nuevos elementos y roles no contemplados anteriormente. Se visibilizó la actividad biológica del suelo y el impacto perjudicial del uso de químicos a los nutrientes de la tierra, así como a la salud de lxs productorxs. Al mismo tiempo, promovió renovados roles de lxs productorxs, quienes se involucraron en etapas y decisiones que antes no les competían, lo que generó una nueva forma de dar sentido al trabajo y los elementos que lo componen.

Nuestro acercamiento a esta experiencia de cambio permite plantear algunas reflexiones finales. En primer lugar, la introducción de una nueva modalidad de producción y comercialización es el resultado de la conjunción de varios factores, y no de una causalidad lineal o unívoca. Los precios de los insumos y los avatares climáticos fueron el caldo de cultivo para que pudieran cobrar protagonismo otrxs actorxs, lxs técnicxs y profesionales en la temática (INTA y extensionistas universitarixs) y lxs promotorxs de las organizaciones de la economía popular. Aunque presentes desde antes, se incorporaron al escenario de producción en una coyuntura específica que permitió experimentar las nuevas formas de organización productiva y mercantil. Cabe señalar, sin embargo, que esta nueva forma más colectiva de organización no cambió el régimen de tenencia de la tierra. Lxs productorxs siguen trabajando sus parcelas –sean propias o alquiladas– de manera individual o familiar.

En segundo lugar, no se trata de una transformación total de la modalidad convencional a la agroecológica. Lxs productorxs incorporan lo nuevo, pero no desplazan totalmente la forma de producción y los canales de comercialización preexistentes. La incorporación de lo nuevo es gradual, en una combinación de consideraciones económicas que minimicen el riesgo, junto a las nuevas valoraciones adquiridas, referidas a la vitalidad de la tierra y a la salud

de productoxs y consumidorxs. El balance, creemos, es inestable, y habrá que seguir acompañando el proceso a lo largo del tiempo para constatar si, en el caso de la zona estudiada y sus productoxs, se trata de una respuesta a la coyuntura económica y climática vivida o si es el inicio de una transformación más profunda, que incorpora valores no mercantiles como la salud y la vida de la tierra.

En tercer lugar, el análisis realizado es un primer paso de un camino de investigación más amplio. Quedan muchas cuestiones abiertas, que formularemos aquí como preguntas. ¿Entre lxs productoxs, quiénes se incorporaron a la nueva modalidad y quiénes permanecieron en la agricultura convencional? ¿Hay dimensiones sociales reconocibles en esto? ¿Hay diferencias étnicas, de clase o nivel socioeconómico, de género, de edad, de composición familiar? En otro orden de preguntas, ¿cuáles son las desavenencias y los conflictos que la modalidad colectiva de decisión implica? Hemos hecho referencia a cambios importantes en la “sociabilidad productiva”: decisiones colectivas sobre quién produce qué, fijación de tareas y de precios, reparto de responsabilidades. ¿Cómo se establecen las jerarquías y los criterios de autoridad? ¿Qué relaciones de género, generación, y orientación política están presentes en esta nueva experiencia colectiva? ¿Cuál es el papel de las agencias estatales?

Finalmente, la agroecología como forma de producción (con sus connotaciones y valoraciones de la salud de la tierra y de la gente) y la venta directa o de cercanía son ideas promovidas en el mundo contemporáneo a nivel global. ¿Cuáles son las articulaciones entre las experiencias micro, individuales y grupales, en una zona específica cercana a la ciudad de La Plata, con este movimiento global? Cuando se habla de escalas de la acción social, sabemos que los entrelazamientos y solapamientos son permanentes. ¿Cómo mirarlos en espacios locales concretos?

En suma, este trabajo abre la puerta, a partir de la dinámica entre lo convencional y lo agroecológico, entre los remedios, los venenos y los preparados, entre la culata de

camión y el bolsón y la feria, para explorar y seguir investigando cómo se producen los cambios sociales, donde, para usar la formulación de Raymond Williams, nos encontramos con “lo hegemónico, lo residual y lo emergente”.

Bibliografía

- Arce, Alberto (2013). “Conocimiento, espacio y actores en la innovación social”. En Paz, Álvaro; Montoya, María Paz y Asensio, Raúl (eds.), *Escalando innovaciones rurales*. Lima: IDRC-CRDI-FIDA, pp. 37-86.
- Benencia, Roberto (1997). *Área hortícola bonaerense. Cambios en la producción y su incidencia en los sectores sociales*. Buenos Aires: La Colmena.
- Benencia, Roberto (2006). “Bolivianización de la horticultura en la Argentina”. En Grimson, Alejandro y Jelin, Elizabeth (comps.), *Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos*. Buenos Aires: Prometeo, pp. 135-167.
- Benencia, Roberto (2012). “Participación de los inmigrantes bolivianos en espacios específicos de la producción hortícola en la Argentina”. *Política y Sociedad*, vol. 49, n.º 1, pp. 163-178.
- Benencia, Roberto y Quaranta, Germán (2005). “Producción, trabajo y nacionalidad: configuraciones territoriales de la producción hortícola del cinturón verde bonaerense”. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n.º 23, segundo semestre. Buenos Aires: CIEA-UBA.
- Callon, Michel (2008). “La dinámica de las redes tecnológicas”. En Thomas, Hernán y Buch, Alfonso (eds.), *Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 147-184.
- Cieza, Ramón; Ferraris, Guillermina; Seibane, Cecilia; Larrañaga, Gustavo y Mendicino, Lorena (2015).

- “Aportes a la caracterización de la agricultura familiar en el Partido de La Plata”. *Agricultura Familiar, Agroecología y Territorio*, vol. 114, n.º esp. 1, pp. 129-142.
- Fingermann, Luciana (comp.) (2018). *La agricultura familiar en el área hortícola de La Plata, Berazategui y Florencio Varela: diversas formas de dependencia y el camino de construcción de su autonomía*. La Plata: Ediciones INTA.
- García, Matías (2012). *Análisis de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años. El rol de los horticultores bolivianos*. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.
- Goulet, Frédéric; Aulagnier, Alexis y Hubert, Matthieu (2020). “Del reemplazo tecnológico al desplazamiento de fronteras. Las alternativas a los agroquímicos en Argentina, Brasil y Francia”. En Mombello, Laura y Spivak L’Hoste, Ana (eds.), *Naturaleza y conocimientos en tensión. Aportes al debate ambiental desde las ciencias sociales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, pp. 279-300.
- Goulet, Frédéric y Vinck, Dominique (2013). “La innovación por sustracción. Contribución a una sociología del desapego”. *Redes*, vol. 19, n.º 36, pp. 13-50.
- Ingold, Tim (2010). “Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials”. *Realities Working Papers*, n.º 15.
- Marasas, Mariana (comp.) (2012). *El camino de la transición agroecológica*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Sarandón, Santiago y Flores, Cecilia (2014). *Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables*. La Plata: EDULP.
- Seibane, Cecilia y Ferraris, Guillermina (2017). “Procesos organizativos y políticas públicas destinadas a productores familiares del sur del Área Metropolitana (provincia de Buenos Aires, Argentina), 2002-2015”. *Mundo Agrario*, vol. 18, n.º 38). Recuperado de bit.ly/3avFuW0.
- Thomas, Hernán (2008). “Estructuras cerradas vs procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación

y cambio tecnológico”. En Thomas, Hernán y Buch, Alfonso (eds.), *Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 147-184.

Williams, Raymond (1997). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península.

6

Hortalizas, cuerpos y trabajo

La agroecología como discusión de las relaciones sociales de producción

SERGIO CAGGIANO

La primera impresión y la pregunta

Durante 2019, en momentos en que hacíamos nuestro trabajo de campo, la imagen de inicio del sitio web de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) mostraba sobre la izquierda la figura de una mujer con la gorra de la organización y un gran atado de acelga a la altura de su torso. A la izquierda, saliendo de cuadro, una parte del cuerpo de un hombre exhibía un manojó de remolachas. Hacia la derecha, por duplicación de un fragmento de la imagen, una plantación de brócolis cubría las dos terceras partes restantes de la pantalla (imagen 1). Si bien los brócolis, expuestos al sol en una plantación “a campo”, mostraban inevitablemente los bordes de algunas hojas levemente amarillentos, resaltaba el buen estado de las remolachas y de la acelga, de un verde brillante y parejo. En cambio, en las visitas a las quintas hortícolas, era común que lxs quinterxs¹ nos

¹ A lo largo del capítulo, utilizamos la X en la flexión nominal de género con el propósito de evitar cualquier modalidad de lenguaje sexista y agilizar su lectura.

mostrarán las picaduras, pequeñas manchas en las hojas y otras imperfecciones de sus productos. Esa era la prueba de que la producción era agroecológica, que no utilizaban agroquímicos. Según nos explicaban, si los insectos iban a la planta era porque no tenía “veneno”.

Imagen 1. UTT, sitio web



Fuente: bit.ly/3NCL9HS; último acceso: 9/07/2021.

Nos llamó la atención lo que interpretamos en ese momento como una tensión entre la exhibición de hortalizas perfectas y la exhibición de sus imperfecciones. Esta aparente tensión, que luego seríamos capaces de interpretar mejor, nos indicó hacia dónde dirigir la mirada analítica. Puesto que la agroecología no es solo una práctica agrícola, sino un movimiento social y político, lo que dicen y lo que muestran, como parte de lo que hacen, lxs productorxs, sus organizaciones y otrxs actorxs cercanxs resulta crucial para entender el carácter alternativo de la producción agroecológica de hortalizas en el Gran La Plata. ¿En qué consiste el reto que la agroecología coloca frente a otros tipos de producción?, ¿en torno a qué valores plantea sus disputas?, ¿cuáles son los lenguajes de valoración (Martínez-Alier, 2004) que se despliegan y se modelan en el

proceso?, ¿de qué manera conviven lenguajes de valoración distintos?, ¿cómo las valoraciones en juego se solapan, se articulan o se jerarquizan?

Para atender estas preguntas, nuestro foco recae sobre lxs productoxs hortícolas, las organizaciones sociales que lxs nuclean y algunxs profesionales de distintas dependencias del Estado que promueven y llevan adelante la producción agroecológica y a quienes, tomados en conjunto, referimos como lxs “hacedorxs de la agroecología”. Estxs actorxs se mueven, además, en campos de interlocución heterogéneos. Se vuelve preciso atender las relaciones con eventuales aliadxs y contrincantes en esos campos de interlocución para comprender el modo en que lxs hacedorxs de la agroecología se posicionan y moldean sus lenguajes de valoración.

Los datos con los que procuramos responder nuestras preguntas son producto del trabajo de campo presencial realizado durante 2019 y los primeros meses de 2020 en el cinturón verde de La Plata, y de entrevistas en línea efectuadas en plataformas virtuales durante las medidas preventivas de aislamiento social provocadas por la pandemia de COVID-19 durante 2020 y la primera mitad de 2021. Llevamos adelante visitas a las quintas, participamos en actividades de productoxs y de ellxs con diferentes visitantes (referentxs de organizaciones sociales, consumidorxs, profesorxs y estudiantes universitarxs, etc.) y mantuvimos entrevistas con productoxs hortícolas y con personal técnico de dependencias estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Asimismo, mediante el seguimiento de medios de comunicación masiva y de los sitios web de organizaciones que nuclean a productoxs agroecológicos de la zona, recopilamos un conjunto de discursos orales e imágenes visuales producidos y difundidos públicamente por estas organizaciones².

² El trabajo de campo fue realizado con la colaboración de la licenciada Candela Luquet.

En términos metodológicos, resultó fundamental la dialéctica entre texto e imagen (Burucúa y Malosetti Costa, 2012). El análisis articulado de los discursos verbales y las imágenes visuales nos permitió explorar las múltiples capas de sentido que conviven en el impulso a la agroecología. Si la profundización en los discursos nos permitió poner de relieve diferentes pliegues de sentido de las imágenes e indagar más allá de la primera impresión que pudieran generarnos, por ejemplo, los tonos de verde de hortalizas en buen estado, volver una y otra vez sobre las fotografías, por otra parte, fue crucial para comprender la riqueza intrincada de discursos agroecológicos que no se dejan atrapar en esquemas simples.

Los emprendimientos agroecológicos reclaman un lugar dentro del sistema de producción y comercialización de alimentos, y lo hacen en diálogo con consumidorxs, agentes estatales y productorxs no agroecológicxs. En algunos contextos la defensa de la agroecología toma la forma del discurso sanitario y de cuidado de la salud y el ambiente. En otros, sobresale la reivindicación de saberes ancestrales y del respeto por la Madre Tierra o la Pachamama. Estos valores conviven con cálculos de costos y estimaciones del tiempo de trabajo necesario para la producción, así como con consideraciones sobre el tipo de relaciones laborales y sociales en general. Pero no se trata de la simple coexistencia de lenguajes de valoración alternativos, sino de articulaciones específicas que los jerarquizan en una intervención sociopolítica que problematiza, en última instancia, el sistema de producción y comercialización de alimentos en su conjunto.

Ni convencional ni orgánico

En cuanto disciplina científica, práctica agrícola y movimiento social y político, la agroecología se expande a nivel

internacional desde mediados de 1970, como reacción a las distintas fases de “modernización” del campo impulsadas a nivel global por un conjunto de empresas multinacionales que constituyeron lo que se conoce como “revolución verde”. A mediados del siglo XX, la primera fase de la revolución verde, de industrialización agrícola, promovió en el sur global el monocultivo y la utilización de un paquete tecnológico integrado por maquinaria agrícola, irrigación intensiva, semillas híbridas, fertilizantes y pesticidas químicos. A mediados de la década de 1990, la segunda fase incorporó innovaciones de biotecnología e ingeniería genética e introdujo en el mercado los cultivos genéticamente modificados y el uso de pesticidas químicos de amplio espectro, como el glifosato, para su tratamiento. La revolución verde desembocó finalmente en el modelo de agronegocios, que se concentra en la producción de *commodities* para su comercialización en el mercado internacional.

Desde mediados de los noventa, el agronegocio en Argentina propició la extensión de la superficie sembrada con cultivos transgénicos, en especial con soja resistente al glifosato. Dada su integración vertical de elementos tecnológicos, financieros, productivos y organizacionales (Gras y Hernández, 2015, 2021), el modelo llevó a la concentración y el control de una porción sustantiva del sistema alimentario por parte de grandes empresas transnacionales (Giarracca y Teubal, 2017a). Ello trajo aparejado el desplazamiento de campesinxs y comunidades originarias. Asimismo, la imposibilidad de hacer frente a los costos de la producción capital intensiva provocó que sectores de la agricultura familiar demandaran e idearan modos de producción alternativos. Es en este contexto en el que, de acuerdo con Marasas, agricultorxs familiares y profesionales en el Gran La Plata y en otros lugares de Argentina encontraron en el enfoque agroecológico la oportunidad de desarrollar herramientas y conocimientos que les permitirían permanecer en su actividad (Marasas, 2012).

Las primeras resistencias a la revolución verde se dieron en la década del sesenta en países desarrollados en clave ambientalista, y poco tiempo después organizaciones de trabajadorxs rurales comenzaron a denunciar el impacto sanitario del uso de pesticidas. A comienzos de los noventa se formó la Vía Campesina, que contrapuso el concepto de “soberanía alimentaria” al de “seguridad alimentaria”, con el que suele justificarse la revolución verde (Wittman, 2011), y abrió la discusión acerca del uso de la tierra, el agua y las semillas (Figurelli, 2016).

En el contexto local, los primeros ensayos de agroecología también supusieron estrategias organizacionales y políticas junto con las productivas y económicas. Las organizaciones de productores en el cinturón verde de La Plata crecieron exponencialmente durante la segunda mitad de la década de 2010, y algunas de las que existían con anterioridad modificaron su perfil (Seibane y Ferraris, 2017; García, 2012; Ringuelet, 2008).

Como proyecto productivo, social y político, la agroecología dialoga con las mencionadas narrativas críticas e incorpora otros cuestionamientos a las pautas hegemónicas de producción y consumo. Aunque muchos emprendimientos se encuentren en la fase de transición a la agroecología (Marasas, 2012) y algunos utilicen agroquímicos en algún sector de su campo, la agroecología reclama su lugar postulando como antagonista al agronegocio y a la producción convencional de alimentos. “Somos el campo que alimenta”, uno de los eslóganes de la UTT, por ejemplo, apunta contra la producción de biocombustibles, aunque también contra la de productos transgénicos para la exportación. Al mismo tiempo, los nombres de algunas de sus campañas o acciones públicas, como “Comé sano. Comprá a *precio justo*”³ o “Alimentos sanos *para el pueblo*”⁴, o el eslogan de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-Rural), “Nuestro trabajo es el alimento *del pueblo*” (cur-

3 *Página 12*. “Quinteros. Precio justo y comida sana”, 15 de junio de 2019, disponible en bit.ly/justoysano; último acceso: 10/01/2022; y UTT, sitio web, disponible en bit.ly/3NCL9HS; último acceso: 10/01/2022.

4 “Alimentazo. Por un modelo que produzca alimentos sanos para el pueblo”, en BiodiversidadLA, disponible en bit.ly/Alimentosbio; último acceso: 10/01/2022.

sivas nuestras), señalan hacia un segundo frente de la contienda que la producción agroecológica pretende dar al llamar la atención sobre otra forma de producción de alimentos sanos: la orgánica, que, a cambio de abandonar los agroquímicos, encarece los productos, reservándolos para sectores sociales de altos ingresos. En el segundo frente de batalla, entonces, la agroecología se planta contra esta construcción de un coto de producción y comercialización de alta gama relativamente pequeño acaparado ya por grandes empresas.

Los lenguajes que despliegan y los valores que disputan y defienden lxs hacedorxs de la agroecología son diversos y se entrelazan de maneras complejas. Las líneas de argumentación y las categorías se engendran, pulen y transforman en una interlocución múltiple y tensionada. En la atención de los dos frentes de batalla interactúan entre sí lxs hacedorxs de la producción agroecológica (productorxs, técnicxs estatales, dirigentes de organizaciones sociales), e interactúan en conjunto con colaboradores (otrxs funcionarixs estatales, consumidorxs, otras organizaciones a diferente escala) y con contendientes (otrxs funcionarixs estatales, productorxs convencionales y orgánicxs).

Un nuevo conocimiento ancestral

En muchas de sus intervenciones públicas, las organizaciones de productorxs, profesionales de organismos como el INTA o la universidad involucradxs en la producción agroecológica, así como dirigentes políticxs que la apoyan, articulan el lenguaje de la ancestralidad. Contra el fondo no siempre explicitado de las empresas que no producen alimentos, sino biocombustibles, o que no elaboran alimentos sanos, sino transgénicos, la producción agroecológica es presentada como resultado de la revivificación de saberes tradicionales.

A finales de septiembre de 2019, por ejemplo, se llevó adelante en el Club Tarija, un club privado en la localidad de Olmos, en el Gran La Plata, propiedad de un grupo de productorxs hortícolas bolivianxs, un gran acto con motivo de la entrega de certificados de competencias a unxs setecientxs productorxs hortícolas locales. Del evento, promovido por el Ministerio de Educación de Bolivia, participaron el viceministro de Educación Alternativa, otrxs funcionarixs del Poder Ejecutivo boliviano, representantes consulares y de la Embajada, dirigentes políticxs locales, referentxs de organizaciones del cinturón verde de La Plata y cientos de productorxs de la zona. En este espacio de diálogo internacional e interinstitucional, tuvo un lugar destacado la apelación a la ancestralidad y los saberes tradicionales. El entonces embajador del Estado Plurinacional de Bolivia subrayó que lxs productorxs han aprendido en la “universidad de la vida, han aprendido de sus padres sus saberes ancestrales”. También en su alocución pública, un dirigente migrante destacó que en ese acto lograban reconocimiento del Estado “los saberes que hace miles y miles de años se transmiten de generación en generación”.

Por su parte, la UTT cita en una de sus notas en su sitio web a un investigador del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), nexo fundamental entre el INTA y las organizaciones sociales, que hace un señalamiento en la misma dirección:

Lo agroecológico implica que el productor esté en el campo, que conozca la tierra, que la perciba, que se genere un vínculo estrecho con la Pachamama. Un productor agroecológico conoce la vida del suelo, sabe de la necesidad de diversificar la producción. La agroecología apunta a que el productor se sienta pleno produciendo con la Pachamama y sienta que le da un servicio a la sociedad: alimentos sanos y vivos⁵.

⁵ UTT, “Certificaciones agroecológicas: sin veneno y con justicia social”, disponible en bit.ly/CertificacionesAgroeco; último acceso: 19/01/2022.

Convergentemente, las estrategias de comercialización de la producción agroecológica encuentran terreno fértil en marcos interpretativos transnacionales que vinculan la alimentación sana con el cuidado del ambiente y estas con los saberes campesinos tradicionales. La apertura de incipientes nichos de mercado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ha dado, en primer lugar, con la venta de bolsones elaborados y distribuidos por las organizaciones (principalmente la UTT y el MTE Rural), con la apertura de ferias urbanas promovidas o apoyadas por instituciones como la Universidad Nacional de La Plata con productoras de esas y otras organizaciones y, más tarde, con la inauguración de “almacenes agroecológicos” o “almacenes de ramos generales”⁶, mayoritariamente de la UTT, en varias ciudades. En este diálogo con consumidorxs de clase media urbana letrada, las organizaciones argumentan en clave del comercio justo, sin intermediarios, la producción natural de alimentos y la recuperación de saberes ancestrales y prácticas tradicionales.

La retórica de la ancestralidad, en síntesis, se apoya en la referencia a la transmisión generacional, que a veces refiere simplemente a los padres o abuelos y a veces proyecta una profundidad temporal de miles de años. Estos saberes transmitidos de manera informal y el contacto directo con la tierra originarían un vínculo estrecho con la Pachamama que podría asegurar su salvaguarda y cuidado. En ocasiones, el solo hecho de que lxs productoras sean migrantes bolivianas o sus descendientes parecería certificar el carácter tradicional de los saberes y las prácticas en juego. Esto trae aparejada una reificación de la ruralidad periurbana y de la bolivianidad como garantías de ancestralidad. Así, en sintonía con algunos estereotipos extendidos

⁶ La elección de este último nombre también actualiza la lógica del tradicionalismo y la autoctonía. Los almacenes de ramos generales fueron los establecimientos de comercio minorista que abastecieron zonas rurales y pequeñas poblaciones del interior argentino entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

socialmente (Caggiano, 2005 y 2019), la bolivianidad y la ruralidad, remitidas a un tiempo no presente, parecen constituir *per se* lo ancestral y lo tradicional.

Sin embargo, el lenguaje de la ancestralidad no replica en espejo la dicotomía sobre la cual se ha apoyado el cientificismo occidental, que separa un conocimiento tradicional estático e indisolublemente ligado a su contexto de aplicación del conocimiento científico occidental, considerado dinámico y abstracto y, por ello, universalizable (Agrawal, 1995). Tanto en las piezas de promoción y propaganda de la agroecología, como en las entrevistas y conversaciones casuales, lxs hacedorxs de la agroecología dejan ver las múltiples lógicas y prácticas productivas que la habitan. Lo que es resaltado en algunos foros públicos o ante consumidorxs de clases medias urbanas como conocimiento tradicional autóctono se asume también como resultado de un aprendizaje plurívoco entre productorxs, técnicxs de dependencias estatales y de la universidad con una gran variedad de trayectorias y procedencias.

En las charlas en sus quintas, al lado de las apelaciones a la ancestralidad, lo que sobresale más tarde o más temprano en el discurso de lxs productorxs al hablar de la experiencia migratoria y laboral es la novedad del trabajo en las huertas y el aprendizaje que este implicó. Generalmente, los invernáculos se les presentaron como una rareza al llegar a la zona, así como muchas hortalizas, especialmente las de hoja, que algunxs conocieron en ese momento. Muchxs debutaron como trabajadorxs hortícolas en el cinturón verde platense o en alguna parada previa de su itinerario migratorio.

Quienes han llegado de zonas rurales de Bolivia suelen recordar conocimientos transmitidos por padres, madres y abuelxs que se recuperan en el trabajo con las plantas o en el vislumbre del clima que se avvicina mirando el cielo, las nubes o la luna. Pero, al mismo tiempo, lo que destacan no es la continuidad con el pasado ancestral, sino la diferencia con la labranza para el autoconsumo de campos áridos, en los que se plantaba maíz, papa, quínoa, algún durazno o un poco de trigo. Para quienes han llegado, como Gerardo, de un barrio popular de

Tarija o de otro contexto urbano o periurbano, las novedades resultaron radicales.

... nos costó un poco agarrar el ritmo de acá, de aprender los trabajos, porque nosotros teníamos trece años, estábamos en la ciudad y salir de golpe también... Y bueno, llegamos al campo, pero no es lo mismo empezar a la rutina de todos los días de hacer esto, los trabajos de sembrar, regar y cosechar [...] para nosotros era todo nuevo (Gerardo, 35 años, productor MTE, agosto de 2019).

El carácter renovado y dinámico de tales saberes ancestrales puede apreciarse también en los materiales de difusión de las organizaciones, como en un video presentado el 22 de abril de 2020, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Allí, un productor que es parte del Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT discurre sobre principios, actividades y objetivos de la producción agroecológica. Sin solución de continuidad, su relato fusiona referencias a prácticas y conocimientos agrícolas de sus antepasados con sus propias producciones químicas caseras actuales. Las imágenes no muestran en ese momento al productor, sino escenas del trabajo en las quintas. Por ello, solo con una escucha cuidadosa del audio se puede advertir que se trata de un montaje, que las referencias al pasado y al presente provienen de momentos diferentes de su relato. El montaje refuerza la continuidad entre saberes:

Recuerdo mucho a mi abuelo, yo lo veía preparar la tierra, él dejaba que la tierra haga su trabajo, los microorganismos desarmen, preparen el suelo, él siempre me sabía hablar que el suelo tiene que calentarse, que prepararse el suelo para tener una producción buena. Tenemos calcio, potasio, fósforo, silicio. Es como un quelato que se prepara acá⁷.

7 UTT, 22 de abril de 2020, "Elegimos cuidar la Tierra", disponible en bit.ly/Elegimos; último acceso: 19/01/2022.

Los saberes tradicionales se combinan con la referencia a los quelatos, las memorias de lxs abuelxs y los intercambios con técnicxs universitarixs se combinan en la práctica cotidiana.

Tras la apertura musical del video, con acordes de cuerdas de charango, las primeras palabras del productor son “Entender la vida del suelo...”. ¿Qué significa la alusión a la “vida del suelo”? En una conmemoración del “Día de la Madre Tierra” o al lado de invocaciones a la Pachamama, la referencia a la vida del suelo parece funcionar como un reclamo de autenticidad. Pero la figura es utilizada también por ingenierxs agrónomxs del INTA o la universidad, al hablar, por ejemplo, del daño que puede causar a la tierra la producción convencional y al subrayar que “hay casos en los que han perdido mucha materia orgánica los suelos y tienen muy poca vida esos suelos” (Mario, Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar –IPAF– Región Pampeana, INTA, julio de 2021). Incluso las mismas palabras del investigador del CIPAF/INTA citadas antes adquieren otros matices si volvemos a observarlas. En ellas, conocer “la vida del suelo” y generar “un vínculo estrecho con la Pachamama” no significa sino comprender la importancia de la diversificación o rotación de los cultivos. Las referencias reúnen respeto, vínculo y conocimiento técnico, cuidado, sustentabilidad y estrategia productiva.

En conjunto, el discurso de productoxs, técnicxs y dirigentes de las organizaciones está atravesado de inestabilidad y ambivalencia, de la misma manera que sucede con la categoría “vida del suelo” en los pares “vida del suelo/Pachamama” y “vida del suelo/materia orgánica”. En ámbitos de interlocución con dirigentes políticxs y estatales de Argentina y Bolivia, y en mensajes dirigidos a posibles consumidorxs de clase media urbana, se despliega el lenguaje de la ancestralidad y la producción agroecológica es presentada como sana por ser tradicional. A la vez, lxs hacedorxs de la agroecología –tanto lxs quinterxs como lxs profesionalxs técnicxs– no ocultan el carácter actual, dinámico y

dialógico de sus conocimientos, la naturaleza heterogénea de sus componentes técnicos.

En otras palabras, los referidos saberes ancestrales son conocimientos recreados día a día, aplicaciones prácticas de recuerdos, aprendizajes previos que se actualizan muchas veces por contraste, técnicas que emergen del intercambio con profesionales del INTA y la universidad. Incluyen destrezas locales y también universitarias, y en su terminología combinan la interpretación de las fases lunares y el desarrollo de quelatos.

Apoyada en esta apelación ambivalente e inestable a saberes tradicionales, la agroecología ofrece alimentos sanos contra la amenaza algo indefinida del agronegocio y de la producción de hortalizas con agroquímicos. Da forma, de este modo, a un conflicto en el que se utilizan lenguajes de valoración inconmensurables (Martínez-Alier, 2004; Svampa, 2013). La salud humana, los saberes autóctonos y la vida de la tierra (y la Tierra) contra la ganancia económica y la rentabilidad del agronegocio. Se abre así un horizonte político en el que, como señalara Graeber, siguiendo a Turner, lo que está en juego no es –o no es solo– “la lucha por la apropiación del valor, es la lucha por establecer qué es un valor” (Graeber, 2001: 88) o por imponer un lenguaje de valoración por sobre otros (Martínez-Alier, 2004).

Pero la defensa de la alimentación sana e incluso de los saberes tradicionales no es potestad exclusiva de estos movimientos y de este tipo de producción de hortalizas. La parcial superposición de estos argumentos y valores con la producción orgánica y, sobre todo, la diferenciación respecto de lxs actorxs que la llevan adelante permite dar un paso más en la comprensión del desafío que plantea la agroecología.

La certificación participativa de un sistema de producción

Luego del llamado a “entender la vida del suelo”, el protagonista del citado video continúa: “...la vida humana, la nutrición de las personas, la nutrición de toda la humanidad”. Sus palabras cierran el video de esta forma: “...en cuanto tiene nutrición la verdura, tenemos una población sana, una población que puede pensar, es más lindo la economía, pienso yo, sería un mundo más justo”. ¿De qué manera la agricultura saludable se vincula con la nutrición de toda la humanidad, con una mejora económica, con un mundo más justo?

Aunque sin referencia alguna a una nutrición universal ni a la justicia en el mundo, la defensa de la salud y el ambiente y la apelación a formas tradicionales de producción también son comunes en los emprendimientos de agricultura orgánica de los que lxs productoxs agroecológicxs se distinguen rotundamente. La huerta La Anunciación, por ejemplo, ubicada en Abasto, en el cordón verde platense, y que se presenta como “el primer establecimiento hortícola orgánico”⁸, argumenta su cuidado de la salud de los suelos, las personas y el ecosistema, al tiempo que echa mano de la retórica de lo “tradicional”. En un folleto virtual, sostiene que “la agricultura ecológica revitaliza las comunidades rurales” y que su innovación reside en que “combinan las prácticas tradicionales con las más modernas”⁹. La Charamusca, otra huerta orgánica de la región, ofrece productos que resultan de la aplicación de técnicas de trabajo “basadas en las tradiciones agricultoras que se fundaron y desarrollaron en las regiones de Santiago del

⁸ La Anunciación. Sitio web disponible en bit.ly/3wXnc7z; último acceso: 20/01/2022.

⁹ La Anunciación. Sitio web disponible en <https://bit.ly/3xfX9Kh>, último acceso: 16/05/2020.

Estero y Buenos Aires antes de la aparición del uso de químicos sintéticos”¹⁰.

Donde se aprecia la distinción entre ambos tipos de producción es en otro aspecto sobre el que insisten las empresas orgánicas y sobre el que recientemente intervienen las organizaciones agroecológicas: la certificación de la agricultura. Los emprendimientos orgánicos exhiben claramente con cuál empresa certificadora trabajan. El correspondiente sello es un elemento importante de su presentación visual. Las organizaciones de productoxs agroecológicxs, a su turno, plantean una disputa en torno a la certificación que tiene ribetes económicos, políticos y morales. No se trata solo de ajustarse a la lógica del capitalismo cognitivo y tratar de conseguir una suerte de derecho de propiedad que permita el cercamiento de un nicho de mercado (Moulier Boutang, 2004; Vercellone, 2004). La disputa expone también el sentido de esa certificación y de su proceso de obtención. La cuestión es doble: quién certifica y qué se certifica.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha reglamentado la producción orgánica mediante la Resolución n.º 493 de 1992. Allí no solo define detalladamente lo orgánico y las normas para su producción, que incluyen la no utilización de productos de síntesis química, la sustentabilidad y el manejo racional de los recursos naturales. También estipula la necesidad de un sistema de certificación que queda en manos de un conjunto de empresas privadas especializadas¹¹. Si bien la posterior Resolución n.º 374 de 2016 habla de “entidades certificadoras” y admite la posibilidad de que sean tanto públicas como

¹⁰ Huerta Orgánica. Sitio web publicitario, disponible en bit.ly/3x189JU; último acceso: 11/01/2022.

¹¹ SENASA. Resolución n.º 423 de 1992, disponible en bit.ly/orgSenasa; último acceso: 20/01/2022.

privadas, hasta donde hemos podido constatar, las certificaciones efectivas están a cargo solo de estas últimas¹².

Una de las mencionadas productoras orgánicas, la quinta La Anunciación, certifica sus productos, por ejemplo, con la empresa Food Safety. Las leyendas que se suceden en el *slider* del sitio web de esta empresa configuran el horizonte en el que la certificación de los productos orgánicos adquiere sentido: “Comprometidos con el desarrollo y el progreso”, “Agregamos valor a su producto”. Además de un “mejor aprovechamiento de los recursos” y el acceso a “un mercado diferenciado”, la “certificación de alta calidad con reconocimiento internacional” conecta con el hecho de que “la tendencia mundial hacia el consumo saludable es creciente”, lo cual constituye también uno de los fundamentos de la reglamentación de la producción orgánica del propio SENASA. Una de las leyendas en el *slider* de Food Safety tiene la fuerza de un eslogan publicitario: “certificar. Un paso clave para concretar los mejores negocios”¹³. Resumidamente: desarrollo a través de valor agregado para acceder a mercados diferenciados a escala internacional que redundarán en mejores negocios.

Las organizaciones de productorxs agroecológicxs vienen trabajando en sistemas participativos de garantía (SPG) como alternativa a esta certificación en manos de una tercera parte. Algunxs miembros de la UTT incluso hablan de “autocertificación”, porque es la propia organización la que conduce el proceso, aunque con la participación activa de dependencias estatales y de consumidorxs. La introducción paulatina de los SPG en América Latina se ha dado desde los primeros años de este siglo, y en Argentina es aún

12 La Resolución n.º 374 del SENASA recupera la n.º 493, la Ley 25.127 de “Producción ecológica, biológica u orgánica de los sistemas agropecuario y agroindustria decretos” de 1999 y otras resoluciones y decretos posteriores vinculados al tema. Ver SENASA, Resolución n.º 374 de 2016, disponible en bit.ly/Res374-2016; último acceso: 20/01/2022.

13 FS Certificación, sitio web, disponible en bit.ly/3wZOFqr; último acceso: 15/01/2022.

incipiente, aunque algunas experiencias pueden rastrearse en la segunda mitad de 2000 (Fernández, 2018), en ocasiones tomando como modelo los antecedentes en otros países de la región, como lo hace la UTT con el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil. Los SPG no tienen reglamentación del SENASA ni un marco normativo específico a nivel nacional, aunque se han forjado algunas normas locales y provinciales (Fernández, 2018) y se ha presentado en el Congreso nacional un proyecto de ley de “fomento a la producción agroecológica rural y urbana”¹⁴. Pero la regulación de estos sistemas es un aspecto controvertido dentro del movimiento agroecológico por temor a la normalización del proceso y a que se limite el protagonismo de las propias organizaciones de productoras en el proceso.

Las dos mayores organizaciones de productoras agroecológicas del cinturón verde de La Plata, el MTE y la UTT, iniciaron el desarrollo de los SPG. En 2018 un equipo de investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP coordinó con productoras de dos organizaciones –Manos de la Tierra y MTE– y con consumidoras agroecológicas una serie de talleres que al año siguiente desembocarían en el diseño conjunto de una “Guía de observación de los sistemas en transición agroecológica”. El equipo interdisciplinario ajustó más tarde esa guía en

¹⁴ El proyecto fue presentado por el diputado nacional Luis Contigiani en marzo de 2020, recuperando el presentado por la diputada Alicia Ciciliani a mediados de 2016. Prevé la creación del Sistema Nacional Único de Certificación Participativa, coordinado por el INTA, que sostiene “como principios y valores” lo siguiente: “a) construir sistemas productivos económicamente viables; b) preservar los recursos naturales y su biodiversidad; c) promover la soberanía, seguridad y salubridad alimentaria; d) promover la dignidad del trabajo de la familia de los agricultores; e) acceso de toda la población a los productos agroecológicos; f) promover los circuitos cortos de comercialización; y g) comercio y precio justo para el productor y accesible para el consumidor”. Crea además la marca “Producto Agroecológico” con Denominación de Origen Controlada. Ver Proyecto de Ley, Expediente 0332-D-2020, 6 de marzo de 2020, disponible en bit.ly/pro0332; último acceso: 20/01/2022.

dirección a poner a punto un SPG (Barrionuevo, Gargoloff y Velarde, 2019). Apenas más tarde, la UTT desde el CoTePo iniciaba su propio camino, que la llevó a fines de 2019 a solicitar colaboración al IPAF-Región Pampeana del INTA, que trabaja con perspectiva agroecológica. Conjuntamente elaboraron una ficha de campo para hacer un seguimiento de la aplicación de las nociones compartidas previamente en talleres y el diagnóstico de los problemas que pudieran surgir en su puesta en práctica. La primera visita a campo se realizó en mayo de 2020.

En cuanto a qué certificar, la discusión que la producción agroecológica plantea a la orgánica es si se certifica solo el producto –para obtener un precio mayor– o si se certifica, junto con él, las prácticas y relaciones sociales de producción y comercialización. Según lxs productorxs agroecológicxs, la certificación orgánica solo garantiza que no se hayan utilizado agroquímicos en la producción de determinado alimento, pero nada dice de las condiciones de trabajo en que se ha producido. En el INTA sostienen que los SPG buscan certificar “sistemas productivos más que [...] cultivos aislados, incluyendo componentes sociales como las características que asumen la contratación y condiciones de vida de la mano de obra”¹⁵.

Entrar en el circuito de producción agroecológica y participar de los SPG implica para lxs productorxs, además, ingresar también en sus circuitos de comercialización (ferias, bolsones, tiendas especializadas). Esto conlleva la posibilidad de planificar su producción, lo cual es muy valorado por productorxs que no tienen margen para el riesgo financiero. La planificación permite un relativo control de los vaivenes del mercado. Como señala un productor integrante de la CoTePo, “todo lo que se planifica, entonces, está

¹⁵ Vergara, Laura y Zeballos Bianchi, Bernardita. “Certificación participativa para valorizar la producción agroecológica”, en *INTA Noticias*, 22 de agosto de 2019, disponible en bit.ly/certificacionparticipativa; último acceso: 15/01/2022.

vendido antes de plantarla”, y eso permite evitar la incertidumbre de la venta “a culata de camión” (Rubén, 32 años, productor UTT, junio de 2021).

La planificación, además, incluye decisiones sobre el valor de la mercadería. Los precios de venta se definen en asambleas cuatrimestrales de las que participan lxs productorxs y quienes integran los circuitos de comercialización. “Se ve cuánto trabajo se invierte en la lechuga, por ejemplo, y si gasté tanto, entonces tiene que valer tanto” (Rubén, 32 años, productor UTT, junio de 2021). Las palabras de este productor sintetizan dos elementos centrales del lenguaje de valoración económica: el tiempo de trabajo invertido y los costos de producción. Su breve frase parece invocar en un solo golpe teorías del valor enfrentadas (Ricardo, Marx, Smith), pero que superpuestas convergen en señalar la intención de controlar el precio de la oferta.

En resumen, el terreno de la salud y las tradiciones, del cuidado del ecosistema y la armonía con la tierra, en apariencia compartido por los proyectos orgánicos y los agroecológicos, se devela como una plataforma sobre la cual florecen las divergencias. Si la retórica de la naturaleza y de las técnicas tradicionales de producción permite a la producción orgánica acceder a un mercado diferenciado de alta gama, y si su certificación permite concretar “mejores negocios”, para lxs productorxs agroecológicxs abre un horizonte de discusión e intervención sobre las condiciones de trabajo y producción en las quintas, sobre el precio y el valor de sus productos, intentando conformar una oferta con precio accesible para un público potencialmente masivo, al tiempo que suficiente para atender las necesidades de lxs productorxs.

El punto no es cuál es la articulación discursiva más correcta o legítima. Tampoco es simplemente cuál logra mayor eficacia. Lo importante es cómo una y otra ordenan de manera diferente los intereses y valores en juego. Desde la perspectiva agroecológica, el carácter saludable de los alimentos y el carácter tradicional o ancestral de

la producción no pueden escindirse de la discusión de las condiciones de trabajo y de vida de lxs pequeñxs agricultorxs familiares. Desde la perspectiva orgánica, el carácter saludable de los alimentos y el tradicional de las técnicas de cultivo están ineludiblemente ligados a la “certificación de alta calidad con reconocimiento internacional” y, consecuentemente, a su alto precio y a la ocasión de hacer buenos negocios. Al mismo tiempo, claro está, los buenos negocios atados a la producción de alimentos orgánicos no son equivalentes a los de la producción de biocombustibles o de *commodities* transgénicos, sostenidos desde la perspectiva de la revolución verde.

En el apartado anterior vimos que la producción agroecológica desafía la lógica del agronegocio, la rentabilidad y el cálculo costo-beneficio al reivindicar valores inconmensurables con ella, como el cuidado de la salud y el ecosistema, mediante la recuperación de saberes tradicionales. Ahora, al revisar el modo en que se distancia y se contrapone a la producción orgánica, podemos apreciar el componente económico que el reto de la agroecología entraña. Dicho en otras palabras, si, en un encuadre determinado de la discusión, la agroecología expone la relevancia de valores inconmensurables con los valores económicos, en otro encuadre recuerda y defiende otros valores económicos, que se distancian de los hegemónicos.

Martínez-Alier señaló que ciertos movimientos sociales de los pobres resultan ecologistas al procurar sacar los recursos naturales del ámbito de la *crematística*, “el estudio de la formación de los precios de mercado para ganar dinero”, y devolverlos al de la *oikonomia*, “el arte del aprovisionamiento material de la casa familiar” (Martínez-Alier, 2004: 44). De manera similar, el desafío ecologista de lxs productorxs agroecológicxs parece residir no tanto o no solo en el carácter saludable de sus alimentos y en lo poco agresivo de sus técnicas de intervención en el ambiente, sino en la búsqueda de definir una *oikonomia* en la que se reduzcan los riesgos, se ajusten los precios a los valores de producción,

lo cual los vuelva más accesibles para lxs consumidorxs, y se acorten así, literal y metafóricamente, las distancias del mercado, entre productorxs y consumidorxs.

La mostración de la producción y el trabajo

Si volvemos a la fotografía analizada al comienzo (imagen 1), la presencia de las personas en ella y el modo de mostrarlas se vuelven más significativos de lo que en una primera impresión pudo parecernos. El hecho mismo de que el cuerpo del varón a la izquierda aparezca ostensiblemente cercenado ofrece una clave interpretativa. Si puede cortarse su cabeza es porque no se trata de un retrato individual que busca hacer foco sobre la personalidad del o de lxs retratadxs (Vale de Almeida, 2000; Caggiano, 2012). El motivo de la toma no son sus rostros, sino las manos con las hortalizas. Y las manos están sucias, como no puede ser de otro modo después de trabajar la tierra.

La centralidad que tienen aquí las personas y su trabajo se revela con más fuerza en contrapunto con las imágenes de las empresas de producción orgánicas, en las que las personas están completamente ausentes. Las fotografías del *slider* de presentación y del interior del sitio de La Anunciación, por ejemplo, ofrecen tomates, tubérculos, hojas con brillo y atractivos colores, pero en todo el sitio no es posible advertir presencia humana alguna (imagen 2). El contraste con las numerosas fotografías que la UTT coloca en su sitio web no puede ser mayor: en todas ellas hay personas. En la mayoría estas se encuentran trabajando o exhibiendo el fruto de su trabajo en las quintas, al lado de las plantas (imagen 3). También el pictograma del MTE-Rural muestra campesinxs trabajando la tierra y el producto de su trabajo¹⁶. Un tercer conjunto de fotografías comúnmente usadas

¹⁶ Para la UTT, ver bit.ly/3ITbyFP, y para el MTE-Rural, bit.ly/3tsRTRL.

por la UTT exhibe asimismo el producto del trabajo, pero esta vez en actitud de reclamo o reivindicación. Avanzando por calles céntricas en marchas de protesta o en reuniones con dirigentes en palacios de gobierno, lxs productoxs y dirigentes llevan en sus manos hortalizas y las elevan con movimientos enérgicos (imagen 4). Son parte de la lucha. Y no lo son solamente como una suerte de bandera o estandarte. Más que esto, las hortalizas aparecen como la continuación del cuerpo de lxs trabajadorxs que marchan. Sus brazos y manos terminan en berenjena, morrón o lechuga. Lo que todas estas imágenes muestran es la relación de esos cuerpos con el trabajo y con el producto de su trabajo. Y en la dirección inversa, el mensaje es igualmente significativo: no hay berenjena, morrón o lechuga que no estén conectados al cuerpo de unx trabajadorx. Esto sucede en las fotos de marchas, en las que exhiben los productos como un ofrecimiento y en las que muestran escenas de trabajo.

¿Podría ser de otro modo? En efecto, las empresas productoras de orgánicos, en sus páginas de comercialización, recurren al formato visual que es regla entre las tiendas de este rubro, como se aprecia en la imagen 5. Una cuadrícula aséptica donde se expone cada producto separado del resto y a veces, como en el ejemplo, de cualquier otra cosa, incluso una superficie de apoyo. Las hortalizas son imágenes en un recuadro de la pantalla, suspendidas en un espacio-tiempo que se pretende inmaterial. La asepsia icónica que el *e-commerce* ha consagrado no hace sino redoblar el conjuro general de la visualización orgánica: no producción, no tierra, no trabajo, no microorganismos, no personas.

Imagen 2. La Anunciación, sitio web



Fuente: bit.ly/3PQXdY3; último acceso: 10/1/2022.

Imagen 3. UTT, sitio web



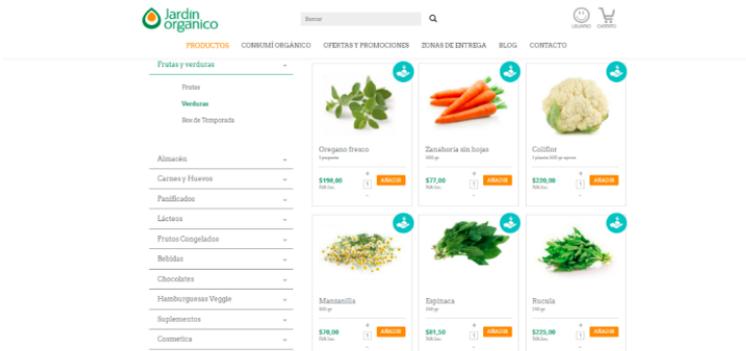
Fuente: bit.ly/3ITbyFP; último acceso: 10/01/2022.

Imagen 4. UTT, sitio web



Fuente: bit.ly/3ITbyFP; último acceso: 9/07/2021.

Imagen 5. Jardín Orgánico, sitio web



Fuente: bit.ly/3Ni5SkR; último acceso: 23/10/2021.

Frente a esta exacerbación de la representación que aspira a aislar un conjunto de trazos de forma y color y evita cualquier rastro de la existencia de las hortalizas anterior a convertirse en píxeles en una pantalla, las fotos de la producción agroecológica, en cambio, muestran continuidades materiales y se presentan ellas mismas como fragmento de

un contexto mayor. Los bordes de las fotos evidencian la continuidad con el fuera de campo, que en este caso es, justamente, el campo. Personas, animales, plantas y objetos se cortan en los recuadros fotográficos manifestando ser parte de ese contexto mayor. Lo que muestran, a su vez, se dispone en continuidad. Producen visualmente la continuidad. Las escenas están protagonizadas por hortalizas, cuerpos, manos y tierra encadenados. Estos encadenamientos dan cuenta del proceso de trabajo y de lucha. Resulta muy difícil imaginar como parte del repertorio visual de las organizaciones agroecológicas hortalizas que, como las de la imagen 5, no muestren su conexión con la tierra, sea en las manos o en el surco, que a su vez conectan con el cuerpo de lxs trabajadorxs y con su trabajo.

Conclusiones

La introducción y los primeros pasos hacia la agroecología en el Gran La Plata dan lugar al despliegue de una diversidad de lenguajes de valoración. De cara a la revolución verde, en general, y a su impacto en la producción de alimentos, lxs hacedorxs de la agroecología contraponen valores como la vida y la salud, que no se dejan medir según los parámetros de aquella. La presentación de saberes técnicos en la lógica de la autenticidad y las tradiciones profundas es una herramienta en uno de los principales campos de esta disputa con distintos frentes, aunque no dejen de manifestar abiertamente que el trabajo cotidiano entreteje las memorias con la innovación, las técnicas aprendidas en la práctica con principios corroborados en laboratorios.

De cara a la producción orgánica, que hace suyos aquellos valores del cuidado del ambiente y la salud, al punto de que los mecanismos de certificación respectivos operan el cercamiento de un nicho de mercado, y que apela incluso a la terminología de la tradición, la producción agroecológica

subraya la necesidad de garantizar alimentos libres de químicos, pero también un sistema productivo libre de explotación, de acaparamiento y de inestabilidad financiera. De esta manera, no solo repone las diversas desigualdades de clase que atraviesan el mundo de la agricultura, en general, y el de la producción de alimentos, en particular, sino que expone el que consideramos su desafío más radical: discutir las condiciones de producción y la forma actual del mercado de alimentos.

Siendo las imágenes “vectores privilegiados de la polivalencia de lo humano” (Burucúa y Malosetti Costa, 2012), su estudio permitió ver los diferentes valores y horizontes de intervención social y política en juego. Al mismo tiempo, el contraste entre imágenes puestas a circular por distintos actorxs y su análisis articulado al de discursos verbales permitió advertir un aspecto que, en su sencillez, resulta una clave de nuestro problema: el paisaje visual de las organizaciones agroecológicas está poblado por personas que se muestran en relación de continuidad y contigüidad con el campo y con el producto de su trabajo en el campo: manos con tierra, hortalizas con tierra, cuerpos doblados sobre el surco, hortalizas como extensión de las extremidades del cuerpo, ahora elevadas en el grito de protesta, antes reclamando su cosecha desde el suelo. Como en respuesta a la “agricultura sin agricultores” del agronegocio (Giarracca y Teubal, 2017b), mostrando la continuidad y necesidad mutua de lxs trabajadorxs del campo y su cosecha.

La agroecología como forma de producción de alimentos alternativa se basa, en el cordón verde platense, en emprendimientos de baja capitalización que pueden mantenerse y reproducirse mediante el acceso regulado a la tierra y la organización y el relativo control de los canales de comercialización, que brindan cierta estabilidad a los precios. “Se prioriza la optimización de la productividad del sistema, a partir de mejorar el aprovechamiento de los recursos y obtener rendimientos suficientes para garantizar la calidad de vida de la familia productora”. Se trata

de “lograr un equilibrio en el manejo del agroecosistema” (Marasas, 2012: 13) que permita no ya maximizar los rendimientos y la ganancia, sino minimizar los riesgos.

Por ello su lucha múltiple en torno a los valores, además de poner en el centro valores externos a la economía, como la salud, el cuidado de la vida y del ambiente, también implica una revisión, en el interior de la economía, del valor del trabajo y del precio de los alimentos. Como comprendió Martínez-Alier, “los pobres suelen ser versátiles” (Martínez-Alier, 2001: 127), en lo que hace a sus lenguajes de valoración, pues “el ‘ecologismo de los pobres’ en el Tercer Mundo combina una preocupación sobre el medio ambiente con una inquietud más visible por la justicia social” (Martínez-Alier, 2001: 128). El ecologismo de los productoras hortícolas migrantes pobres también reside en parte en tironear la producción de alimentos desde el negocio y la maximización de ganancias hacia el aprovisionamiento material del hogar. Así, este ecologismo va mucho más allá de la composición química de los alimentos que consumimos. Conduce hacia una problematización profunda de la organización de la *oikonomia* que mantiene abiertas preguntas estimulantes: ¿qué es un mercado de alimentos?, ¿quiénes y cómo participan?, ¿qué relación guardan con la mercancía que circula allí?

Bibliografía

- Agrawal, Arun (1995). “Dismantling the Divide Between Indigenous and Scientific Knowledge”, *Development and Change*, vol. 26, pp. 413-439.
- Barrionuevo, Cintia, Natalia Gargoloff e Irene Velarde (2019). “Diseño participativo y aplicación de una ‘guía de observación de los sistemas en transición agroecológica’”, en La Plata (Argentina), *XXXII Congreso Internacional ALAS*, Perú, del 1 al 6 de diciembre.

- Burucúa, José Emilio y Laura Malosetti Costa (2012). “Una palabra equivale a mil imágenes. Polisemia, grandeza y miserias de las representaciones visuales”, *Concreta*. Valencia, pp. 6-13.
- Caggiano, Sergio (2005). *Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Caggiano, Sergio (2012). *El sentido común visual. Disputas en torno a género, “raza” y clase en imágenes de circulación pública*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Caggiano, Sergio (2019). *Las migraciones como campo de batallas. Desigualdades, pertenencias y conflictos en torno a la movilidad de las personas*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Fernández, Rosa (2018). *Sistemas Participativos de Garantía Agroecológicas en la Argentina*. Trabajo final, Especialización en Agroecología, Universidad Nacional de La Matanza.
- Figurelli, Fernanda (2016). “Alimentación, vida y naturaleza: La construcción de lo campesino entre movimientos populares agrarios”, *Mundo Agrario*, vol. 17, n.º 36. Recuperado de bit.ly/3LYSYGD.
- García, Matías (2012). *Análisis de la estructura agraria hortícola platense en los últimos 20 años. El rol de los horticultores bolivianos*. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata.
- Giarracca, Norma y Miguel Teubal (2017a). “Las actividades extractivas en la Argentina”. En Teubal, Miguel (ed.), *Norma Giarracca: Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el sur. Antología esencial*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 423-450.
- Giarracca, Norma y Miguel Teubal (2017b). “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del ‘agronegocio’: el caso argentino”. En Teubal, Miguel (ed.), *Norma Giarracca: Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el sur. Antología esencial*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 349-380.

- Graeber, David (2001). *Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Gras, Carla y Valeria Hernández (2015). “Negocios, biotecnologías y desarrollo en el agro argentino”. En Svampa, Maristella (ed.), *El desarrollo en disputa: actores, conflictos y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea*. Los Polvorines: UNGS, pp. 69-110.
- Gras, Carla y Valeria Hernández (ed.) (2021). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos, pp. 14-39.
- Marasas, Mariana (comp.) (2012). *El camino de la transición agroecológica*. Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Martínez-Alier, Joan (2001). “Justicia ambiental, sustentabilidad y valoración”, *Ecología Política*, n.º 21, pp. 103-134.
- Martínez-Alier, Joan (2004). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria.
- Moulier Boutang, Yann (2004). “Riqueza, propiedad, libertad y renta en el capitalismo cognitivo”. En VV. AA., *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 107-128.
- Ringuelet, Roberto (2008). “La complejidad de un campo social periurbano centrado en las zonas rurales de La Plata”, *Mundo Agrario*, vol. 9, n.º 17.
- Seibane, Cecilia y Guillermina Ferraris (2017). “Procesos organizativos y políticas públicas destinadas a productores familiares del sur del Área Metropolitana (provincia de Buenos Aires, Argentina), 2002-2015”, *Mundo Agrario*, vol. 18, n.º 38. Recuperado de bit.ly/3LUJSe8.
- Svampa, Maristella (2013). “‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, *Nueva Sociedad*, n.º 244, pp. 30-46.
- Vale de Almeida, Miguel (2000). “Corpos marginais: notas etnográficas sobre páginas ‘de policía’ e páginas ‘de sociedade’”, *Cadernos Pagu*, n.º 14, pp. 129-147.

- Vercellone, Carlo (2004). “Las políticas de desarrollo en tiempos del capitalismo cognitivo”. En VV. AA., *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 63-74.
- Vergara, Laura y Bernardita Zeballos Bianchi (2019). “Certificación participativa para valorizar la producción agroecológica”, en *INTA Noticias*, 22 de agosto, disponible en bit.ly/certificacionparticipativa.
- Wittman, Hannah (2011). “Food Sovereignty: A new Framework for Food and Nature”, *Environment and Society*, vol. 2, n.º 1, pp. 87-105.

